

SOCIEDAD Y POLITICA 10

COMO USAR
LA DEMOCRACIA anibal quijano

¿ QUE PASARA
CON EL APRA ?

césar germaná

OPORTUNISMO Y GOLPISMO EN LA
IZQUIERDA lópez soria

BOLIVIA: CAUSAS DE LA DERROTA
josé oruro

POLONIA: PC ENTRE EL PODER Y LA
REVOLUCION krystof pomian

SOCIEDAD Y POLÍTICA

AÑO 3 - REVISTA TRIMESTRAL - No. 10 - NOVIEMBRE 1980 - LIMA-PERU

DIRECTOR: Aníbal Quijano
REDACCION: Roberto Arroyo
César Germaná
Mirko Lauer
Rodrigo Montoya
Peri Paredes
Felipe Portocarrero
Manuel Valladares
Abraham Zevallos
DISEÑO GRAFICO: Jesús Ruiz Durand

INDICE

EDITORIAL	Pág.
Los usos de la democracia burguesa Aníbal Quijano	2 7
La crisis del Apra César Germaná	17
Bolivia: La tragedia de las equivocaciones José Oruro	25
Oportunismo y golpismo en la izquierda José Ignacio López Soria	42
Periodistas: De una patronal a otra Mirko Lauer	47
Polonia: PC ¿Fuerza dirigente o instrumento de dominación? Krystof Pomian	51

Apartado 11154 Santa Beatriz - Lima-Perú
Publicación y Distribución: Empresa Editora Sociedad y Política.
Suscripción Anual: En el Extranjero \$ 20
Para Suscripción y Correspondencia dirigirse a Sociedad y Política. Ap. Postal 11154,
Santa Beatriz, Lima - Perú.

Perugraph Editores S.A.
Fco. Lazo 1537 - Lince, Tel: 71-8319

SOCIEDAD Y POLITICA es una publicación vinculada al Movimiento Revolucionario Socialista (MRS), como instancia de elaboración y de debate de los problemas de la revolución socialista en el Perú, y está abierta a todos los que puedan contribuir con honradez y con solvencia a este debate.

ESCRIBEN EN ESTE NUMERO

César Germaná, Mirko Lauer y Aníbal Quijano, son ya conocidos de los lectores de "Sociedad y Política". En todo caso, véase el N° 8 de la revista, para referencias.

José I. López Soria: Investigador en Ciencias Sociales y Filosofía. Profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, Autor de **Los Modos de Producción en el Perú**. Mosca Azul, Editores. Contribuye frecuentemente en revistas del país y del extranjero. Actualmente prosigue una investigación sobre George Lukács, sobre cuya obra ha hecho ya varias publicaciones.



mosca azul editores

acaba de publicar

CRISIS Y RECUPERACION

La economía peruana de los años

70 a los 80

por Felipe Portocarrero

**CAPITALISMO Y NO-CAPITALISMO
EN EL PERU**

*Un estudio histórico de su articulación en
un eje regional*

por Rodrigo Montoya

pedidos

La Paz 651 - Miraflores

¿BELAUNDE AMPARA EL TERRORISMO DE GORILAS EXTRANJEROS EN EL PERU?

En nuestra edición anterior, protestamos contra la extensión del terrorismo represivo de los gorilas argentinos en nuestro país y contra la complicidad de autoridades militares peruanas en tan execrables hechos. No obstante la vasta repercusión de esa criminalidad de gobiernos extranjeros en nuestro suelo, el gobierno del Sr. Belaúnde y de Acción Popular se ha mantenido pasivo.

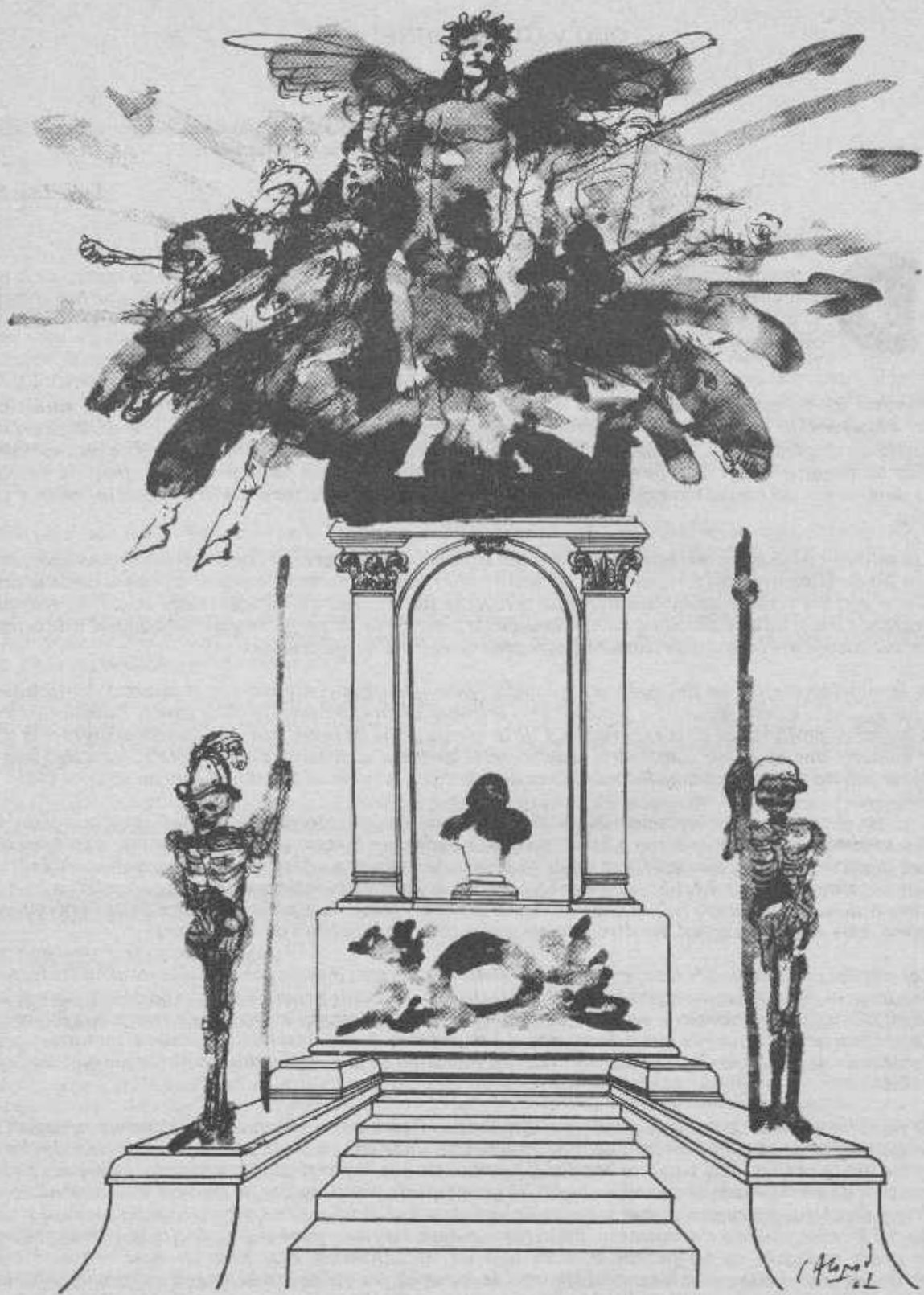
Poco tiempo después, son ahora los gorilas bolivianos quienes se han permitido usar nuestra propia capital para actos de terrorismo represivo contra ciudadanos de ese país, y de nuevo con la no desmentida complicidad de las autoridades principales del ejército peruano. Y de nuevo, también, el gobierno del Sr. Belaúnde y de Acción Popular, prefiere darse por no enterado.

¿Es que vamos hacia la conversión del territorio peruano en campo de criminalidad terrorista de gobiernos y de ejércitos extranjeros, con la complicidad del ejército peruano y la tácita autorización de nuestro propio gobierno elegido precisamente para defender la democracia y hacer valer una Constitución que consagra el respeto y el desarrollo de los derechos humanos?

Nadie con mediana sensatez podría engañarse sobre las consecuencias de esta cadena de terror represivo en el futuro del Perú, ni eludir por lo tanto su responsabilidad frente a tales hechos. Estos no pueden, no deben repetirse y sus autores no pueden quedar impunes, si queremos evitar que el país sea atrapado en esta sangrienta trampa. Debemos protestar y protestamos. Pero no basta. Tenemos la obligación de movilizar todas las fuerzas para exigir al gobierno del Sr. Belaúnde que en lugar de amenazar a los trabajadores peruanos con la represión por reclamar pan y trabajo, asuma su responsabilidad frente a la prepotencia terrorista de gobiernos y ejércitos extranjeros en nuestro país, impida estos crímenes y sancione a sus culpables.

Las organizaciones de los trabajadores, las agrupaciones políticas, la prensa y los parlamentarios, deben también encarar su propia responsabilidad ante estos hechos.

Lima, Noviembre de 1980.



Dibujo de Carlos Alonso

EDITORIAL

¿QUO VADIS, DOMINE?

"Como en las caudalosas llanuras del poniente el cielo es monumental, pero la tierra es pobre".

Jorge Luis Borges

Dos meses apenas después de la instalación del nuevo gobierno, con el respaldo masivo de la votación civil y de las fuerzas armadas, nadie en el Perú podría no ver las trizaduras que han comenzado a hacer visibles las graves fallas estructurales — como los arquitectos dirían — en la edificación del consenso que los materiales electorales parecían fundar.

Mientras los trabajadores, cercados por más de cinco años de represión, desempleo, inflación, reducción del poder adquisitivo de los salarios y de la provisión de servicios sociales, salen a las calles y se declaran en huelga demandando empleo y mejoras salariales, la política económica de Belaúnde-Ulloa se destina a profundizar y a ampliar las líneas centrales de la que se inició bajo Morales-Silva Ruete, en favor de una más completa y concentrada dominación del capital monopolístico internacional, y que implica precisamente desempleo, inflación y bajos salarios.

Los intereses inmediatos que representa y ejecuta la fracción burguesa en el poder estatal, chocan abiertamente con los de la inmensa mayoría de los explotados, tanto más intensamente cuanto más rápidamente se desenvuelve la política económica belaundista, que aprovecha nada menos que la legitimidad inicial del reemplazo democrático a una odiada dictadura militar, es decir, la votación de las propias masas trabajadoras y de la mayoría de sus direcciones políticas de izquierda, para acelerar el curso de sus acciones.

A la movilización de los trabajadores explotados, Belaúnde-Ulloa contestan con el escarnio del reclamo de "tregua laboral", a pesar de que las propias cifras acumuladas en el mensaje de Ulloa ante el Parlamento, sirven para probar la profundidad de la explotación y de la miseria a que las masas han sido sometidas durante la dictadura militar y que no deben continuar si la democracia burguesa ha de servir a los explotados para algo más que legitimar con sus votos la continuidad más franca de la política económica dictatorial bajo un régimen civil.

Y como el movimiento obrero-popular no puede, aunque quisiera, otorgar esa "tregua", Belaúnde y sus principales ministros salen a las tribunas oficiales para amenazarlo con la represión y para conminar a las fuerzas policiales la ejecución de esa sentencia, por supuesto dentro de las leyes y de la democracia. Los choques de los trabajadores contra los palos y las bombas lacrimógenas de la policía, los racimos de tropas policiales en las calles, continúan siendo el decorado habitual del escenario peruano, como ilustración dramática de que la democracia burguesa, bajo el régimen actual, no sirve para alterar las bases de la política de la dictadura.

Las amplias masas trabajadoras que votaron por Belaúnde, en gran medida por las ilusiones alimentadas por la izquierda en el cielo de las promesas belaundistas de devolverles sus derechos democráticos de empleo y salarios suficientes, sin duda comienzan a sentir en la prolongación de su miseria la vanidad de semejantes ilusiones. Y las organizaciones de izquierda que votaron por el belaundismo como "mal menor" frente al monstruo aprista, se encuentran de improviso marchando del brazo del monstruo en la empalmeada oposición parlamentaria y en las calles.

El rápido desocultamiento de la ficción del "mal menor" para las masas, que probablemente esperaban más lento los dueños de Acción Popular y las fuerzas armadas, dada una votación tan amplia y desde todos los sectores sociales y políticos del país, fue sin duda, mucho más que el marginal ejercicio pedagógico, extraviado de contexto y de sentido aunque fueran honradas las gentes que lo practican, lo que impulsó las escaramuzas entre un jefe policial que procuraba acuciar la represión con el cuento de un plan subversivo a escala nacional y su Ministro del Interior saliendo a desmentirlo. Banal como parece, este dato pone al descubierto la ansiedad represiva y de poder replegado en las fuerzas armadas bajo las circunstancias, especialmente si se considera que el gobierno, sin llegar hasta quitar la cara del Ministro de la escena, fue obligado a batirse en retirada inventando un modo tonto de desagrar al jefe policial en lugar de sancionarlo. No será una sorpresa si es el Ministro mismo el que sea obligado a ocupar un cargo diplomático u otro, para dejar el Gabinete. De todos modos, el gobierno civil depende tanto del poder militar que hasta ahora no ha podido o no ha querido romper la pesada losa que sobre la democracia puso la dictadura con la Ley de Movilización Nacional, rigurosamente apta para enmarcar, legalmente, una dictadura fascista cuando sea conveniente a la burguesía y a las fuerzas armadas.

EDITORIAL

Esos no son los únicos elementos que van acortando el horizonte de la democracia burguesa en el Perú post-velasquista, en duración y en profundidad. La manera intensa en que, no obstante su carácter gradual, se pone en acción la política económica de Belaúnde-Ulloa para impulsar la concentración de capital bajo control monopolístico internacional, no puede evitar introducir brechas en el seno mismo de la burguesía, levantando la protesta de la mediana y pequeña burguesía industrial, principalmente, por los efectos que recaen sobre ellas por la política comercial, fiscal y monetaria del régimen, en el mismo momento en que arrecian las presiones de los trabajadores. Esos conflictos dentro de la burguesía ya están repercutiendo y tenderán a desarrollarse, en el seno de la alianza AP-PPC y dentro de las propias huestes de Acción Popular, y agotando las virtudes de la retórica señorial del Arquitecto.

Por otro lado, en el derrotado partido aprista, huérfano del carisma aglutinador de Haya, no sólo porque él tenía un lugar y un papel patriarcal, sino ante todo porque esas calidades contenían en un único mando todas las contradicciones del universo aprista, las luchas de clases surcan de punta a cabo todo su territorio social y orgánico, diferenciándolo entre las principales líneas de su contradictoria historia y estructura. Hasta hoy, han asomado solamente las diferencias del ala más liberal de la socialdemocracia criolla con el grueso del partido. Pero no hay duda de que dentro de ese último, corrientes aún más radicales pugnan por expresar las presiones populares y que no tardarán en salir a la superficie.

De ese modo, la expectativa de un orden bi-partidista para la estabilización de la democracia burguesa en el país, con turnos entre los liberales (vestidos de parches populistas) y los socialdemócratas (en la oposición, radicales), para mantener a las masas prisioneras entre esas opciones, encuentra bases cada vez más precarias para sostenerse.

En resumen, rápido agotamiento de las ilusiones belandistas entre los trabajadores organizados y reingreso de la represión policial contra sus movilizaciones reivindicativas. Fracturas de potencial desarrollo en el seno de la burguesía y de sus representaciones políticas en el gobierno. Fracturas de dudosa curación en el partido político más capaz de impedir la corrida de las masas hacia organizaciones de izquierda, mientras dure el actual gobierno. Primeras escaramuzas con las fuerzas policiales, que no estarían desvinculadas de las desazones en las fuerzas armadas. Todo eso, en sólo dos meses!

LAS PERSPECTIVAS PROXIMAS

Sería simplista desprender de este cuadro, que las tendencias que lo configuran van a desplegarse cada una y en conjunto todas sus virtualidades de manera inevitable y a ritmo rápido, haciendo que el régimen se descomponga pronto.

La experiencia de la dictadura militar es aún demasiado viva entre las masas y la burguesía. Cada cual por sus propias razones, no están listas para desprenderse del manto de la recién ganada democracia burguesa. La segunda, porque mientras la presión de las masas y las fricciones entre sus propias fracciones puedan todavía ser administradas, puede usar extensamente la legitimidad y la legalidad del régimen civil para avanzar en la reorganización de las bases de su ganancia y de su poder. Las primeras, porque no obstante que las concesiones que el gobierno ha hecho hasta ahora a sus demandas son insuficientes, han conseguido algunas importantes aunque parciales y por sectores, especialmente los asalariados de la administración pública, y en consecuencia pueden mantener una buena parte de sus expectativas en el nuevo gobierno.

Si bien la mediana y pequeña burguesía industrial están muy inquietas con las medidas arancelarias y financieras de Belaúnde-Ulloa, en cambio la mediana y pequeña burguesía agraria y comercial pueden encontrar razones importantes para mantener su adhesión básica al gobierno, puesto que a la primera se le otorga incentivos de precios, y la segunda puede pensar que la ampliación de la importación y la reactivación general del comercio le permitirán beneficiarse. Y desde luego la burguesía que controla los negocios de la construcción, así como la amplia capa media profesional ligada a ella, saben que apenas comienza su propio festín en esta etapa. Son

EDITORIAL

mucho más amplias y más influyentes políticamente todas estas fracciones burguesas y capas medias, que los grupos de mediana burguesía industrial que protesta. Debe recordarse que frente a esa protesta, la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), hizo público su apoyo a las mismas medidas.

Las fuerzas armadas están a cubierto de cualquier presión importante por su participación en la corrupción de estos doce años, y sus privilegios institucionales garantizados plenamente. Una buena parte de sus cuadros salió de la agitación administrativa respirando aliviada, y sus mandos principales cogobiernan desde sus cuarteles. Y aunque la agitación social actual no es pequeña, tampoco da muestras de encontrar canales orgánicos y políticos para desarrollarse pronto hasta convertirse en una amenaza próxima de caotización política, y generar en las fuerzas armadas tendencias de rápido regreso al primer plano del poder político.

El Estado puede aún disponer de recursos suficientes como para canalizarlos a la creación de empleo coyuntural de magnitud no desdeñable, por medio del negocio de la construcción de caminos, de vivienda y de edificaciones públicas. A medida que esos planes se materialicen en los próximos meses, un sector de trabajadores considerable, aunque no mayoritario, entre la masa desempleada, puede ser retenido mientras eso dure en sus expectativas sobre este gobierno o por lo menos fuera de la movilización reivindicativa más radical.

Así, pues, las bases objetivas y políticas para administrar los conflictos actuales, amortiguando su potencial explosivo, están aún a disposición del gobierno belaudista. Y, además, la izquierda organizada en su amplia mayoría, claramente concentra sus esfuerzos en ganar a las masas para el apoyo a la acción parlamentaria o en el terreno que puede aún ganar electoralmente en otras instituciones menores del Estado burgués, terrenos en los cuales por el casi completo control del belaudismo-bedoyismo y por la debilidad de la propia estrategia de movimientos de la izquierda, ésta no puede convertirse por modo alguno en un factor de conflicto muy importante.

La división en las filas del Apra, por el momento va resultando en la moderación de los arrestos radicales del sector oficial, para dar cabida a una conciliación con los sectores liberales: es posible que el descontento de las bases más radicales con esa conducta de sus dirigentes lleve a desprendimientos de algunas de esas bases, e inclusive a manifestar su descontento concurriendo a la votación de la izquierda en las próximas elecciones municipales. Pero, en todo caso, esa conciliación interna entre las direcciones de las principales corrientes del Apra, implica igualmente una conciliación real con el régimen belaudista, más allá de gestos efectistas en el parlamento, en aras de la defensa de la democracia, formalmente, y de intereses de importantes sectores de mediana y pequeña burguesía y de capas medias profesionales y burocráticas, en realidad.

Por tales razones, es improbable que las tendencias iniciadas hacia el deterioro de las bases políticas del nuevo régimen tengan un desenvolvimiento precipitado, sin que eso niegue la continuidad de su actuación. Lo que no es improbable, en cambio, es la creciente reducción de los límites del ejercicio democrático de los derechos de las masas, de modo más o menos rápido. En otros términos, el régimen belaudista puede defender su estabilidad y administrar sus conflictos a costa de limitar en amplitud y en profundidad su carácter democrático.

Y nada eso es inesperado o sorprendente. En América Latina lo que sería sorprendente sería una democracia burguesa exenta de represión abierta y de límites legales y administrativos a los derechos de las masas, y en particular en un país de pobre desarrollo capitalista, atravesado de las urgencias de reorganización de la estructura de acumulación y distribución del capital monopólico internacional. El cielo ideológico socialdemócrata o liberal-populista puede ser monumental, pero su tierra es miserablemente pobre en el Perú.

EL CAMINO DE LOS TRABAJADORES

Dentro de este cuadro y de estas perspectivas coyunturales, cuya duración dependerá mucho de cómo actúen las masas explotadas y sus direcciones políticas, tanto como del comportamiento del capital internacional y de su crisis, aquellas confrontan un problema central: la defensa y la ampliación del espacio político de ejercicio de sus derechos democráticos, marco y base de todo avance y aún de mantenimiento de sus conquistas materiales y políticas hoy.

Contra el mendaz macartismo de la campaña de prensa de la burguesía, las luchas de los explotados en la actual coyuntura no tienen, ni pueden tener un carácter subversivo. Por la elemental razón de que ni política, ni

orgánicamente, tenemos todavía la fuerza necesaria para desembarazarnos de los límites de la democracia burguesa imponiendo la democracia directa de los trabajadores y venciendo la otra opción burguesa de sostener su dominio, la dictadura militar.

De allí no se sigue, en sentido alguno, que nuestra tarea sea la defensa de la democracia burguesa tal como ella puede existir en nuestra tierra, sino la necesidad de luchar por ampliar y profundizar el espacio del ejercicio de nuestros derechos democráticos dentro del marco democrático-burgués.

La burguesía trata de imponernos la idea y la práctica de que la única forma de ejercicio de nuestros derechos democráticos, es participar en sus instituciones políticas formales, el parlamento, sus tribunales de justicia, sus instancias administrativas y sus ejercicios electorales, porque sabe que en ellas puede ejercer todo su control, e impedir que prosperen nuestras demandas y necesidades. Una buena parte de las actuales direcciones de izquierda, concurren a abonar esa imposición, porque su práctica y en ciertos casos también su predica, arrastran a las masas al apoyo de esos partidos para que ellos participen en esas instituciones.

No se trata, como es obvio, de no participar en esas elecciones e instituciones del Estado burgués. Pero es solamente una de las arenas de la lucha democrática, y no es la principal. Puesto que en esas formas, de antemano sabemos que no podemos conseguir sino muy poco de lo que necesitamos, es la movilización directa, con nuestras propias organizaciones de base (sindicatos, comités locales, organizaciones barriales), el terreno principal de nuestra acción, y para apoyar ésta es que deben ser usadas la institucionalidad y la legalidad del Estado burgués.

No se trata, por eso, de pedir al gobierno de Belaúnde que cumpla con sus promesas. No se puede curar una ilusión (haber creído en promesas, u sabiéndas de que Belaúnde es el jefe de la clase enemiga) con otra peor (creer que efectivamente Belaúnde puede beneficiar a los trabajadores contra la burguesía). De lo que se trata es de impedir que lleve a la práctica su política al servicio del capital imperialista e interno, asociados, hasta donde nos permitan nuestras fuerzas en cada momento.

Para eso, es la organización de nuestras fuerzas la condición principal. Esas fuerzas no pueden provenir de luchas dispersas, aisladas y puramente reivindicativas contra los efectos de la política del gobierno y de los empresarios y no contra esa política misma, global y sectorialmente. Y no pueden desarrollarse tomando parte solamente en las discusiones parlamentarias o en las elecciones, sino participando en ellas para desarrollar nuestras luchas directas.

La lucha por defender, ampliar, profundizar el ejercicio de nuestros derechos democráticos (que incluyen empleo, salarios, servicios de educación, de transporte, de vivienda, de salud, de servicios de agua, luz, alcantarillado, etc.), requiere no solamente luchar por mejorar en cada empresa los salarios y obtener empleo o reposición en el empleo, sino también y ante todo cuestionar la entera política económica del Estado, causa de los bajos salarios, de la falta de trabajo, de alzas de precios y de escasez de servicios y de bienes.

Y nada de eso podría hacerse sin unificarnos, sin centralizar y coordinar todas nuestras organizaciones en todas partes, de modo estable y no solamente fugaz como en los últimos paros nacionales, y sin impedir la apropiación burocrática de la dirección de nuestros organismos que impide la presencia y la dirección desde las bases, rompe y divide nuestros movimientos y abre el paso al éxito de la represión.

De esa orientación de nuestras luchas, y de esa unificación orgánica, depende absolutamente la conquista de nuestras actuales reivindicaciones ahora. Y en ellas solamente puede fundarse, la defensa victoriosa contra la represión y las amenazas de regreso de una dictadura militar mucho más represiva que cualesquiera antes; y solamente de ellas puede partirse al desarrollo de nuestra fuerza revolucionaria en el camino al poder.

Los revolucionarios socialistas, ante todo, tenemos la responsabilidad de estas tareas básicas. Solamente en la medida en que nos empeñemos en ellas, podremos afirmar las bases ya reales de nuestra lucha por la dirección revolucionaria de las masas.

EDITORIAL

El desastre de ARI y la derrota electoral de las masas, ha permitido que la unidad de la izquierda se reconstituya ahora bajo la dirección de las corrientes más confusas y fluctuantes; pasada la oportunidad de que esa unidad pudiera consolidarse bajo la dirección revolucionaria socialista, debido a la torpeza política de las agrupaciones trotskistas. Y en el terreno electoral próximo, esa unidad actual debe ser sostenida.

Sin embargo, la unidad de la izquierda como tal no significa hasta ahora la unidad del movimiento de masas, a través de la unificación y centralización de sus organizaciones de base, precisamente porque gran parte de esta izquierda no está interesada en ello, para poder arrastrar a las masas solamente al apoyo de los partidos en su labor dentro del terreno parlamentario o en las otras instituciones formales del Estado burgués. La unificación de las masas, la centralización de sus organismos y la canalización de sus movimientos hacia la lucha directa, por la ampliación de sus derechos democráticos hoy, dentro del marco burgués, y por la imposición de la democracia directa de los explotados mañana, no se desarrollará sin la dirección de los revolucionarios socialistas. Esa es nuestra responsabilidad de hoy.

Lima, octubre de 1980.



LOS USOS DE LA DEMOCRACIA BURGUESA

Se atribuye a Milciades Peña, el brillante científico social argentino malogrado en plena juventud, haber señalado en una ocasión que los nuestros son países del como si... en todo lo que se refiere al desarrollo de las bases materiales, sociales, culturales y políticas capitalistas de estirpe "occidental".

Las distancias y desencuentros entre los hechos objetivos y las representaciones ideológicas, a los que aludía el agudo argentino, en nuestros países no resultan solamente de la historia local sino que revelan o desocultan lo que produce la dominación imperialista, pues gran parte de los sustentos de esa ideología provienen de la experiencia burguesa de Europa y de los Estados Unidos, en la que se funda el provincianismo eurocentrista en la reflexión de algunos de los más influyentes teóricos revolucionarios.

Esos rasgos del proceso histórico de los países latinoamericanos aparecen particularmente pronunciados en el destino que hasta ahora ha tenido la experiencia de los regímenes democrático burgueses. Pues no obstante la demostrable objetividad de los límites históricos que aquellos han demostrado ser impotentes para rebasar en su desarrollo, en toda América Latina, una parte todavía importante de las clases dominadas y las capas medias próximas a ellas y sus tendencias y organizaciones políticas, mantienen todas sus expectativas sobre la materialización efectiva y plena de ese régimen político, precisamente en un período en que tales expectativas van mostrando su carácter en última instancia ilusorio frente al desapego creciente de la propia burguesía en la viabilidad real del mantenimiento de su dominio bajo un régimen democrático.

En América Latina, la democracia burguesa ha resultado ser hasta ahora realizable sólo a medias allí donde ha encontrado bases de estabilidad prolongada como en México; de duración más corta cuanto más plenamente se desarrollaba, como en Uruguay y Chile; de limitado alcance y de indecisa estabilización en otros como Venezuela y Colombia, a pesar de sus recursos materiales; siempre precaria e inestable en algunos como Perú, o directamente una imposibilidad histórica como en Bolivia de hoy.

Y nada de eso es un accidente histórico, ni se trata de algo que tiene vitalidad suficiente como para ir asentándose con el tiempo. No lo primero, porque nada es más claramente establecido en la historia contemporánea que el hecho de que solamente aquellas formaciones sociales en donde se produjo una revolución industrial desde dentro, y revoluciones burguesas profundas fundadas en aquella, han podido desarrollar todo lo que podía esperarse históricamente de un régimen político ya limitado por su naturaleza de clase, como marco de un orden social de dominación. Y nada de eso ha ocurrido y obviamente no podrá ocurrir más en lugar alguno de América Latina. No lo segundo, porque es igualmente evidente que conforme avanza el tiempo — es decir, el desarrollo de las luchas de clases en el orden capitalista mundial y la crisis del propio modo de producción capitalista— es precisamente en países como los de América Latina donde la burguesía, interna e internacional, se descubre en cada momento cada vez más urgida de tirar por la borda las reglas del juego democrático para poder sostener su dominación. La democracia, bajo un manto burgués, va convirtiéndose en estos países y tanto más subdesarrolladas sus bases capitalistas y más profundo su sometimiento imperialista, en un juego de imposibilidades cuyo desemboque no puede ser sino — como lo muestran cada vez más numerosos ejemplos— o la derrota de las masas acaudilladas por direcciones que sólo buscan la afirmación de la democracia burguesa, o la imposición de la democracia con otro contenido de clase, como democracia de los trabajadores.

anibal quiñano

Porque es cada vez menos conveniente para la burguesía, la democracia burguesa es cada vez menos viable para los trabajadores. Solamente asumiendo a fondo todas las implicaciones de esta innegable tendencia de la historia política actual de América Latina, las masas y sus direcciones políticas pueden movilizarse victoriosamente en la lucha por la democracia. Es verdad indudable la que expresa la formulación circulante hoy en muchos países de que la lucha por la democracia es hoy una consigna revolucionaria. Pero a condición de reconocer que no puede culminar victoriosamente como democracia burguesa, aunque las masas se movilicen inicialmente pugnando por conquistarla. Las experiencias de Cuba antes y la de Nicaragua hoy, si ésta se consolida, son la más acabada demostración de ello, así como en su sentido negativo, la reciente derrota en Bolivia.

Para los trabajadores explotados y los revolucionarios peruanos, lo que aquellas verificaciones plantean es el problema de los usos de la democracia burguesa en relación a las necesidades de la lucha por la democracia, que, como acabamos de ver, no puede afirmarse y vencer sino como democracia de los trabajadores, si de lo que se trata es realmente de conquistar una democracia real y no solamente la sustitución de la dominación burguesa por una burocrática que, desde el punto de vista de la democracia, es en muchos sentidos un retroceso respecto de las conquistas de las masas en las democracias burguesas plenamente desarrolladas. El debate sobre este problema no puede estar ausente entre nosotros hoy día, porque de la claridad que las masas adquieran sobre eso y de sus decisiones dependerá no solamente el destino estratégico de sus luchas, sino lo que puedan conquistar dentro de la propia situación actual.

CAPITAL Y DEMOCRACIA EN EL PERU POSTVELASQUISTA.

Aparentemente, las reformas realizadas en el período velasquista han permitido instalar bases suficientemente firmes para el advenimiento del régimen democrático burgués como marco estable de la vida política del país.

En efecto, erradicadas las bases materiales del poder de las fracciones oligárquicas de la burguesía y de sus aliados gamonales, y en gran medida también sus productos sociales y políticos; desplazado el eje de dominación política a la nueva burguesía urbano-industrial modernizada y reorganizada; ampliadas y tecnocratizadas en gran parte las capas medias, que han podido desprenderse de su antigua condición y función de clientela asumiendo el papel de aliado indispensable en la administración del capital y del Estado y en consecuencia aptas, en principio, para abandonar el viejo y tradicional terreno de la oposición antioligárquica y ejercer la intermediación ideológica y política entre el nuevo poder burgués y los dominados, base insustituible en todas partes para la estabilidad de la democracia burguesa; las masas trabajadoras de la ciudad y del campo en pleno curso de organización pero aún bajo la clara hegemonía política de direcciones reformistas y prisioneras de ideologías que prolongan radicalizándolas formulaciones heredadas del período de luchas antioligárquico-nacionalistas, y hasta capaces, como se acaba de ver en las últimas elecciones, de ilusionarse con la más burguesa de las candidaturas membretándola de "mal menor" a pesar de la probada experiencia con el enorme calibre de ese mal. Y encima, inclusive un "carterismo" aún interesado en lavar de la cara del más feroz Estado imperialista de todos los tiempos, la sangre de las masas del Cono Sur, tratando de restaurar el atractivo de una democracia parametrada sobre las masas en movimiento en los demás países, para evitar que sus luchas por la democracia rebasen el marco burgués, como en Cuba o Nicaragua. Todo

parecería concurrir a la afirmación de las bases de la democracia burguesa en este país.

No obstante, todos esos nuevos elementos se establecen precisamente en un escenario nacional e internacional cuyo comportamiento de conjunto está presidido por otros factores que neutralizan y tendencialmente llevan a la anulación de las virtualidades democrático-burguesas que aquellos pudieran haber materializado bajo otras condiciones históricas. Tales otros factores son las imperiosas necesidades del capital dentro de la actual crisis y de sus consecuencias sobre la redistribución del poder dentro del bloque imperialista, que incluye la reorganización de la estructura internacional de producción, de trabajo y de intercambio y antes que nada la reposición de las bases de tasas de ganancia tan altas como sea posible.

En el caso peruano, esas necesidades del capital tienen manifestaciones ya plenamente visibilizadas desde el régimen militar de Morales Bermúdez y especialmente desde el Ministerio Silva Ruete y que se presentan bajo Belaúnde-Ulloa de modo aún más definido.

En las páginas de esta revista, ya hemos tenido ocasión de señalar las más importantes de esas necesidades y tendencias de actuación del capital. En primer término, se trata de una más profunda integración del capital que opera en el país en la estructura internacional de producción y de mercado, bajo el control más pleno de la burguesía monopólica internacional.

Dado el carácter no solamente subdesarrollado sino extremadamente desigual del capital en este país, esa integración mayor y más profunda en el capitalismo internacional, no podría ser de modo alguno realizada sobre el conjunto de la economía peruana. Se requiere, por el contrario y como se observa ya sin dificultad, concentrar al máximo la capacidad productiva en unos pocos rubros en los cuales la burguesía monopólica internacional está interesada, no solamente porque se trata de aquellos en los cuales se produce valores de uso de importante demanda internacional, sino porque sobre esa base tales rubros son los únicos en los cuales aquella burguesía puede obtener las más altas tasas de ganancia, operando en el Perú.

Así puede hacerse, dependiendo en cada momento de los cambios en los ciclos del mercado internacional, con los minerales y energéticos, con la producción pesquera, de algodón, azúcar y café, maderas, principalmente, y secundariamente con los pocos productos de manufactura fabril establecidos en el país y capaces aún, fluctuadamente, de acceder al mercado internacional.

Hacerlo implica condenar a una situación de estancamiento permanente a todo el resto de la estructura productiva nacional, y desprenderse del mercado interno de todos esos productos exportables y al mismo tiempo de todos aquellos cuya producción se estanca o aún va eliminándose. Y, de otro lado, implica igualmente dividir acordemente el mercado de mano de obra, entre una minoría requerida para sostener la producción exportable y que por la naturaleza de competencia oligopólica del mercado internacional no puede ser muy amplia para el caso peruano y no puede por eso mismo necesitar una masa muy grande de mano de obra, y la gruesa mayoría de ésta condenada a una situación permanente de sub y desempleo y para la cual, coyunturalmente y mientras el Estado pueda disponer de recursos puede ser posible la creación de fuentes de empleo de corta duración y de bajos salarios.

En segundo lugar, para que esa producción exportable pueda ser realmente colocada en el mercado internacional debe asegurarse su capacidad competitiva. Lo cual, dada la base tecnológica instalada en el país, tiene que reposar ante todo en la reducción del costo de la mano de obra implicada. Como es conocido, esa reducción se apoya, a su vez, en la extensión

de la mano de obra de reserva y marginada, en el uso del trabajo a destajo y a domicilio y en el uso de recursos tecnológicos de gran productividad pero que no requieren sino bajos o a lo sumo medios niveles de calificación de la mano de obra, como en el caso de los llamados microprocesos. Y, desde luego, forzando a los trabajadores a producir por su propia cuenta una parte importante de los bienes y servicios que sirven para reproducir su fuerza de trabajo, tal como ocurre hoy en las barriadas con la autoconstrucción de la vivienda, de los servicios urbanos, inclusive el recojo de basura.

En tercer lugar, el mercado interno "solvente" —como gustan decir los economistas burgueses con toda propiedad— no atendido por la producción interna, tiene que ser satisfecho por la importación de la producción internacional. Esa "demanda solvente" no puede ser sino en muy pequeña parte integrada por los trabajadores, ya que ellos en su mayoría quedan sub o desempleados y los ocupados con salarios bajos en promedio. La parte mayor y más solvente del mercado interno es naturalmente la burguesía y las capas medias prósperas. El reducido volumen demográfico de tales consumidores es compensado por una creciente reconcentración del ingreso en ese sector.

En cuarto lugar, una parte importante del capital dinero no puede ser invertido en proyectos productivos, desde que se afirma la concentración productiva en la exportación limitada en su amplitud por la del mercado internacional al que puede tener acceso. En consecuencia, ese capital busca rentabilizarse rápidamente en aquellos rubros de rápida rotación de capital, tendiendo a la ampliación de los mecanismos especulativos de acumulación que son, naturalmente, de carácter financiero y comercial. Y de ese modo, puede crecer la espiral inflacionaria, inclusive más allá de la necesidad estructural del conjunto del capital, bajo la crisis, de despojar, a los trabajadores por la vía de los precios de los bienes y servicios, de los recursos que les entrega como salario.

Para que semejante orden capitalista pueda operar, es indispensable que el control del capital sea ejercido de manera total y concentrada por la burguesía monopolista más poderosa (internacional interna, asociados, lo que incluye al Estado), y eso implica no solamente el sometimiento de los explotados, sino también, necesariamente, el debilitamiento y eventual destrucción de sectores importantes de la mediana burguesía y no solamente de la pequeña.

Las consecuencias políticas del desarrollo de esas tendencias de comportamiento del capital en el Perú, son visibles hoy día en sus tramos iniciales y previsibles las líneas de su desenvolvimiento. Las masas no pueden dejar de movilizarse en demanda de empleo y de salarios, en lucha contra la inflación y contra el conjunto de la política económica burguesa, en procura de servicios y de bienes y de mejores condiciones de trabajo y de vida en general. Y de su lado, los grupos burgueses adversamente afectados por la concentración de capital y la reducción de sus recursos y del mercado, al mismo tiempo que enfrentados a la presión de sus propios trabajadores, no pueden dejar de reivindicar frente al Estado contra ambos problemas.

De ese modo, al enfrentamiento entre la burguesía y su Estado, de un lado, y la gran mayoría de los explotados, del otro, se suman los conflictos al interior de la propia clase burguesa. Y las capas medias, en tal escenario, no pueden ejercer de modo normal su papel de intermediación ideológica y política entre las clases y entre las fracciones de la clase dominante y tenderán a diferenciarse en corrientes tironeadas por esas contrapuestas presiones.

El desarrollo de una política económica centrada en esas líneas, no puede cobijarse en las reglas de juego de la democracia burguesa de modo estable. Por el contrario, las necesidades

“
Porque es cada vez menos conveniente para la burguesía, la democracia burguesa es cada vez menos viable para los trabajadores. Solamente asumiendo a fondo todas las implicaciones de esta innegable tendencia de la historia política actual de América Latina, las masas y sus direcciones políticas pueden movilizarse victoriosamente en la lucha por la democracia.
”

del capital empujarán inevitablemente a las fracciones burguesas en el poder, a ir reduciendo el ámbito de ejercicio real de la democracia, de los trabajadores, en primer término, y aunque de modo distinto, es decir con mecanismos de la propia política económica, sobre las fracciones burguesas descontentas. Cuanto más se desarrollen o desplieguen esas tendencias del capital, tanto más apremiante la necesidad de la burguesía en el poder de limitar el ejercicio de la democracia. La represión, bajo mecanismos legales pero cada vez más arbitrarios, irá ampliando su sitio y abriendo el paso a enfrentamientos políticos más amplios, cuyo destino, si los trabajadores no desarrollan su propia fuerza, lleva como es ya sabido a la reitección de regímenes fundados únicamente en la represión, usualmente bajo comando militar.

Nadie puede dudar hoy en el Perú, que todas y cada una de estas tendencias están ya en actuación, aunque todavía no en toda su fuerza. La concentración de la producción para la exportación, y la división de la economía nacional en dos niveles muy diferenciados, que viene desde Morales Bermúdez, no solamente continúa sino se profundiza. La concentración de capital implicada en eso y sus expresiones en la política fiscal (Certext, rebajas de impuestos). La rápida ampliación de la importación y las medidas fiscales pertinentes (rebaña de aranceles y eliminación de las restricciones y prohibiciones de importación de productos locales). El alza generalizada y periódica de precios (el "desembalse" como pretexto). El alza de las tasas de interés bancario para compatibilizarlas con las tasas de inflación, que crecen, y cuyos efectos no pueden sino impulsar la concentración de capital y la propensión especulativa, la aún mayor reducción de la producción bajo mediano y pequeño capital con sus consecuencias sobre el empleo estructural, mientras se incentiva el negocio y la especulación de tierras urbanas y de construcción (tan propios de la clientela belaundista), inclusive como medio de creación de empleo coyuntural. Una política monetaria destinada al aumento de las ganancias de los exportadores y a la reducción de la capacidad adquisitiva de las masas. El relanzamiento de las distancias salariales, para reconcentrar el ingreso en las capas medias tecnoburocráticas y en la burguesía. La reprivatización del capital estatal, en la propiedad y en el control, para dar mayor cabida a los grandes monopolios mineros, petroleros, pesqueros e industriales. Todas estas medidas, demuestran fuera de toda duda que, como se señaló en nuestro número anterior, no solamente no hay y no podía esperarse de este "mal menor" al que el grueso de la izquierda peruana contribuyó a instalar en el poder, otra cosa que la ampliación y la profundización de las líneas maestras de la política económica ya iniciada bajo Silva Ruete y compañía.

Dueño de una cómoda mayoría parlamentaria, y del apoyo y control de las fuerzas armadas, el régimen Belaúnde-Ulloa dispone de mayor capacidad que el régimen militar previo, para ir desarrollando esa política. Ello sin duda, explica una particular y desusada franqueza en las declaraciones de sus portavoces y ministros, desde las destemplanzas del Presidente de la Cámara de Diputados contra los de la oposición, hasta las increíbles posturas de los Ministros, como el de Agricultura, por ejemplo, que con ocasión de la liberación de la venta de carne, declaró suelto de huesos que como las masas siempre han consumido solamente las menudencias, los precios de éstas no han sido muy elevados, para que la carne cara sea consumida como siempre por los que tienen dinero. O del Ministro de Minas y Energía que en una entrevista televisada proclamó que no era correcto permitir que las grandes empresas mineras y petroleras ganen tan poco, y que es indispensable y urgente reducir los impuestos que ellas pagan. . .

Una política con tal contenido y tales características, se ubica a medio camino entre el liberalismo extremo que Friedman patrocina y Pinochet realiza, y el confuso y extraviado neokinesiano, como sustenta Samuelson, invitado inmediatamente por Ulloa para ayudar a diseñar los planes del

gobierno. Lo que diferencia a ambas direcciones es que en el caso de la política Belaúnde-Ulloa, se trata de hacer gradual y selectivamente una política liberal, ya que por razones coyunturales (elecciones recientes, y reciente salida de un régimen autoritario) no sería posible ni recomendable hacerlo de golpe y porrazo. Pero es también previsible que en la medida en que esta política se vaya desenvolviendo, los propios factores que ayude a poner en escena, presionarán por una mayor depuración y manifestación de la lógica del liberalismo en la política económica del régimen y del Estado. Y la democracia burguesa, ni siquiera limitada, no puede ser el marco más conveniente para el desarrollo de semejante política, porque ésta sólo, puede ser llevada a cabo, consistentemente, por la imposición y la fuerza.

Sobre un punto de partida tan precario para las masas, ya castigadas por siete años consecutivos de desempleo, de bajos salarios y de inflación, impuestos por la dictadura, es realmente un escarnio que el belaundismo reclame a los trabajadores nada menos que una "tregua laboral", cuando en verdad lo que ellos necesitan y con urgencia de grito es una "tregua en la explotación". Como es obvio, ésta carece de todo sentido, y aquella sólo puede ser impuesta por la fuerza.

No puede ser, pues, en modo alguno inesperado o sorprendente el hecho de que apenas a un mes de su elección, el Presidente Belaúnde haya tenido que amenazar con la represión a los trabajadores que presionan por reivindicaciones de empleo y de salario, en un discurso pronunciado frente a los miembros de la PIP y reclamando a éstos entregarse a esa represión con toda energía. ¿Cómo podría ser sorprendente que el Ministro de Trabajo anuncie la pronta dación de una legislación para impedir las huelgas, porque son políticas, a pesar de que la democracia supone, precisamente, el ejercicio de los derechos políticos en todas sus formas amparadas por la ley fundamental?

En realidad, lo único que debe llamar a sorpresa, si alguna en verdad cabe, es el persistente reclamo de cierta izquierda a Belaúnde para que "cumpla sus promesas" (!). Dadas las circunstancias y la representación de clase del Sr. Belaúnde, ello equivale a pretender que el jefe de un ejército enemigo se comporte como jefe de nuestro propio ejército. ¿O es que el Sr. Belaúnde subió al gobierno como representante de los trabajadores? ¿Los intereses de quiénes y en consecuencia las promesas a quién debe cumplir?

LOS USOS BURGUESES DE LA DEMOCRACIA BURGUESA

Si se admite que tales son las necesidades actuales del capital en el Perú y sus implicaciones sobre la política del Estado, en el sentido de una creciente incompatibilidad entre esas necesidades y el pleno ejercicio de la legalidad democrático-burguesa, cabe preguntarse por qué la burguesía ha concurrido al establecimiento de este régimen y pugnado y ganado en la batalla por el total control del Estado en este marco.

Ante todo, puede ser todavía útil para una parte de los lectores recordar lo sabido: que no existe ninguna relación automática y simple entre las tendencias que mueven la estructura profunda de la sociedad y el modo en que los protagonistas sociales, en este caso las clases y sus respectivas fracciones, las perciben y se las representan. Y eso no es solamente válido para el comportamiento de las clases dominadas, normalmente sometidas al dominio ideológico de los dominadores, sino también para ellos mismos. En términos más concretos, no siempre ni todas y cada una de las fracciones de la burguesía están en situación de tener una conciencia clara de las demandas de las necesidades objetivas del capital, en tanto que

relación social, sobre el comportamiento político de la clase y de su Estado en cada momento. Es a través de las exigencias concretas de las luchas de clases, que la conciencia y el comportamiento externo se van modelando en la dirección hacia la cual presionan los intereses objetivos concretos y específicos de cada coyuntura.

No debe descartarse, en consecuencia, la posibilidad hipotética de que las principales fracciones de la burguesía en el Perú, concurrieran al reciente proceso de reinstalación de una legalidad democrática, con el convencimiento de que dados los nuevos elementos producidos por las reformas hechas, esta vez un régimen democrático podía afirmarse cabalmente y perdurar, bajo su comando.

Una reflexión más detenida sobre el conjunto de las circunstancias que han intervenido en y rodeado al desplazamiento de la dictadura militar y sobre el escenario más amplio de las luchas de clases en América Latina, puede llevarnos a descubrir otros elementos quizás más decisivos para explicar la conducta actual de la burguesía en relación a las opciones entre democracia y dictadura burguesas.

En primer término, es necesario tener en cuenta el hecho de que la dictadura militar y la burguesía convergieron en la decisión de abrir las puertas electorales, primero para la Asamblea Constituyente y después para el cambio de gobierno, en el momento en que la movilización de las masas trabajadoras cobraba una amplitud y fuerza tales que su desarrollo bajo la continuidad de la dictadura entrañaba la amenaza de convertir la crisis económica en una crisis social y política generalizada.

Era necesario en ese momento, desde el punto de vista de la burguesía y de su dictadura militar, maniobrar sobre las masas desafiando la expectativa electoral de modo que la urgencia democrática de las masas pudiera ser encuadrada en el marco burgués antes de arriesgar su sobrepasamiento por una lucha más profunda por otra democracia, la de los trabajadores.

Las elecciones y el régimen democrático burgués resultante son, en ese sentido, al mismo tiempo una conquista y una derrota de las masas. Lo primero, porque fueron ellas las que impusieron la necesidad del recambio democrático. Lo segundo, porque en su actual nivel de desarrollo político de clase y bajo sus actuales direcciones, demostraron no estar en condiciones ni de rebasar el marco impuesto por la burguesía y la dictadura, ni, por lo menos, ampliar su fuerza relativa en el marco institucional resultante. Por el contrario, no solamente las masas dispersas sino inclusive sus organizaciones y direcciones políticas en su amplia mayoría, contribuyeron al logro de una amplia hegemonía de una de las fracciones burguesas contendientes.

Si se considera desde esta perspectiva lo que ha venido ocurriendo en los países del norte sudamericano y del Caribe, en contraste con los del llamado Cono Sur, no es difícil encontrar que la burguesía y sus fuerzas armadas también, en ciertos países han optado por una política de contención de las luchas de los trabajadores por la democracia ya no simplemente con la represión, sino tratando de institucionalizar los movimientos de rebelión de las clases dominadas por medio de la legalidad burguesa, tan limitada o tan amplia dependiendo de la fuerza de esos movimientos. Han llegado inclusive, como en el caso de Nicaragua y la particular intervención de los países andinos, a contribuir a la derrota de una bestial dictadura al costo de un evidente riesgo de que la burguesía sea erradicada del mapa político de ese país, a condición de que se preserven ciertas fuerzas burguesas que pudieran posibilitar eventualmente la contención del proceso nicaraguense en el marco burgués.

Esto es decir que una parte muy importante de la burguesía en América Latina y con cierto respaldo del "carterismo", percibe con bastante claridad que la contención de la lucha demo-

crática de las masas no puede hacerse sino en último extremo por la represión total, dadas sus consecuencias internacionales. Y que es conveniente, para la preservación de la dominación burguesa, tanto tiempo como sea posible, necesario inclusive gradualizar la política de crisis del capital garantizando que opere de todos modos aunque menos plenamente, como costo inevitable del mantenimiento histórico de la dominación.

Esta demostrable tendencia en la política burguesa, dice bien sobre el nuevo carácter de la clase y de las nuevas bases en que eso se asienta, pasado el período de la omnimoda hegemonía de las fracciones oligárquicas y del tipo de las necesidades imperialistas en que ellas se apoyaban. Pero, al mismo tiempo, dan cuenta que las luchas de clases se han ido desarrollando hasta un punto en que la relación entre la burguesía y la democracia, cuando ésta puede aún estar bajo su control, es cada vez más contradictoria y tiende a depurarse de esas contradicciones en una dirección no democrática, dadas las necesidades del capital y las luchas políticas que ellas implican. Por consecuencia, solamente si el éxito corona el esfuerzo de una nueva legitimación de la dominación burguesa en la conciencia de las masas, la burguesía de estos países puede respetar sus propias normas democráticas.

No es, así, accidental que en Bolivia —para no hablar de Chile, Argentina, Uruguay en la actualidad—, la democracia burguesa no puede ser tolerada ni siquiera superficialmente, en un país en que cualesquiera que sea la falsa conciencia de las direcciones políticas sobre la realidad en juego, las masas han demostrado una y otra vez su lealtad primordial a sus propios impulsos y necesidades, y donde por lo tanto ni el grueso de la burguesía miserablemente débil, ni las fuerzas armadas, pueden bajar la guardia ni un momento.

En el Perú, a diferencia de Bolivia, ciertamente existe una burguesía aún más capaz que antes, por su modernización, de disputar el dominio ideológico, psicológico-social, y político de las masas. La reciente elección prueba que, como Marx apuntara en una ocasión, las masas o la mayor parte de ellas todavía conceden a los burgueses su "derecho natural" a gobernar. Capas medias más amplias, diversificadas, con acceso a un estilo de vida burgués, y con acceso a una cuota parte del poder del capital como funcionarios suyos en el Estado y en las empresas privadas. Y un movimiento revolucionario que en buena medida apenas ha comenzado a mostrar débiles signos de maduración. Y donde es, por consecuencia, posible aún si solamente por una etapa no muy prolongada, la institucionalización de los movimientos de los dominados en la legalidad burguesa. La burguesía en el Perú, sin duda es consciente de tal uso de la democracia.

Junto a esos factores, comunes al Perú y otros países, otros más específicamente referidos a las circunstancias locales concurren también a perfilar los usos burgueses de la democracia.

Se puede decir que con el recambio de la dictadura militar la burguesía en el Perú ha logrado matar dos pájaros con un solo tiro. El primero es que tratándose de una dictadura militar que las masas habían llegado a odiar totalmente, la burguesía no podía usar ningún otro ropaje que la democracia civil y constitucional para ganar a las masas contra las tendencias revolucionarias. La democracia era pues, aquí, una imposición de las circunstancias.

El segundo es, sin duda, más importante. La dictadura militar era ciertamente odiada por los trabajadores. Pero para las necesidades político-económicas de la burguesía, el régimen militar era no solamente una dictadura. Era también un régimen todavía asentado sobre un conjunto de elementos producidos por las reformas de la primera fase, que para el despliegue de la reorganización de las bases de la dominación del capital monopolístico internacional, tienen que ser o desmantelados o redefinidos según esas necesidades. Para ello, es conve-

niente la eliminación de hasta los vestigios de influencia del nacionalismo corporatista en el aparato administrativo del Estado, a fin de abrir las puertas de la privatización del capital estatal establecido, y a una política financiera más abiertamente destinada a las necesidades del capital, ya antes señaladas.

Si bien bajo Morales Bermúdez-Silva Ruete, ya habían sido establecidas las bases de esa política del capital monopólico, para la burguesía en el Perú se presentaba con el violento enfrentamiento de las masas a la dictadura, la mejor ocasión para presentarse como la alternativa democrática deseada y, simultáneamente, para obtener el control total del Estado para el desarrollo de una política económica ceñida a las necesidades del capital monopólico. En este esfuerzo, la fracción que en la práctica resultó ser la mejor representante de esas necesidades pudo contar, inclusive, con la falsa conciencia de la mayoría de las direcciones políticas de las masas, para lograr una hegemonía tan amplia que le permite ahora emplearse más a fondo en la prosecución de su política.

En definitiva, para la burguesía en el Perú, la democracia burguesa tiene dos usos perceptibles. Primero, la contención de los movimientos de las clases dominadas por la democracia, en los límites del marco burgués, sin el recurso a la represión generalizada cuando eso es definitivamente posible. Segundo, la profundización y ampliación de la política pro-monopolista comenzada bajo Morales-Silva Ruete, adueñándose del control total del aparato del Estado por el expediente de presentarse a las masas como la única alternativa real de democracia frente a una dictadura que ellas odiaban totalmente y cuyos enfrentamientos entraban el pleno despliegue de esa política.

El problema que surge, con nitidez, en este contexto es que el primero de tales usos entra inevitablemente en conflicto con el segundo y tanto más rápida e intensamente cuanto más plena es la presencia del segundo, porque las necesidades inmediatas del capital son imperiosas. Más aún, la amplia hegemonía lograda por el gobierno belaudista que encarna estas contrapuestas exigencias, en la medida en que permite ir más a prisa y más fondo en la puesta en marcha de la política económica requerida, aun dentro de la decisión de graduarla, ya va sacando a flote rápidamente el conflicto entre ambas necesidades de la burguesía.

El primero de tales usos no podría ser eficaz sino en la medida en que el marco de la democracia burguesa sea suficientemente amplio y flexible como para cobijar no solo formal sino efectivamente algunas de las demandas básicas de las masas. Pero para ello sería indispensable que las bases materiales del capitalismo peruano hubieran logrado un desarrollo mayor, de modo que fuera posible recibir las demandas de los trabajadores con concesiones materiales importantes, posibilitando la amortiguación de sus impulsos de desarrollo político. Por el contrario, dentro de la crisis y sobre un piso económico subdesarrollado y desigual, eso no es en modo alguno viable. El gobierno sólo puede apelar al reclamo de "tregua laboral" antes de pasar al uso de la fuerza. Esto puede permitir imponer la política económica que el capital monopólico requiere; pero dreña inevitablemente las bases del uso de la democracia burguesa para institucionalizar la lucha democrática de las masas.

Las opciones entre ambas necesidades cuya contraposición irá agudizándose mientras duren las necesidades de reorganización de los patrones de acumulación en el país, irán no solamente empujando al régimen belaudista a definirse entre ambas por las exigencias del capital, como ya comenzó a hacerlo, sino también a sus bases sociales y políticas a diferenciarse entre estas alternativas, como está igualmente comenzando a ocurrir.

LOS TRABAJADORES Y LA DEMOCRACIA BURGUESA

Un mecanismo manido que la burguesía pone en acción en todas partes, especialmente en el Perú, para sortear esa clase de dificultades, es arrastrar a las masas y a sus direcciones políticas a ser ideológica y prácticamente encajonadas en las instituciones políticas de la burguesía, persuadiéndolas y/o imponiéndoles la idea de que la democracia existe única y exclusivamente bajo la forma de esas instituciones: parlamento, tribunales de justicia, administración central del gobierno y sus dependencias.

Para ello la burguesía martilla sobre las masas la idea de que solamente lo que pasa a través de esas instituciones y bajo sus reglas, impuestas por ella, es la exclusiva arena de la vida política de la sociedad. Y que, en consecuencia, todas las demás áreas de la vida de la sociedad están y deben estar fuera de la política y sobre todo la esfera de las relaciones de trabajo en las empresas privadas o públicas y las acciones y decisiones que se refieren a la actividad económica en general, para cuyas áreas la burguesía pretende la intervención de criterios y de normas puramente técnicas, depojadas de contenido político.

De ese modo, en la vida de la sociedad quedan definidos dos escenarios diferenciados: el de las instituciones políticas y el de las demás esferas de la actividad social. Cada uno con sus propias reglas de juego, sus propios criterios, sus propios actores y que no deben interferirse ni articularse entre sí.

Así, en particular se deslindan los campos de actuación de los organismos sociales e individuos, por su pretendida pertenencia a uno de esos escenarios. Lo cual es en los hechos un deslinde entre los límites del ejercicio de los derechos políticos de las clases sociales mismas. Por ejemplo, los partidos pertenecen a la esfera de lo político. Los sindicatos no, porque corresponden a la esfera de lo económico.

Cuando el Ministro de Trabajo acusa a los obreros y a sus sindicatos de hacer huelgas políticas y les recrimina estar usando los sindicatos para fines que no son los suyos, ya que la política no puede y no debe intervenir en la vida sindical, lo que ese Ministro hace es poner de manifiesto exactamente esa necesidad burguesa de lograr que los obreros se representen ideológicamente a la sociedad como dividida en compartimientos bien diferenciados, a uno de los cuales, el de lo político, les está vedado el acceso a través de los sindicatos y al que solo pueden acceder a través de los partidos. Pero, al mismo tiempo, a condición de que esos partidos pueden actuar solamente dentro de las instituciones políticas del Estado burgués y bajo sus reglas. Es decir, en la práctica bloquea la actuación política de la clase obrera en los organismos en los cuales vive diariamente y castra aquella que puede hacer en los organismos en los cuales, por la naturaleza de su actividad diaria, los obreros y los demás trabajadores tienen menos posibilidad y proclividad de actuar.

Como de hecho, sin embargo, a través de las instituciones políticas del Estado burgués, la inmensa mayoría de la clase obrera, del disperso sumiproletariado, del campesinado, no pueden hacer valer sus necesidades, precisamente porque tales instituciones están totalmente controladas por la burguesía, directa o indirectamente, se ven obligados a actuar para esos fines por fuera de esas instituciones, a través de sus propios organismos de masas, como los sindicatos, los comités de fábrica o de localidad, y de tipos de acción que tienden a salirse de las normas legales impuestas por la burguesía y su Estado. Cuando el Estado y la burguesía acusan a las masas de estar

haciendo política de esa manera, no se equivoca. Lo que trata de hacer es que esas acciones se canalicen únicamente a través de las instituciones de la propia burguesía y bajo sus leyes, porque en ellas los trabajadores no pueden desplegar su fuerza ni conquistar sus demandas.

En la práctica se establecen, pues, dos escenarios políticos. Uno, el de la institucionalidad y la legalidad burguesa. Otro, el de las instituciones y reglas que crean las acciones directas de las masas. Todo el esfuerzo de la burguesía y de su Estado se dirige a impedir la existencia y el desarrollo de este segundo escenario, por la prédica ideológica y por la fuerza si aquella no basta.

Y es en esta cuestión, en esta encrucijada, en donde se deciden todo el tiempo los destinos y las posibilidades de la lucha por la democracia. En la medida en que las masas y sus direcciones políticas, se sometan a la imposición ideológica o violenta de la burguesía para concentrar su acción política sólo en lo que la clase dominante define como político y democrático, concurren a fortalecer las bases del dominio político y de la explotación de la burguesía.

Este problema cobra hoy una importancia decisiva para las masas trabajadoras peruanas, exactamente porque como hemos mostrado hasta ahora, para la burguesía en nuestro país la democracia tiene ahora solamente el interés de contener en los límites burgueses la lucha por la democracia, y no se trata de modo alguno de un interés de democratizar realmente la vida entera de la sociedad contra la dominación oligárquica o feudal, como algunos pueden todavía creer. Y de otro lado, en aprovechar el hecho de que el régimen desplazado era una dictadura odiada por las masas, para legitimar bajo cobertura de democracia los intereses más urgentes del capital monopolístico imperialista, que son cada vez más opresivos para los trabajadores peruanos. Es decir, en otros términos, los límites burgueses de la democracia en el Perú de hoy implican, ni más ni menos, el sometimiento de las masas a las necesidades del capital imperialista e interno asociados, desempleo masivo, salarios deprimidos, inflación y sus consecuencias sociales.

Encerrar la actuación política de las masas en el cuadro de las instituciones políticas del Estado burgués, equivale claramente al apoyo de esas necesidades explotativas del capital.

Desde este punto de vista, todos aquellos que entre las masas y sus direcciones políticas actuales concurren en algún sentido al encuadramiento de ellas exclusiva o principalmente en las instituciones burguesas (parlamento, elecciones para esas instituciones), cumplen ese papel de apoyo a la política de la burguesía. El parlamentarismo y el electoralismo, son expresiones de ello, así como la tendencia a movilizar a las masas en apoyo de los partidos (que actúan precisamente en esas instituciones), y no a los partidos en apoyo de las luchas directas y organizaciones de las masas, todavía tan extensamente practicada por la mayoría de las actuales organizaciones y direcciones políticas de la izquierda peruana.

No se sigue de allí, como pudiera pensarse simplistamente, que las masas no deben actuar en el escenario institucional de la burguesía en momento alguno, ni que sea siempre conveniente actuar de cualquier manera en el escenario de la lucha directa, rebasando todo lo que limita la legalidad burguesa. No se trata de no participar en el parlamento o usar los tribunales burgueses de justicia, o de no participar en las elecciones para actuar en esas instituciones.

Lo que en este terreno ocurre, y la experiencia peruana e internacional es demostrativa, es que ciertas formas de acción directa de las masas corresponden siempre al modo y al nivel en que sus direcciones políticas y sindicales resisten o se someten a la imposición burguesa de considerar como área de acción política legítima a sus propias instituciones, y a los actores individuales u orgánicos permitidos en ellas.

Por ejemplo, actualmente en el Perú se registra una numerosa serie de huelgas. Pero notablemente, ellas no solamente se llevan a cabo de manera dispersa, sin coordinación ni centralización, sino también y particularmente con una orientación exclusivamente gremial, aunque la rudeza en el reclamo y en las luchas y el lenguaje radical las presenten como clasistas.

¿Qué quiere decir orientación gremial y no clasista? Que las reivindicaciones de estas huelgas se refieren exclusivamente a empleo, salarios y condiciones de trabajo, y en ningún caso a cuestionar la política económica global del Estado y sus bases, que son el fundamento de los problemas de empleo y de salario que los trabajadores levantan, o a poner en cuestión las políticas sectoriales del Estado que afectan la vida diaria de las masas en cada área, como la educación, el transporte, la salud, la vivienda, la recreación.

No están en modo alguno desligadas tales ausencias en las plataformas de lucha de los trabajadores en huelga, con el hecho de que estas se hagan de modo disperso y no centralizado. Ni ambas están desvinculadas del tipo de relación habitualmente establecido entre las organizaciones sindicales y equivalentes con los partidos, y direcciones partidarias, y de la orientación del comportamiento de esos partidos en las instituciones políticas del Estado burgués.

La acción movilizadora y organizada de los trabajadores asume un carácter político de clase, cuando presiona sobre el Estado interviniendo en la definición del comportamiento de éste en cada una de las esferas que interesan al conjunto de los trabajadores. Y ciertamente para eso, no puede esperarse salvo excepcionalmente que un sindicato o un organismo separado y sin coordinación con otros pueda conducirse de ese modo y en ese nivel.

Igualmente, si los partidos que representan tendencias y sectores de las masas conciben la lucha política y en consecuencia la lucha por el poder, como exclusivo papel de los partidos y para lo cual gestionan el apoyo de las masas, es inevitable que ellos no se empeñen realmente, aunque a veces lo hagan verbalmente, en el uso de los partidos para apoyar la movilización y la organización directa de las masas en cada una de las áreas de su actividad diaria y en la centralización de todos esos organismos para una acción conjunta sobre el Estado, sea para intervenir en la definición de la política, sea global o sectorial.

En efecto, si un partido político asume la idea de que el poder lo conquista y lo administra y dirige el partido y no las masas mismas, con sus propias organizaciones de base, inevitablemente tenderá a converger con la burguesía en privilegiar el escenario institucional y legal burgués y en agenciarse para esos fines, el apoyo de las masas.

Y esa es, en general, la situación en la que aún se mueven las masas y sus direcciones políticas mayoritarias, no obstante el hecho de que los trabajadores son empujados, con o por fuera de su conciencia y de sus intenciones deliberadas, a establecer otro escenario de sus luchas políticas, en la acción directa.

Mientras así suceda, la burguesía saldrá siempre victoriosa en uno y otro escenario. En el de sus instituciones políticas formales, porque controla las reglas de juego y los recursos para eso. En el de las acciones directas, porque su aparato administrativo y represivo se enfrentará solamente a movimientos de masas parciales y dispersos, y que cuestionan exclusivamente los efectos de la política del Estado y no esa política misma y las bases en que se funda. De ese modo, movimientos de masas y direcciones políticas de ellas serán siempre prisioneros de los límites burgueses de la democracia. Y a pesar de sus luchas y del descontento general, la política del capital podrá llevarse a cabo de todos modos.

“ Como lo mostró con rotunda claridad la secuencia de los paros nacionales, solamente unidas las masas superan las limitaciones gremialistas y reivindicativas parciales de su acción, para cuestionar la acción misma del Estado burgués.

”

Con los grandes paros nacionales entre 1977-1979, surgieron por primera vez en la historia política peruana movimientos de masas de orientación efectivamente clasista, a pesar de que su programa de lucha era básicamente defensivo, de resistencia contra la política del Estado y no una alternativa a ésta, en la medida en que ponían en cuestión el conjunto de la política económica del Estado y empujaban hacia la coordinación y centralización nacional de sus direcciones.

Sin embargo, una y otra vez esos movimientos fueron contenidos y derrotados puesto que las líneas centrales de la política de la dictadura pudieron ser mantenidas y realizadas, aunque forzadas a gradualizarse y modularse. Eso se debió, como se sabe, a que la conquista de la unidad y centralización nacional del amplio y vigoroso movimiento de masas fue efímera, precisamente porque las principales direcciones partidarias y sus expresiones sindicales rompieron esa unidad, como en caso del PCP y de su dirección en la CGTP, o la boicotearon desde fuera con el absurdo argumento de que esos paros eran “revisionistas”, como en el caso de Patria Roja. En ambos casos, fue puesto en evidencia que esas organizaciones partidarias centraban su acción en el interés del partido y requerían a las masas en su apoyo, en lugar de concurrir al interés de las masas y actuar en su apoyo. Y esa misma conducta fue reiterada en la experiencia de ARI.

Las consecuencias de esa política han sido claras. Los movimientos de masas fueron dispersándose y las bases fueron forzadas al repliegue, permitiendo el descabezamiento de las direcciones sindicales más combativas y perdiendo la iniciada orientación de clase para refugiarse en la reivindicación parcial y gremialista. Esas fueron las bases de la derrota electoral de la izquierda, así como de la conquista de la hegemonía en la dirección política de la burguesía por Acción Popular frente al Apra, una vez que para las fuerzas armadas y las fracciones burguesas más definitivamente pro-monopolistas, el reflujo de las masas hacía innecesario guarecerse detrás del Apra, que en el momento anterior, inmediatamente antes de la Constituyente, aparecía para ambas como la mejor protección por su lugar importante en el seno de las capas populares.

LAS BASES DE UNA POLÍTICA DE CLASE DEL MOVIMIENTO DE MASAS BAJO LA ACTUAL DEMOCRACIA BURGUESA

Todo lo anterior, permite señalar las líneas generales de un camino de desarrollo de la lucha democrática de las masas explotadas, en la actual coyuntura democrático-burguesa del Perú.

Tenemos que partir, ante todo, de la verificación de que la lucha por la democracia no puede desarrollarse ni culminar exitosamente en los límites burgueses, porque la democracia, inclusive la que ella controla, es cada vez menos conveniente para la burguesía en el período de crisis capitalista. Y porque para esa clase, hoy la democracia es sobre todo un modo de legitimar frente a las masas, por haber sustituido a una odiada dictadura militar, una más abierta realización de las necesidades políticas del capital monopólico internacional e interno, asociados.

En segundo término, es necesario reconocer la existencia de un doble escenario de la acción política para las masas. De un lado el de las instituciones formales del Estado burgués. Del otro, el de las acciones directas de las masas, con sus propias instituciones como los sindicatos, los comités de fábrica o de localidades, las organizaciones barriales, y sus propias reglas de juego. Y desde este punto de vista, las masas trabajadoras tienen que usar ambos niveles de la acción política, pero usando el terreno de las instituciones formales del Estado burgués para apoyar y desarrollar la lucha directa y de ningún modo al contrario.

Si estuviéramos en otro período histórico o en otra coyuntura, en donde el movimiento de masas fuera aún incipiente y reducido y con mejores condiciones materiales y sociales de existencia, acaso podría ser todavía necesario, principalmente, ampliar la participación de las masas y de sus representantes en las instituciones del Estado burgués, movilizándolo a las masas en apoyo a esa necesidad, como medio de afirmar siquiera la vigencia de esas instituciones de la democracia burguesa.

Esa no es más en el Perú la situación de los trabajadores. Sus movimientos reivindicativos y políticos han alcanzado ya un nivel de desarrollo suficientemente importante, y atravesado experiencias clasistas excepcionalmente significativas como las de los paros nacionales últimos, y, a pesar de sus frustraciones, inclusive la participación independiente en las elecciones del 78 y del 80. Todo ello funda, objetivamente, la necesidad de contribuir a la afirmación y desarrollo de este proceso de independización y de orientación clasista, de centralización y de acumulación de fuerza del movimiento de los explotados, por fuera de la limitada arena de las instituciones formales de la democracia burguesa. En adelante, la participación de sus representantes en tales instituciones tiene que ser usada por las masas, prioritariamente para apoyar el desarrollo de la movilización y organización independiente, es decir, para la acción directa de las organizaciones de base.

Para que eso sea factible plenamente, es indispensable cambiar radicalmente el tipo de relaciones que hasta hoy se mantienen entre los partidos y las organizaciones no partidarias de las masas, de modo que en lugar de que los partidos busquen su crecimiento con el apoyo de las masas con la finalidad de participar en las instituciones del Estado burgués, ahora, y más tarde para controlar el poder político conquistado por las masas, los partidos se organicen y se desarrollen para fortalecer ahora el movimiento independiente de las masas y sus acciones directas, y posteriormente para sostener y defender el poder

de las organizaciones directas de las masas. Esa es la base misma del desarrollo de la lucha democrática de las masas, hoy día dentro del marco burgués, y mañana por la gestión de su propia democracia. Y ello, implica, evidentemente, la modificación igualmente radical del modo mismo en que se constituyen los partidos de las clases explotadas y ante todo los del proletariado revolucionario.

La consecuencia central de estas premisas, es la lucha por la unidad del movimiento de las masas y de sus organizaciones de todo tipo, parejamente a la búsqueda y defensa de la democracia interna de esas organizaciones. La unidad supone la centralización creciente de las organizaciones directas de las masas, en torno de las de la clase obrera. La democracia interna de aquellas presupone la primacía de las bases sobre las burocracias, y el libre debate entre sus tendencias y organizaciones políticas dentro de esas organizaciones directas. Unidad y democracia no solamente no son excluyentes, sino que se reclaman mutuamente.

Una parte de las tendencias políticas de la izquierda peruana, no consigue aún liberarse del estereotipo sectario de que las diferencias de ideas revolucionarias implican la división en la acción y en consecuencia la división orgánica del movimiento de las masas. Y eso es uno de los peores resultados de una concepción de poder, según la cual son los partidos y no las organizaciones directas, no partidarias, de las masas los que conquistan y detentan el poder político revolucionario. De allí proviene la práctica, inclusive a pesar de las intenciones declaradas, de tratar de apoderarse, por cualquier medio, del control de los aparatos burocráticos de los organismos de masas y, para eso, de liquidar a los otros partidos y de dividir el movimiento de los trabajadores, llegando inclusive a la derrota de ellos, como ocurrió con la conducta del PCP frente al Comando Unitario de Lucha que las masas forzaron a formar a sus direcciones sindicales en el histórico paro del 19 de julio de 1977. Y la conducta de UNIR-PCR y la de los troskistas en ARI.

Por el contrario, si lo que se busca es la ampliación del espacio democrático de las masas bajo el régimen burgués, y la democracia directa de los trabajadores más tarde, la condición fundamental es la unidad de las organizaciones directas de las masas, y la democracia centrada en el libre debate entre todas las tendencias y organizaciones políticas que actúan dentro de ellas, en el legítimo esfuerzo de cada una de ellas de ganar la dirección —no el control— del movimiento. Sólo en ese debate puede, realmente, estar presente y afirmarse la primacía de las bases sobre las burocracias, así como la necesaria relación unitaria entre la o las direcciones principales y las demás corrientes políticas de las masas.

La unidad y centralización de las organizaciones y del movimiento de las masas, con las características señaladas, es la base necesaria e insustituible del desarrollo de la orientación clasista de ese movimiento, en el sentido de cuestionar no solamente los efectos de una política estatal, sino a ésta misma y sus factores de base, global y sectorialmente. Como lo mostró con rotunda claridad la secuencia de los paros nacionales, solamente unidas las masas superan las limitaciones gremialistas y reivindicativas parciales de su acción, para cuestionar la acción misma del Estado burgués. Y sólo en ese camino, pueden ellas efectivamente ganar la conciencia real de que sin la conquista de su propio poder, sus necesidades fundamentales no podrán ser satisfechas.

Esa unidad es, sin duda, requerida tanto para la acción dentro de las instituciones y reglas de juego de la democracia burguesa, como las elecciones parlamentarias o municipales, por ejemplo, como para el desarrollo de la acción directa de las masas en el otro escenario. Pero desde la perspectiva que aquí se trata de indicar, es la unidad en el terreno de la acción directa la que es no solamente prioritaria, sino que la unidad para los otros fines, los electorales por ejemplo, no puede hacerse sino dentro de aquella y sobre esa base.

No obstante, como es observable plenamente, la mayoría de la izquierda peruana actual tiende constantemente a enfatizar la unidad solamente para las elecciones y solamente entre las cúpulas partidarias, fomentando de esa manera el sectarismo y el burocratismo en contra de la democracia de las bases, y manteniéndose prisioneras de las reglas de juego de la institucionalidad burguesa. Inclusive los apetitos individuales de poder y de exhibición, encuentran en ese terreno todo su abono. Es tiempo de ir en contra de esa corriente.

En definitiva, las clases explotadas y particularmente el proletariado y sus corrientes revolucionarias, no pueden desarrollar victoriosamente sus luchas por la democracia sin defenderse de quedar prisioneras de las mallas de la formalidad burguesa; sin defenderse de una relación burocrática entre partidos y organizaciones directas de bases; sin luchar por la unidad y la democracia interna de sus movimientos; sin combatir por la democratización de cada uno de los aspectos de la vida social, tanto en la arena de la política global del Estado burgués como en cada una de las áreas de la vida diaria.

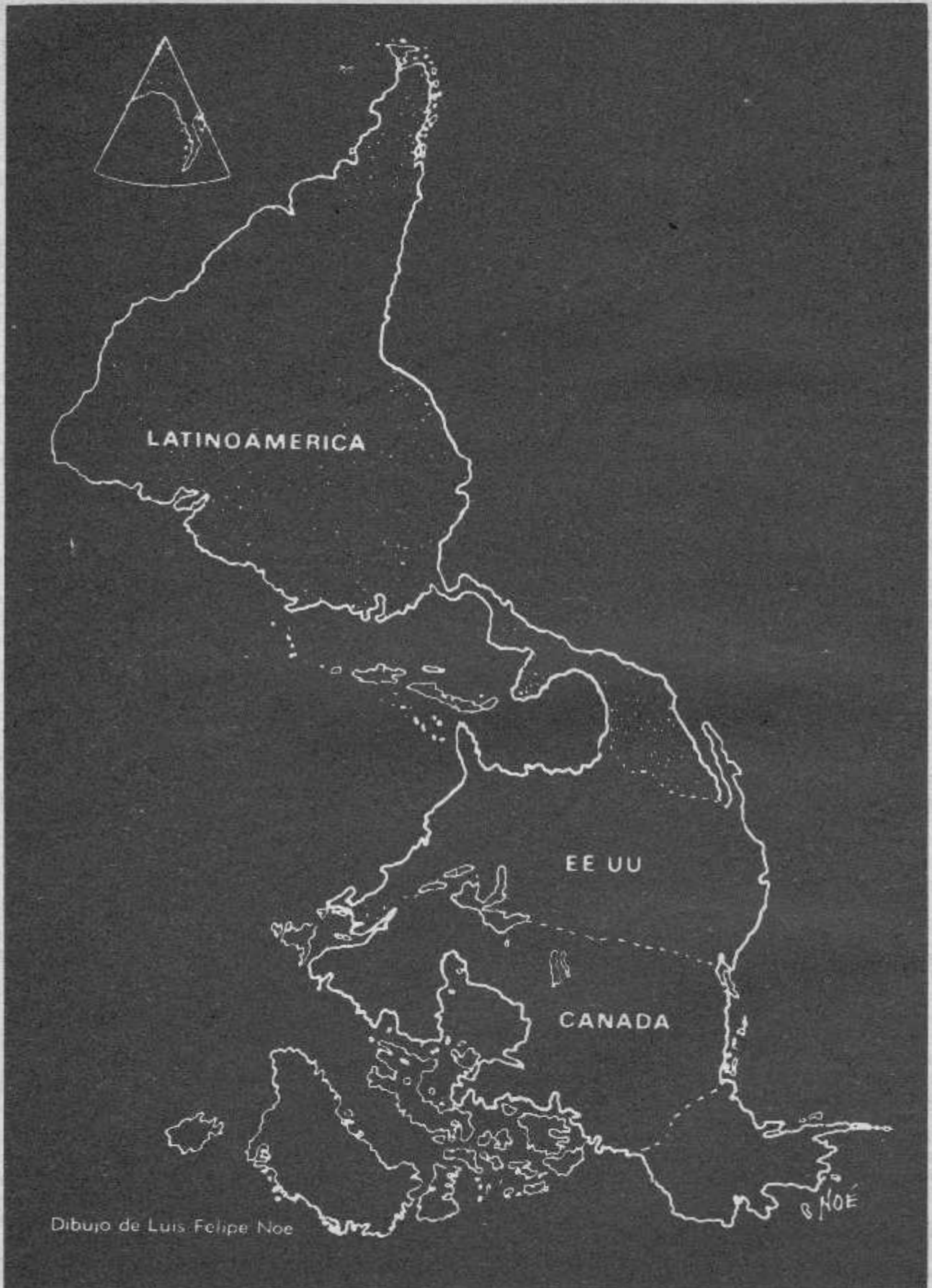
No puede bastar la lucha contra los precios del pasaje. Es necesario luchar por una otra política del transporte y de sus soportes productivos e institucionales. No basta la lucha contra los bajos salarios y la reposición en el empleo. Es indispensable combatir contra el conjunto de la política económica que da origen a los problemas de empleo y de salario, presionando por otra estructura de producción y en consecuencia de control de los recursos, por la democratización de los salarios frente a la brutal concentración del ingreso que hoy está en curso; por la redistribución del empleo estable entre los trabajadores; no es suficiente protestar contra las alzas de precios cada vez que se decretan los "paquetes" de alzas. Es preciso luchar por otra política financiera y comercial. Global y sectorialmente, es la política económica de la burguesía y de su Estado, la que tiene que ser cuestionada y no solamente sus efectos.

Nada de eso puede hacerse sin unidad de las masas y de sus organizaciones directas y sin ampliación de la democracia interna de esas organizaciones. Para ello no basta la unidad de las cúpulas partidarias cada vez que hay elecciones, ni la coordinación de los parlamentarios de esos partidos. La unidad de las organizaciones de tipo partido no puede ejercerse realmente sino dentro de las organizaciones directas de las masas y no por fuera de ellas. Las diferencias de pensamiento, de programas y de modos de acción, tienen que ser debatidos en el seno de aquellas organizaciones, y no constituyen una traba para la acción común de tales organizaciones, salvo para las finalidades burocráticas, no democráticas, de las cúpulas partidarias que quisieran sustituir el poder de las masas con el poder de sus aparatos burocráticos.

La lucha por el ejercicio efectivo de nuestros derechos democráticos, por la ampliación y profundización del espacio político y social para ese ejercicio, son las tareas principales de esta coyuntura. Pero ellas son las bases del desarrollo de las bases del poder de los explotados, para resistir y vencer a la represión y avanzar hacia la democracia directa de los trabajadores, organizados y unificados en un vasto frente bajo la dirección del proletariado revolucionario.

Si no empeñamos nuestros recursos en la unificación democrática de los explotados de todos los sectores, de desarrollo de sus organizaciones directas y de su capacidad de acción directa, no podremos acumular fuerzas contra las tendencias represivas del Estado de los capitalistas y no podremos escapar a una derrota. Bajo la actual democracia burguesa, y frente a claras señales de acortamiento de su tiempo, los trabajadores y los militantes revolucionarios socialistas tenemos tareas claras para nuestro propio uso de clase de esta precaria legalidad democrática a que ha sido forzada la burguesía en el Perú.

Lima, 3 de octubre de 1980.



Dibujo de Luis Felipe Noe

E

l XIII Congreso del Partido Aprista celebrado en la ciudad de Trujillo entre el 1º y el 3 de agosto, puso en evidencia, de manera dramática, las profundas divergencias que atraviesan al partido que fundó Haya de la Torre hace cincuenta años. Si bien las contradicciones políticas e ideológicas han estado presentes en la larga vida del partido, llegando incluso a la ruptura, como las que se produjeron en 1948 y 1958, ninguna de ellas ha tenido la gravedad de la crisis puesta de manifiesto en el último congreso. Muerto Haya de la Torre, en ausencia del líder carismático capaz de polarizar en torno suyo al conjunto del partido, las divergencias políticas e ideológicas tienden a condensarse en líneas programáticas cada vez más definidas y opuestas. Por ello, a pesar de los actuales intentos de los principales dirigentes por recomponer la unidad orgánica del partido, se puede afirmar la tendencia hacia una creciente diferenciación de las opciones programáticas en el Apra. Las bases sociales y las consecuencias de esas líneas políticas es lo que buscamos explorar en este artículo.

A primera vista, las divergencias al interior del Apra parecerían girar como señalan dirigentes de las fracciones en pugna en torno a diversos problemas: o bien organizativos (secretaría única o secretaría colegiada); o bien doctrinarios (Treinta años de aprismo o El antimperialismo y el Apra); o bien por el personalismo de los dirigentes ("armandismo" o "andresismo"). Sin embargo, aunque estos elementos constituyen ingredientes importantes en las luchas fraccionales, si queremos comprender el verdadero significado de la crisis aprista y de sus posibles consecuencias políticas será necesario examinar sus raíces. Fundamentalmente, éstas se encuentran en las profundas modificaciones en las relaciones de clase que se operan en la sociedad peruana en las últimas tres décadas. Los proyectos políticos que se disputan la hegemonía al interior del Apra interpretan de manera diferente el sentido del papel del PAP —tácticas, estrategias y alianzas políticas— en las luchas políticas y sociales del país, en consideración a esas relaciones de clase y de las perspectivas de su desarrollo.

EL APRA: DEL NACIONALISMO RADICAL AL REFORMISMO SOCIALDEMOCRATA

Cuando en 1930 surge el Partido Aprista como una fuerza política que busca expresar a los sectores más radicales de la pequeña burguesía, su programa político —cuyas líneas fundamentales son las desarrolladas por Haya de la Torre en *El Antimperialismo y el Apra*— tiene un doble carácter: democrático, en el sentido de la destrucción de la dominación oligárquica; y nacionalista, en la perspectiva de la lucha por la independencia nacional "dentro del capitalismo." Este programa se plasmará en el proyecto de "Estado antimperialista". Estado que constituirá el instrumento mediante el cual las clases oprimidas por el imperialismo podrán cumplir sus objetivos nacionales y democráticos y que por ello tendrá una organización diferente a la de los Estados que surgieron de las antiguas revoluciones burguesas: su base económica será el "capitalismo de Estado"; su organización política, la democracia funcional. Fue este el programa que canalizó las reivindicaciones antioligárquicas y antiimperialistas de importantes sectores de obreros, campesinos y, sobre todo, de los empleados, profesionales y pequeños propietarios urbanos y rurales. Estas fuerzas sociales constituyeron entonces un bloque político democrático radical, cuya dirección la asumió el Partido Aprista. Enfrentadas a la coalición oligárquico-imperialista serán derrotadas en la verdadera guerra civil de 1932 y, en los años siguientes, sometidas a una implacable y sangrienta represión.



Las contradicciones internas y el particular derrotero político e ideológico, en el marco de una profunda crisis del sistema de dominación y del ascenso de las masas trabajadoras, determinará que la crisis del Apra, que llega a su punto culminante en el XIII Congreso, derive en la puesta en evidencia de dos líneas políticas que expresan proyecciones tácticas y estratégicas divergentes en cuanto a la implementación de su proyecto socialdemócrata: una línea política de "derecha" y una línea política de "izquierda".



En la década siguiente, influido por la nueva política impuesta por el presidente de los Estados Unidos F.D. Roosevelt, Haya de la Torre acentuaría los rasgos democrático-liberales de sus análisis y propuestas políticas. Es en este sentido indicativa la atención que presta a las "cuatro libertades de la democracia" enunciadas por Roosevelt en 1941. En ellas, Haya de la Torre encontraría "la síntesis de su programa político, pues encierran las libertades esenciales del hombre". De igual manera, la nueva política exterior norteamericana, le serviría de justificación para la reelaboración de su concepción del antiimperialismo: la "acción contra el imperialismo yanqui" de su programa original, devendrá en la fórmula del "interamericanismo democrático sin imperio", con la cual quiere enfatizar el "abandono del imperialismo por el Departamento de Estado", cambio que es percibido como consecuencia de la política del "buen vecino" sostenida por Roosevelt.

En 1948, cuando la burguesía oligárquica y una fracción del ejército derrocan al presidente constitucional Bustamante y Rivero, se cierra una limitada experiencia democrática de la cual el Apra había sido el sostén principal y con ello también se frustra la perspectiva que habría hecho posible la cristalización del nuevo proyecto político de Haya de la Torre. La subsiguiente restauración oligárquico-imperialista que emprendió el régimen odriista se daría sobre nuevas bases sociales y económicas, consecuencia de los cambios que se procesan en la sociedad peruana con posterioridad a la segunda guerra mundial. Entre estos cambios, quizás uno de los más significativos y que influye de manera determinante en las modificaciones de la línea política del Apra, está el relacionado con el papel de las capas medias, particularmente el de aquellos sectores que han logrado mayores ventajas y privilegios sociales. Estos sectores abandonarían el radicalismo democrático y nacionalista de los años treinta y se irían incorporando al sistema de dominación, convirtiéndose en uno de sus soportes principales. En esta nueva situación, el Apra redefiniría su papel político y sus alianzas: la "convivencia" con el pradismo (1956-1962) y la "coalición" con el odriismo (1963-1967) expresarían las opciones del PAP en el nuevo período.

Sin embargo, será con el inicio del nuevo ciclo de las luchas de clases que se abre en el país en la última década, cuando el Apra precisa una nueva propuesta política, en cuya interpretación perspectivas, tácticas y estrategias se dan corrientes divergentes que, después de la muerte de Haya de la Torre, buscarán imponerse en el partido. Esta modificación en la línea política básica constituye el esfuerzo más coherente para superar el empantanamiento al que había llegado el Apra por el agotamiento histórico de su programa original. En el nuevo período, el curso de la política aprista estará marcado por el reconocimiento de los cambios ocurridos en la sociedad peruana y por la perspectiva de constituirse en el eje más viable para el ordenamiento de la democracia burguesa en el Perú.

Percibiendo la creciente polarización de la lucha de clases, que tendencialmente opone en el escenario político del país al frente de los capitalistas y al frente de los trabajadores en la disputa por el poder, el Apra asumirá progresivamente una alternativa programática que significa: de un lado, la vigencia de las instituciones inspiradas en la ideología liberal (igualdad y libertad formales, sufragio universal, separación de los poderes del Estado, derechos individuales); y, de otro lado, la asunción por el Estado de un conjunto de reivindicaciones de los trabajadores orientadas a elevar su nivel de vida, de tal modo que sea posible la satisfacción de sus necesidades básicas (vivienda, salud, seguridad social, educación, etc.). Esta convergencia entre la democracia liberal evolucionada y el "Estado benefactor" define el núcleo central del proyecto socialdemócrata dentro del cual el Apra busca ubicarse (*).

Los elementos políticos e ideológicos de este proyecto se encuentran esbozados en los escritos de Haya de la Torre de los años cincuenta y sesenta. Así, en sus crónicas sobre los países europeos reunidas en su libro *Mensaje de la Europa nórdica* (1956) dejará constancia de su admiración por los regímenes socialdemócratas: "la Europa de la verdadera democracia", pues considera que en ellos es posible "alcanzar la justicia sin inmolarse la libertad". Considera que allí el Estado no sólo garantiza la más irrestricta libertad sino que también asegura la satisfacción de las necesidades fundamen-

(*) La social-democracia en la actualidad no es más que la deformación de las ideas socialistas por el reformismo obrero que, después de la segunda guerra mundial, va a constituir la base sobre la cual se asienta la hegemonía burguesa, en varios países europeos. Sobre el Apra como opción socialdemócrata de la burguesía en el Perú, véase: A. Quijano, "1980: Las condiciones del enfrentamiento", en: *Sociedad y Política*, No. 8.

tales de los trabajadores, a diferencia tanto de los Estados capitalistas —en Estados Unidos, por ejemplo, se mantiene las libertades fundamentales; pero allí existe discriminación racial y miseria—; como de los Estados “comunistas” — que han resuelto el problema de satisfacer las necesidades fundamentales de las mayorías; pero donde no existe libertad. Los países escandinavos —señala Haya de la Torre— “han alcanzado el más alto nivel de vida del mundo, la más amplia justicia social, y el mayor índice de cultura. Todo ello manteniendo la cabal libertad civil de las verdaderas democracias representativas y parlamentarias” (“Viajeros a un solo país”, 1959).

Esta perspectiva —que en la práctica significa el abandono definitivo del nacionalismo democrático radical del proyecto aprista original— constituirá la base sobre la cual Haya de la Torre y el Apra diseñarán la línea política tendiente al reflotamiento de la democracia liberal en el Perú. Algunos hechos políticos de los últimos años, así como el papel del PAP en la Asamblea Constituyente —en donde tuvo una mayoría relativa— son indicativos del nuevo proyecto político. Entre las modificaciones políticas más importantes se encuentran las aprobadas en el XII Congreso del PAP, particularmente: la consideración de **El antimperialismo** y el Apra como el libro en donde se encuentra el núcleo central de la ideología aprista; el rechazo del “sindicalismo libre” como eje de la política sindical del partido; y el mayor énfasis en la defensa de una política estatal asistencialista. La Constitución de 1979 —en cuya elaboración el Apra tuvo un papel decisivo— intenta plasmar esa orientación, aunque todavía de manera ambigua y débil. Así, al lado de las instituciones políticas inspiradas en la ideología liberal y en el régimen económico de base neoliberal (la “economía social de mercado”), se plantea el reconocimiento del carácter “benefactor” del Estado, al institucionalizar la responsabilidad de éste en la solución de las demandas colectivas de los trabajadores (salud, educación, vivienda, etc.).

Es así, que las contradicciones y el particular derrotero político e ideológico, en el marco de una profunda crisis del sistema de dominación y del ascenso del movimiento de masas, determinará que la crisis del Apra, que llega a su punto culminante en el XIII Congreso derive en la puesta en evidencia de dos líneas políticas que expresan proyecciones tácticas y estratégicas divergentes en cuanto a la implementación de la opción socialdemócrata.

LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CRISIS DEL APRA

En este orden de cosas, serían tres los factores —en el conjunto de la sociedad peruana— determinantes de la crisis del Apra: la depuración en un sentido claramente burgués de las bases sociales del Estado en el Perú; el desarrollo de un nuevo movimiento obrero y popular; y, finalmente, una creciente diferenciación del papel político de las capas medias. Todo ello constituirá el marco en el cual operarán las líneas políticas que se disputan el poder al interior del Apra.

En primer lugar, la modernización y depuración del capitalismo que ha dado lugar a la consolidación de una burguesía de carácter básicamente urbano industrial, aunque extremadamente débil política e ideológicamente, por su íntima asociación con el capital imperialista así como por las contradicciones internas que la atraviesan, determinando su incapacidad para convertirse en una clase políticamente hegemónica. De allí que la consolidación política de la burguesía pase necesariamente por la alianza con los sectores conservadores de las capas medias.

Dentro de los sectores de las capas medias que se orientan hacia la burguesía, dos fracciones disputan la representación política del capital. De un lado un sector conservador que tiene como núcleo principal a los pequeños y medianos propie-

tarios urbanos y rurales, cuya alianza con el gran capital pasa por la defensa de la propiedad privada y la limitación de la intervención del Estado. De otro lado, un sector reformista y tecnocrático, en donde la cristalización de un frente con el capital significará la ampliación y consolidación del capital estatal.

En tercer lugar, la emergencia de un nuevo movimiento obrero y popular que tendencialmente se orienta hacia una mayor independencia gremial, política e ideológica, tanto frente a la burguesía como frente a las capas medias. Los paros nacionales de los años 1977-1979, el 30 por ciento de la votación alcanzada por los partidos de izquierda en las elecciones a la Asamblea Constituyente, expresan sin duda el nuevo estado de ánimo de las masas trabajadoras. Aún cuando la emergencia de las bases sociales de este nuevo movimiento obrero y popular no se han traducido en una modificación de su dirección política, pues siguen primando las que mantienen en lo fundamental una orientación democrática y nacionalista radical.

Es frente a esta situación que se plantean dos interpretaciones básicas del proyecto socialdemócrata que el Apra venía diseñando. Una línea de derecha que busca articular una opción táctica y estratégica en la cual converjan los intereses de la burguesía y de la pequeña y mediana burguesía, sobre la base de la exclusión de los sectores pobres de las capas medias, del proletariado, del campesinado y del semiproletariado, o a lo más su conversión en clientelas políticas de la burguesía. De otro lado, una línea de “izquierda”, en donde se buscaría articular al frente del capital sobre la base de la alianza entre la burguesía y los sectores tecnocráticos de las capas medias y en donde el Estado —que surja de ese bloque— asuma algunas de las demandas más inmediatas de los trabajadores. La posibilidad de unir coherentemente estas dos líneas no pasa por la buena o mala voluntad de los dirigentes, pues expresan las condiciones sociales en las que tienen que actuar. Estas condiciones están marcadas por la crisis del sistema de dominación burgués y el ascenso del movimiento de masas. Es allí en donde se tiene que establecer las líneas de las alianzas de clases que el Apra necesita desarrollar para convertirse en el eje de la recomposición del Estado burgués en el Perú.

Pero, también es necesario tener en cuenta dos hechos que marcaron decisivamente la evolución del Apra en el último año y que contribuirán a la condensación en líneas programáticas de las interpretaciones del papel del Apra en la lucha de clases: la muerte de Haya de la Torre en agosto de 1979 y la derrota del partido aprista en las elecciones del 18 de mayo de 1980.

EL PAPEL DE HAYA DE LA TORRE

Sin duda alguna, un elemento importante en la comprensión de lo que ha sido —e inclusive de lo que puede llegar a ser el Apra, es el papel que jugara Haya de la Torre—. Haya tuvo en los años treinta la capacidad de traducir el estado de ánimo de las masas pequeño burguesas radicalizadas en un programa político antimperialista y antioligárquico. Cuando esas masas posteriormente modifican su lugar en la estructura social, diseñará una estrategia tendiente a expresar sus nuevos intereses sociales. Ello se traduce en la “convivencia” y en la “coalición del pueblo”, dos formas de articulación con los partidos burgueses que tiende a sostener el sistema de dominación oligárquico en crisis y a la vez garantizar un conjunto de ventajas sociales para las capas medias (empleo, educación, seguridad social, etc.). Finalmente, en los años setenta orientará al partido aprista en la dirección de convertirlo en el eje de la relegitimación del poder del capital en el país, sobre la base de una alternativa socialdemócrata.

En cada uno de esos cambios Haya de la Torre supo mantener la unidad del Apra. Y ello no era sólo un problema de tipo organizativo. Más bien su fundamento fue la profunda intuición y capacidad de Haya de la Torre para expresar intereses sociales reales, que eran en su momento los de la gran masa del partido. Supo ver el sentido del desarrollo de la lucha de clases y del papel de la pequeña burguesía en esos enfrentamientos. Inclusive optó por sacrificar a los sectores más radicales del Partido, como en 1958, en la perspectiva de que la masa mayor se orientaba por sus ventajas y privilegios sociales al interior del sistema imperante. Por ello no se puede entender el papel de Haya de la Torre en el Apra en la perspectiva de "traición a los principios". Más bien es necesario ver cómo, en cada nueva situación histórica, buscaba dar expresión política a los intereses reales de la pequeña burguesía.

Ello no obstante, no se debe olvidar además el papel de Haya de la Torre como el organizador del aparato partidario. En este sentido estableció un liderazgo carismático que estuvo legitimado por un conjunto de símbolos y el recuerdo de los mártires del partido. De allí que se desarrollara una mística alrededor del Jefe Máximo y del Partido, que junto a la estructura organizativa funcional y territorial, ha permitido la supervivencia del partido durante cincuenta años.

Situado por encima de las pugnas partidarias, aunque manteniendo el control de las decisiones claves, Haya de la Torre, mantuvo unificado el comando del Apra. Con su muerte, las tendencias y matices superpuestos al interior del partido van a salir a la superficie y se orientarán a controlar el aparato organizativo. Sin el árbitro respetado y aceptado por todos, las tendencias chocarán entre sí, sin posibilidad de conciliación. En la Convención que elige la fórmula presidencial para las elecciones de 1980, en el Plenario de fines de mayo y sobre todo en el XIII Congreso se hará patente la ausencia de Haya de la Torre para mantener la unidad del Partido Aprista.

La derrota electoral del Apra

La derrota del Apra en las elecciones presidenciales del 18 de mayo y la importante disminución de la votación respecto de las elecciones del 10 de junio de 1978 constituye otro de los detonantes de la crisis aprista. De un lado, permite la polarización de todos aquellos sectores descontentos con la forma en que se había conducido la campaña electoral y con la línea política que se le impuso. De otro lado, se frustraban las expectativas de dirigentes y militantes de base de usufructuar del control del gobierno, tal como era ya evidente durante el último tramo del gobierno de Morales Bermúdez.

Los errores que se le imputan al sector que controló y condujo la campaña electoral abarcan desde desviaciones ideológicas hasta consideraciones de tipo personal. Así, se señala la excesiva izquierdización y la apertura hacia la llamada "izquierda responsable" como uno de los elementos que ahuyentaron a los simpatizantes e independientes que dentro de las capas medias habían venido votando por el Apra. Igualmente se señala que la imagen del candidato presidencial estaba demasiado vinculada al aparato del partido sin capacidad de ganarse el voto independiente; lo que entre paréntesis, habría sido causado por la nacionalidad chilena de su esposa. En consecuencia, la conclusión que extraen los grupos opositores sería que no ha sido derrotado el Apra sino la línea política y el grupo de los que se impusieron en el XII Congreso del partido.

También la derrota echa por tierra las esperanzas de muchos apristas de participar en el reparto de los cargos públicos. A ello habría que agregar el acuerdo del Plenario de fines de

mayo en el sentido de no participar en el gobierno de Belaúnde, sino de desarrollar la táctica de la "oposición constructiva". También en este caso un interés práctico coincidía con la oposición a una línea ideológica y tendería a aflorar como tendencia en el XIII Congreso.

DOS LINEAS EN EL APRA

Tres son los principales terrenos de diferenciación que tienden a cristalizarse en los dos proyectos políticos básicos que buscan definir el papel del Apra en la relación entre la burguesía y los trabajadores. En primer lugar, en cuanto al modelo económico que se postula, la disputa pasa por la forma de entender la relación entre el capital estatal y el capital privado. En segundo lugar, sobre las características del modelo político; la discusión gira en torno al énfasis sobre el predominio de las instituciones liberal-burguesas o aquellas que enfatizan el papel "benefactor" del Estado. En tercer lugar, en cuanto a la posición frente al régimen de Belaúnde; discutiendo sobre el carácter y formas de la oposición política y sindical.

Cada uno de esos planos constituye un campo de disputa al interior del Apra. Si bien esas líneas de diferenciación no han logrado constituir bloques políticos e ideológicos coherentes y sistemáticos, dándose el caso de matices que se entrecruzan, es posible distinguir dos polos principales alrededor de los cuales tienden a converger diversas corrientes y matices secundarios. Básicamente, se trata de dos maneras de interpretar las proyecciones del proyecto globalmente socialdemócrata del Apra: una de "derecha" y otra de "izquierda".

La línea socialdemócrata de "derecha"

En la denominada corriente "andresista" se encuentra el planteamiento más consistente de esta línea que enfatiza los elementos más conservadores de la opción socialdemócrata del Apra. Lo que la distingue será el peso que otorga a la ideología y a las instituciones liberales en el proyecto aprista de organización del Estado y la sociedad: de un lado, la primacía del mercado en la regulación de la actividad económica; de otro lado, la vigencia de la democracia parlamentaria como modelo de integración política de los trabajadores.

En lo que se refiere a las propuestas económicas, éstas giran principalmente en torno a la limitación de la propiedad estatal y al papel interventor del Estado en el ordenamiento económico. Si bien en esta propuesta no está planteada la idea de un "Estado gendarme", destinado a velar el orden público, de lo que se trata es de delimitar el papel del capital estatal y de su subordinación al capital privado. En este sentido se diferencia del liberalismo económico a ultranza, como el representado por el Partido Popular Cristiano.

Por estas razones, si bien plantea una reducción importante de la propiedad estatal, no llega a sostener la necesidad de su total reprivatización. Tampoco se trataría de plantear la total eliminación de la "propiedad social", ni de las "comunidades laborales", ni está en sus proyecciones la eliminación de los subsidios a los alimentos. Esto sería en líneas breves el contenido particular de su fórmula de la "economía social de mercado"; predominio de los intereses del capital privado, aunque regulados por la actividad estatal.

Sobre la estructura del Estado esta línea pone el acento en las instituciones liberal parlamentarias basadas en la participación universal de los individuos formalmente iguales y que pueden ejercer sus derechos políticos a través de la elección de sus representantes ante el Parlamento y ante el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, no se trata de un régimen liberal burgués tradicional, "exclusivamente político", sino de avanzar hacia una "democracia económica", en donde el Estado asuma algunas importantes necesidades colectivas de los trabajadores (salud, educación, vivienda).

Ideológicamente esta propuesta está teñida de un marcado tono anticomunista. En esta postura es posible descubrir una búsqueda de legitimación de la represión sobre el movimiento obrero y popular y de sus organizaciones políticas y sindicales. Este anticomunismo es el resultado de varias décadas de praxis aprista en este sentido, lo cual cumplía una doble función: cohesionar al PAP frente a la competencia de los partidos de izquierda y tener una carta de presentación aceptable para la burguesía, que seguía teniendo temor a las masas organizadas por el Apra. En la actualidad, este conservadurismo anticomunista del "andresismo" le sirve en su polémica al interior del partido para desacreditar a la tendencia "armundista": ésta es acusada de desviarse de la ortodoxia de la doctrina aprista al proponer un acercamiento a la izquierda marxista o, también, de haber permitido la infiltración comunista en el partido.

Tras esta línea política que defiende una interpretación más acentuadamente liberal del papel del Apra, probablemente se expresen la mediana y pequeña burguesía urbana y rural así como sectores acomodados de profesionales y los restos de la burocracia sindical de la CTP. El liberalismo económico y político de estas capas sociales tiene sus antecedentes en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Aprista las orienta hacia la lucha por la implantación de una democracia burguesa en el país, aunque sin abandonar las antiguas reivindicaciones contenidas en la llamada, por Haya de la Torre "democracia económica". Lo peculiar de la situación actual en cuanto al papel político de estos grupos, se debe a que habiéndose depurado el Estado burgués de los intereses de clase más atrasados, se encuentran directamente frente a la burguesía, de un lado, y a la clase obrera y al movimiento popular de otro. De allí que el espacio político que puedan ocupar se restringe a servir de colchón que amortigue los enfrentamientos entre las clases, papel que únicamente pueden desempeñar al interior de una democracia parlamentaria haciendo valer el peso efectivo de sus votos, de su influencia ideológica y de su habilidad en el manejo parlamentario.

En lo inmediato esta línea política aparece interesada en llevar al PAP a una colaboración directa con el régimen de Belaúnde. Esto se traduciría en una participación en los cargos públicos, que beneficiaría a sus clientelas partidarias, como en una mayor capacidad de presión para hacer valer los intereses económicos y sociales de la pequeña y mediana burguesía —y en esto confluiría con algunos sectores de AP y del PPC— frente a los intereses del capital monopolístico imperialista y nativo. En esta medida el "andresismo" constituiría la base de una alianza entre los sectores monopolísticos y los sectores medio y pequeño de la burguesía, dentro de un ordenamiento liberal parlamentario del Estado.

En esta perspectiva tiene que ser ubicada la defensa del "sindicalismo libre" como línea gremial del PAP. Se trata de una estrategia sindical que busca la colaboración entre el capital y los trabajadores, sobre la base de la manipulación de éstos en función de los intereses de aquéllos, y que ha llevado a la CTP en los últimos 30 años a convertirse en un freno de la presión reivindicativa de los trabajadores cuando éstas ponen en peligro las ganancias de las empresas. Esta política sindical ha significado la creciente incapacidad del PAP para ganarse a las nuevas capas de trabajadores. Para el actual régimen belaudista, que no cuenta con un aparato sindical que respalde su política económica, el desarrollo de esta línea sindical —encarnada en la CTP, dirigida por J. Cruzado— constituiría un factor importante para buscar amortiguar la creciente ola reivindicativa de los trabajadores.

“

En lo fundamental, las perspectivas de la evolución de las dos líneas políticas que atraviesan al Partido Aprista dependerán del desarrollo de dos tendencias de particular importancia en los enfrentamientos de clase en el período próximo. De un lado, de la posibilidad que tenga el régimen belaudista para avanzar en el proceso de recomposición del sistema de dominación y de consolidar un polo burgués capaz de atraer y fortalecer políticamente a las capas medias conservadoras. De otro lado, de la ampliación de las demandas sociales y políticas de las capas medias pobres y del movimiento obrero y popular, así como de la acentuación en su dirección política de las corrientes nacionalistas y democráticas radicales.

”

La tendencia hacia la profundización de la lucha de clases y la perspectiva del desarrollo de una conciencia de clase revolucionaria en los trabajadores, hacen precarias las bases sociales de un orden "democrático liberal" estable en el país. En esta situación una opción socialdemócrata "de derecha" —lo mismo que otras formas de expresión política de la mediana y pequeña burguesía en AP o en el PPC— tenderán a transitar hacia formas cada vez más autoritarias, incluso hasta abandonar los principios del liberalismo.

La línea socialdemócrata de "izquierda"

Los aspectos más radicales de la opción socialdemócrata del Apra serán asumidos y desarrollados aunque todavía no tengan una clara sistematización teórica por la tendencia "armandista". A diferencia de la línea anterior, enfatizan las instituciones destinadas a elevar el nivel de vida de los trabajadores, ya sea por el incremento de los salarios o por el financiamiento estatal de los servicios colectivos (seguridad social, salud, educación, vivienda). Se busca integrar a los trabajadores al Estado burgués acentuando más que la participación a través de las instituciones representativas, la participación social a través de la ampliación del empleo, los ingresos y los servicios básicos.

Por la forma que ha adoptado la lucha al interior del Apra, en donde la vigencia de una determinada tesis política tiene que ser justificada en función de un texto de Haya de la Torre, existe por parte de esta tendencia un replotamiento de El antimperialismo y el Apra. Sin embargo, ello no debería llevar al equívoco de sostener que se estaría retomando el nacionalismo democrático radical de los años 30. Pues, quizás con excepción de algunos núcleos de militantes que incluso aceptarían el método marxista, el levantamiento de las mismas banderas antiimperialistas y antioligárquicas únicamente constituye un ropaje atractivo para atraer a los sectores radicalizados antes que la expresión de intereses sociales reales. Ello porque en lo fundamental se ha modificado la estructura de la sociedad peruana homogenizándose en un sentido capitalista y asentándose un Estado sobre bases claramente burguesas, lo que ha determinado el cambio en el contenido de la lucha democrática y nacionalista, cambio asumido por el movimiento obrero y popular dentro de reivindicaciones nítidamente anticapitalistas. Además, contribuyen a ello los cambios en las propias bases sociales del Apra: progresivamente ha sido superada la importancia de las capas medias asalariadas, principalmente de orientación tecnocrática, sobre los antiguos pequeños y medianos propietarios. Por ello sería erróneo confundir el actual proyecto socialdemócrata que asume el Apra, aún en su interpretación más izquierdista, que se ubica en la perspectiva de la relegitimación del poder del capital monopólico interno e internacional en el Perú, con el proyecto nacionalista radical de los años treinta.

Tras esta línea izquierdizante se expresan principalmente las nuevas capas medias de orientación modernizante y tecnocrática, que buscan participar directamente en la gestión del Estado en condiciones de igualdad con la burguesía para lo cual necesitan consolidar el capital estatal. En la perspectiva de atraer a los trabajadores a este proyecto, se plantea la necesidad de asumir las reivindicaciones más urgentes de las capas medias pobres, así como las de los sectores políticamente más atrasados del movimiento obrero y popular, dentro de una limitada democracia burguesa. Con ello se busca una cierta conciliación entre las clases, sobre las bases de un Estado benefactor, en la perspectiva de garantizar la estabilidad política que posibilite la institucionalización del poder burgués en el país.

El programa económico de esta línea política implica un fortalecimiento del capital estatal y una presencia significativa del Estado en el ordenamiento de la economía, pues se consi-

dera que ésta no puede ser regulada únicamente por las leyes del mercado. Como ha señalado Villanueva, la línea del Partido Aprista en materia de política económica sería "desarrollista y planificadora". Es también por ello que se oponen a una política indiscriminada de reprivatización de las empresas estatales, sostenida por la corriente más liberal. Además, se ha planteado la necesidad de profundizar las reformas del régimen velasquista así como el mantenimiento del rol preponderante del Estado en la economía. Propuesta que difiere de la sostenida en El antimperialismo y el Apra. En ese libro se plantea como modelo económico del "Estado antimperialista" al capitalismo de Estado, constituido a partir de la nacionalización de la tierra y las industrias. En lugar de ello, en la actualidad, se enfatiza la planificación estatal, a partir de la coexistencia entre el capital privado y el capital estatal.

En cuanto al modelo político de esta propuesta, en lo fundamental se asumen las instituciones liberal burguesas, aunque enfatizando el rol preponderante del poder ejecutivo y las instancias de decisión tecnocráticas. La tesis del "congreso económico" como complemento de las instituciones liberales (el cuarto poder del Estado, como había señalado Haya de la Torre) constituye una redefinición de la "democracia funcional", modelo antiliberal de El antimperialismo y el Apra. Ya no se trataría de sustituir al ciudadano como cantidad y convertirlo en ciudadano como calidad (trabajador) sino de una forma de integración del capital, el trabajo y el Estado.

De este modo, la base social del Estado propuesto estará constituida necesariamente por la alianza entre la gran burguesía monopólica y las capas medias, en donde la gestión del Estado pasa por los grupos tecnocráticos que buscarían apoyar en los sectores más atrasados de la clase obrera y sobre todo del semiproletariado urbano y rural. De ninguna manera será posible un Estado que se apoye en "una alianza de las clases explotadas", como demagógicamente propone A. Villanueva. Pues para que ello suceda realmente sería necesario desbordar los marcos del capitalismo, objetivo que no está planteado ni siquiera en las corrientes más radicales de esta tendencia.

Determinados acomodos tácticos en la coyuntura actual expresan de manera más precisa cómo estaría cristalizándose la estrategia "socialdemócrata de izquierda". En primer lugar, el planteamiento impuesto como línea oficial del PAP, tanto en el Plenario del 24 y 25 de mayo como en el XIII Congreso, de "oposición constructiva" al régimen de Belaúnde y de ninguna participación de militantes apristas en cargos públicos. Dos elementos confluyen en esta determinación: de un lado, el ir perfilando una línea política de diferenciación respecto al liberalismo belaundista —régimen considerado expresión de los "sectores plutocráticos"—; y, de otro lado, el cálculo más pragmático de capitalizar el descontento popular frente a un gobierno que será incapaz de resolver las principales demandas de los trabajadores. El diputado aprista Valle Riestra ha expresado con claridad este segundo aspecto: "Si nos unimos a AP caeremos con FBT. Si lo vigilamos y lo combatimos capitalizaremos la frustración popular, la gran desilusión".

Esta posición implica también una definida política de alianzas. Dentro de una perspectiva que implique acercamiento al movimiento obrero y popular, en la situación actual, estas pasan por la izquierda marxista, aunque por definición del propio Villanueva no se trata de "una alianza genérica con la izquierda marxista" sino con aquellos sectores de la "izquierda responsable". Esta posición no constituye un planteamiento para el largo plazo sino que ya se viene configurando en un conjunto de acciones concretas. Tal el caso de la defensa de los derechos humanos y oposición a los gobiernos dictatoriales.

Esta búsqueda de una alianza con los partidos de izquierda no constituye únicamente un cálculo táctico programático. Va más allá. Expresa la existencia de un campo reformista en el es-

cenario político del país en donde converge el reformismo obrero con el reformismo burgués. El núcleo central de esta convergencia radica en el interés común por ampliar la democracia burguesa, de tal manera que las capas medias pueden seguir jugando un papel político clave en los enfrentamientos de clase. Tal es el caso significativo de *El Diario de Marka* y de las corrientes políticas que allí se expresan. Sobre la base de una "izquierda nacional" se buscaría la coincidencia de la izquierda marxista democrático radical con la línea socialdemócrata de izquierda del Apra. Sobre la perspectiva de garantizar la democracia liberal burguesa frente a las amenazas del fascismo, se busca limitar las reivindicaciones anticapitalistas de los trabajadores al terreno de la democracia burguesa. Esta perspectiva en la experiencia histórica última de América Latina se ha mostrado ilusoria (el golpe militar boliviano es un buen ejemplo de ello) y, por el contrario, tiende a limitar y distorsionar el proceso de autonomización política e ideológica del movimiento obrero.

De otro lado, el replanteamiento de la política sindical del PAP por esta tendencia constituye otro elemento que va configurando la alternativa socialdemócrata de izquierda. El XIII Congreso la acordó en términos de "frente único de clases productoras explotadas" autónomo y sin dependencia extranjera. Con ello se abandona la tesis del "sindicalismo libre", propatrimonial y amarillo, subordinado a los brazos sindicales del imperialismo norteamericano y que durante alrededor de 30 años constituyó la línea oficial del Apra. Para A. Villanueva, el "sindicalismo libre" permitió, al finalizar la segunda guerra mundial, recuperar los derechos conculcados de los trabajadores. Sin embargo, ya hacia fines de la década del 60 se comienzan a desarrollar nuevas condiciones sociales que hacen obsoleta la línea de la CTP pues "había devenido en un factor de cooperación con el sector empresarial", por lo que "disminuyó su acción, su beligerancia". Frente a ello, planteará la necesidad de readecuar la línea sindical del PAP en términos de un "sindicalismo de frente único" que le permita "reacquirir poder, beligerancia, definición clasista". Este proceso de reacomodo de la línea sindical del PAP, posibilitaría canalizar las presiones reivindicativas de los trabajadores, sin sobrepasar los límites del capitalismo. Esta propuesta sindical, por lo tanto, constituye una pieza clave en el desarrollo de una estrategia socialdemócrata para recomponer el frente político de la burguesía al encuadrar las demandas de los trabajadores y distorsionar el desarrollo de una conciencia clasista.

Es posible que esta línea política pueda consolidarse en el período inmediato. A ello concurren dos hechos principales: la creciente presión reivindicativa de los trabajadores que buscan recuperar sus ingresos y condiciones de vida deteriorados en los últimos siete años y el carácter fundamentalmente reformista de la dirección del movimiento obrero y popular. Situándose en el terreno reivindicativo y sin competencia por la izquierda en un terreno diferente, la opción socialdemócrata de izquierda tiene la posibilidad de convertirse en una alternativa política suficientemente coherente para la mantención del poder del capital en el Perú.

Sin embargo, a largo plazo, si esta alternativa lograra constituirse en el eje de articulación política del poder político del capital, pondría en evidencia su carácter extremadamente endeble. Un régimen político socialdemócrata implica la existencia de una estructura productiva que sea capaz de producir una masa de plusvalía suficiente como para asegurar por otro lado a los trabajadores un nivel de vida alto, por lo menos para los sectores más organizados, asegurando así su lealtad a la burguesía. Es evidente que en las condiciones de un país capitalista dependiente como el Perú con profundas contradicciones estructurales internas y en un período de crisis global del capital esas bases económicas no existen ni pueden existir. De allí que en última instancia, esta línea política no sea más que una postura demagógica y confusionalista destinada a trabar el desarrollo de una estrategia socialista de los explotados.

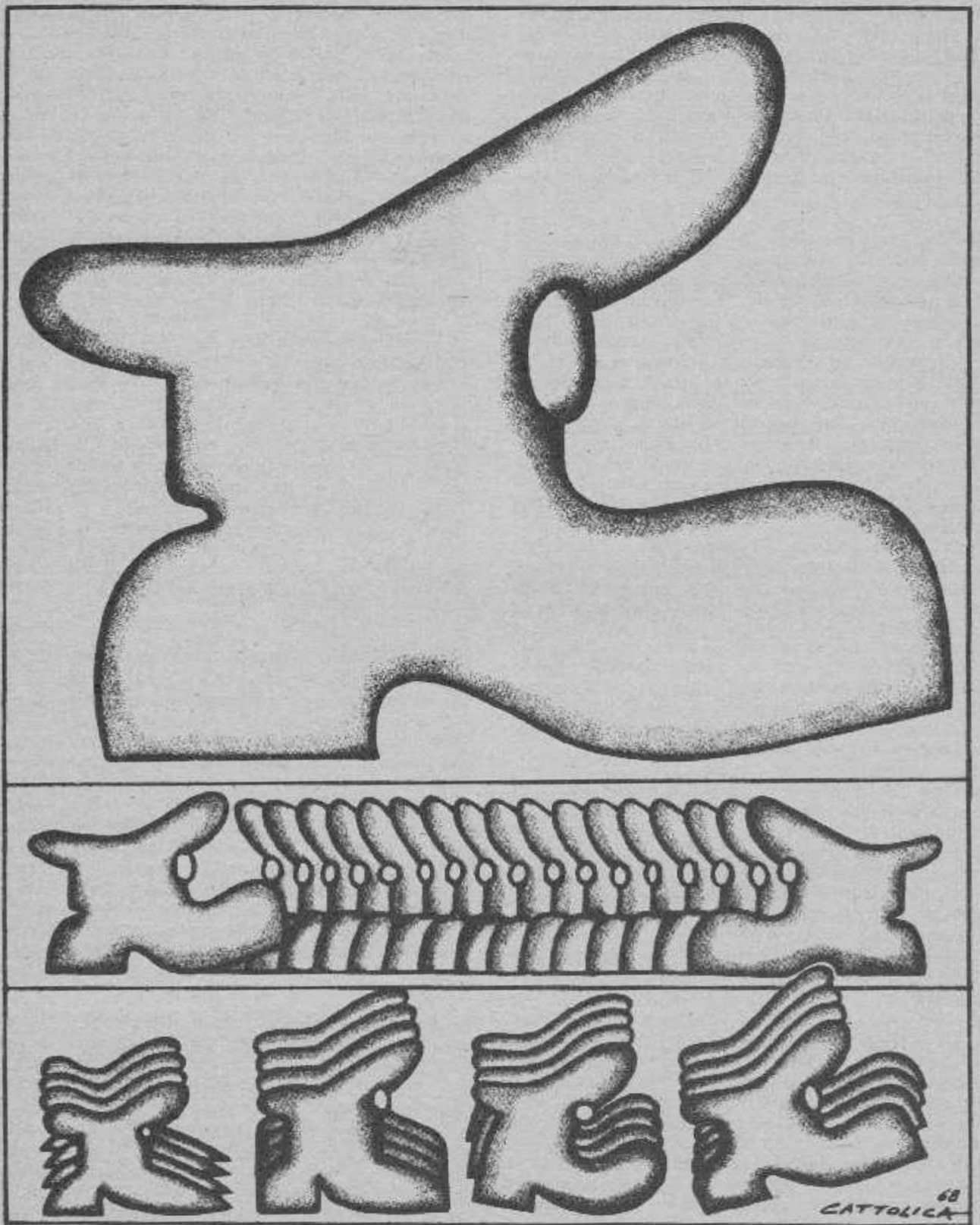
CONCLUSIONES

Los intentos de los principales dirigentes por recomponer la unidad orgánica del PAP han avanzado de manera significativa en los últimos dos meses. El predominio de una ecléctica y heterogénea posición centrista y la incorporación de militantes de las tendencias disidentes en los órganos de dirección del partido ha servido para impedir, por el momento, la ruptura del Apra. Consideraciones de orden táctico —particularmente la participación en las elecciones municipales de noviembre y la necesidad de presentarse allí como un bloque lo suficientemente homogéneo para recuperar la votación perdida en las elecciones presidenciales de mayo— deben haber pesado suficientemente como para lograr la conciliación transitoria de intereses tan abiertamente contradictorios. En esta perspectiva de la unidad partidaria, son indicativos dos hechos: el apartamiento del primer plano de la escena política de los principales caudillos de las tendencias en pugna (Villanueva y Townsend); y, de otro lado, el limado de las posiciones más radicales, tanto de derecha como de izquierda, como se pone en evidencia en declaraciones recientes de importantes dirigentes apristas (León de Vivero, Melgar, Sánchez, Priolé).

Desde este punto de vista, es posible considerar que la recomposición orgánica del partido aprista no significa la superación de las divergencias de las dos líneas políticas que se disputan su dirección y que sólo razones de orden táctico explicarían la posibilidad de la unidad. Ello se ha traducido en la ausencia de predominio de cualquiera de las dos tendencias básicas y de su subordinación a una posición política de centro, expresada en una amorfa capa de dirigentes. A partir de estas consideraciones, puede esperarse —una vez atravesado el período de las elecciones municipales— una agudización de la crisis aprista y el consiguiente afinamiento y consolidación de las alternativas programáticas, tácticas y estratégicas, que se disputan la hegemonía al interior del Apra.

En lo fundamental, las perspectivas de la evolución de estas líneas políticas dependerán en gran medida del desarrollo de dos tendencias de particular importancia en los enfrentamientos de clase en el período próximo. De un lado, de la posibilidad que tenga el régimen belandista para avanzar en el proceso de recomposición del sistema de dominación y de consolidar un polo burgués capaz de atraer y fortalecer políticamente a las capas medias conservadoras. En esta perspectiva, la línea socialdemócrata de derecha podría afirmarse como expresión de esos sectores y de su orientación política. De otro lado, de la ampliación de las demandas sociales y políticas de las capas medias pobres y de la clase obrera y del movimiento popular, así como de la acentuación de su dirección nacionalista y democrático-radical, podría esperarse un reforzamiento de la línea socialdemócrata de izquierda dentro del Apra.

En ambas variantes —de derecha o de izquierda— el Apra constituiría la alternativa más viable para la vigencia de la democracia burguesa en el país, pues podría cumplir el necesario papel de intermediación política entre la burguesía y los trabajadores. Con ello se crearían las condiciones para que las capas medias busquen erigirse en árbitros del enfrentamiento que opone a las dos clases básicas de la sociedad peruana y recuperar, de esta manera, los privilegios económicos y sociales que disfrutaban en el pasado. Sin embargo, esta perspectiva a largo plazo se muestra ilusoria, puesto que implicaría alterar las actuales tendencias de la acumulación capitalista; lo cual, en las actuales condiciones, sólo podría ser realizado por una revolución anticapitalista. De allí que la alternativa aprista, necesariamente lleve a continuar el camino hacia el reforzamiento de la dominación del capital y a entorpecer el triunfo de la revolución socialista.



BOLIVIA: LA TRAGEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES

josé oruro

Para los explotados, peruanos y ante todo para el proletariado y los revolucionarios socialistas, Bolivia tiene un significado histórico fundamental: Durante los últimos treinta años, es la sede de los más importantes y profundos esfuerzos de los trabajadores de América Latina para conquistar su propio poder, la democracia directa de las masas, a través de sus propias organizaciones y bajo el control inmediato de sus bases y la dirección del proletariado revolucionario. Es decir, para realizar la revolución socialista.

La reciente etapa de esas luchas acaba de cerrarse, desafortunadamente, con la derrota de las masas y la imposición sangrienta de una nueva dictadura militar de expresa orientación fascista. Esta vez, contando con el apoyo y la intervención abierta de militares argentinos. No hace mucho, en nuestro propio país y con la no desmentida complicidad de militares peruanos también, agentes de la dictadura argentina secuestraron y asesinaron a ciudadanos de ese país que luchan contra ella. Estos hechos configuran un cuadro extremadamente grave, pues demuestran la existencia de una asociación contrarrevolucionaria de las fuerzas armadas de estos países.

En consecuencia, la solidaridad de clase con los trabajadores bolivianos no es solamente una forma de la fraternidad. Es, sobre todo, una conducta de autodefensa y de lucha conjunta contra un mismo y común enemigo, el capital internacional e interno, la burguesía imperialista y dependiente, su Estado y sus agentes militares y civiles.

Derrotadas una y otra vez hasta ahora, las masas explotadas bolivianas no han cesado ni cesarán en esta lucha ejemplar para todos los trabajadores de América Latina. Para que en las próximas etapas podamos combatir conjuntamente, es indispensable para todos nosotros estudiar y discutir con la máxima atención esa extraordinaria experiencia. Hacerlo es tanto más urgente y necesario, porque en este mismo momento, en nuestro propio suelo, aparecen claros indicios de que comienzan a actuar fuerzas contrarrevolucionarias que buscan preparar las condiciones de otra etapa de represión sobre las masas, cuyo desarrollo puede llevar a imponer otra dictadura militar similar a las del Cono Sur.

EL CARACTER DE LA CRISIS POLITICA BOLIVIANA

Bolivia es una formación social de contrastes excepcionalmente pronunciados. Principalmente entre el avanzado carácter de sus luchas políticas, pues allí revolución y contrarrevolución se definen en torno de la victoria o la derrota de la revolución socialista, y el no menos notable atraso del desarrollo de su economía capitalista dependiente.

Desde este punto de vista, Bolivia es una ilustración extrema de que no hay ningún automatismo mecánico en las relaciones entre las características de la base económico-social y las de las luchas políticas entre las clases sociales de una determinada formación social. Y de que es indispensable hacer, en cada caso, el esfuerzo de descubrir en la investigación y en la práctica política el carácter específico de las luchas de clases y las condiciones concretas que las determinan, como requisito central de la victoria revolucionaria.

No está aún investigada suficientemente y por eso no está aún contestada, la decisiva pregunta sobre cómo fue posible que el reducido proletariado y en particular el aún más reducido grupo minero de esa clase, en un país de tan bajo desarrollo capitalista, alcanzara el más alto nivel de desarrollo político de todo el proletariado latinoamericano, desde el punto de vista

de su conciencia revolucionaria, durante un período relativamente extenso, a pesar del atraso económico y socio-cultural del conjunto de su sociedad, si se la compara con los vecinos casos de Chile o de Argentina, por ejemplo.

El hecho reconocido es, no obstante, que la presencia de un movimiento obrero con tales características, es lo que otorga a las luchas políticas bolivianas de las últimas décadas no solamente su particular agudeza, sino sobre todo su carácter histórico definido de enfrentamiento permanente y hasta ahora irresuelto entre revolución socialista y contrarrevolución burguesa, desde 1952 en adelante.

A lo largo de los últimos treinta años ni la burguesía ha podido consolidar y legitimar su dominación y mucho menos en condiciones democráticas, ni las masas explotadas y su dirección proletaria han logrado culminar sus esfuerzos de destruir aquella dominación e imponer su propio poder. Eso se traduce, como es notorio, en una crisis política permanente en ese país durante todo este período, que no podría terminar sino con la derrota definitiva de la burguesía y de sus fuerzas armadas o con el aplastamiento y destrucción de los movimientos revolucionarios por un período prolongado.

Lo que da a estas luchas de clases y a la crisis política permanente que ellas han determinado, un significado histórico inicialmente singular en América Latina, es el hecho de que el proletariado revolucionario boliviano y el frente de explotados que conduce, no solamente han hecho explícito el contenido y la finalidad antiburguesa de sus luchas, sino también la radical orientación antiburocrática de las mismas. Esto es, la revolución socialista por la cual esas masas combaten desde hace treinta años, implica la democracia directa de los explotados, su poder directo a través de sus propias organizaciones de masas y por eso bajo el control inmediato de sus bases, como forma institucional del poder político revolucionario, en contra de toda forma de poder que implique un aparato burocrático, administrativo y represivo, separado del control inmediato y directo de las masas, como ocurre con el Estado Burgués y con el Estado burocrático emergido después de la destrucción del anterior.

Y esa orientación a la par antiburguesa y antiburocrática del movimiento revolucionario del proletariado boliviano, no es y no ha sido simple o solamente un postulado ideológico de algunas minoritarias corrientes, sino por el contrario la tendencia práctica y actuante de las masas en todos los momentos más altos del desarrollo de sus movimientos revolucionarios.

De ese modo, la experiencia revolucionaria de los trabajadores bolivianos se inscribe dentro de la ya extensa secuencia de luchas por la democracia directa de las masas, bajo la dirección del proletariado revolucionario, que desde la Comuna de París en 1871 se van multiplicando en diversos y muy distintos escenarios concretos por más de un siglo, demostrando sin lugar a dudas que esa orientación de las luchas de los explotados del capital, no es un sueño utópico sino una tendencia histórica objetiva central del movimiento revolucionario de los frentes de explotados que emergen bajo la dirección del proletariado, y que va fortaleciéndose y ampliándose en todas partes, y que en cada situación en que las masas mismas son las protagonistas de procesos revolucionarios, la forma institucional característica que asume el poder de los explotados del capital es la formación de organismos de poder directamente controlados y gestionados desde las bases, que se articulan y se centralizan, o tienden a ello, como poder global en la sociedad, reincorporando así el poder político en la vida diaria de las masas, en contra del surgimiento de un nuevo aparato burocrático, administrativo y coercitivo, cada vez más separado del control de las masas y que las va sometiendo a una nueva dominación.

En esta perspectiva, y en medio de la crisis capitalista internacional y de la crisis de la dominación burocrática que viene avanzando en Europa del Este a pesar de las previas derrotas de los movimientos de masas en Alemania Oriental, en Hungría, en Checoslovaquia, alcanzando un nuevo punto de maduración con las actuales luchas en Polonia, todos nosotros en América Latina y fuera de ella, no podemos dejar de percibir plenamente el porte histórico del significado de la experiencia revolucionaria boliviana para el futuro desarrollo de las luchas por la revolución socialista.

REVOLUCION ANTIOLIGARQUICO-NACIONALISTA Y REVOLUCION SOCIALISTA

Como es ahora ya suficientemente establecido en la investigación y avanzado en el debate político, la naturaleza y las perspectivas de las luchas de clases en gran parte de América Latina y en particular en los países de más tardía y lenta expansión y generalización del capital, son definidas por la peculiar combinación de los problemas correspondientes a la revolución democrático-nacionalista con los que hacen parte de la revolución socialista, de tal modo que las tareas implicadas en la primera no pueden llevarse a cabo plenamente sino como parte de la segunda, así como las tareas de ésta última no podrían desarrollarse exitosamente sin contener las de la otra.

Ello ha sido el resultado del modo en que, desde fines del siglo XIX, la implantación del dominio del capital ya en su fase monopolista y bajo control imperialista, reconfiguró las bases materiales y sociales y las tendencias del movimiento de las clases y del Estado, a lo largo de un proceso histórico específicamente diferente que en los países principales, de Europa, de Japón y de Estados Unidos.

En tal entraña histórica, las necesidades políticas burguesas democráticas y nacionales no podían asumir el contenido característico de las revoluciones democrático-burguesas europeas, ni ser acaudilladas por la propia burguesía y asumieron más bien el contenido específico de revoluciones "antioligarquico-nacionalistas", bajo el liderazgo de las capas medias y, después de México, en ningún lugar de América Latina pudieron culminar como tales, sino como Cuba mostró y Nicaragua comienza a corroborar, mutándose en la iniciación del ciclo socialista. Si bien, en consecuencia y como lo sostuviera Mariátegui, en el terreno del movimiento táctico las cuestiones democráticas (pequeño burguesas y populares, hoy por la creciente necesidad antidemocrática de la burguesía) no pueden dejar de ser parte central de la acción agitativa, movilizadora y organizadora, como condición para cimentar y desarrollar vastas alianzas de las clases dominadas y medias, la perspectiva estratégica no puede ser sino la de la revolución socialista, como condición para conquistar la dirección de esa alianza para el proletariado revolucionario, condición, a su vez, para garantizar la culminación exitosa del movimiento y la continuidad y desarrollo del proceso de la revolución, afirmando y consolidando el poder de las masas.

Mariátegui fue el primero en descubrir y sostener, solitariamente, esa especificidad de la historia latinoamericana. Tras su muerte y la prolongada hibernación de su pensamiento político, factores sociales e ideológicos bloquearon la fecundidad de sus descubrimientos en las luchas revolucionarias de estos países. Stalinistas y Trotskistas, cada cual a su modo, contribuyeron a ese resultado, pavimentando el camino de la misificación de tipo aprista en la conciencia de las masas. A pesar de eso, y como lo prueban las experiencias de Cuba y Nicaragua, triunfantes, y de Bolivia y Chile, derrotadas, la práctica viva de las luchas de clases no podía dejar de poner el descubierto la actuación de esas determinaciones históricas particulares que Mariátegui había señalado. En América Latina, en

general, y en los países andinos en particular, no hemos aún terminado de cancelar esa larga etapa de confusión, pues aunque nuevos partidos y tendencias han entrado en escena después de la revolución cubana y de la ruptura chino-rusa, es aún irregular y lento el proceso de clarificación de este debate.

Bolivia es uno de los escenarios privilegiados de la actuación de estos factores ideológicos, de su entrelazamiento con las inevitables tendencias de las masas a orientarse en su movimiento por encima de esas confusiones, así como de los límites y frustraciones que de esa situación continúan resultando. La etapa reciente y la derrota de las masas, no podrían ser explicadas por fuera de esas cuestiones.

LA CRISIS DEL ESTADO OLIGARQUICO

El primer momento en que las cuestiones de la "revolución antioligárquico-nacionalista" y las de la "revolución socialista" aparecen cruzándose en las luchas de clases de Bolivia, fue la revolución de 1952.

Aquella fue la culminación de un agitado proceso que se inicia inmediatamente después de la derrota boliviana frente a Paraguay en la llamada Guerra del Chaco, (1932-35), y cuyos efectos políticos fueron en muchos sentidos equivalentes a los que produjo en el Perú la derrota frente a Chile.

La crisis abierta de la dominación oligárquica se inició con enfrentamientos violentos entre sus diversas fracciones, incluidos golpes militares, principalmente los del General Toro, que hasta llegó a reclamarse de un "socialismo de Estado" aunque era un instrumento imperialista (Standard Oil) y de las fracciones más reaccionarias de la "rosca" oligárquica, y del General Busch quien encabezó una suerte de cesarismo nacionalista y fue prontamente derrocado.

Durante este período, el proletariado minero, el campesinado y las capas medias antioligárquicas y nacionalistas entran también en movilización buscando una salida propia a la crisis oligárquicas. Diferenciándose de ellos, núcleos de terratenientes, intelectuales y capas medias reaccionarias se orientan en una dirección explícitamente fascista. Y por su parte, la oficialidad joven, descontenta con la incapacidad y la corrupción del poder oligárquico tradicional, se organiza en grupos conspirativos.

Resultado de estas movilizaciones fue, en primer término, la organización del Partido Obrero Revolucionario (POR), de filiación trotskista en 1935; del Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), 1940, de confusa ideología democrática salpicada de fórmulas "socialistas", en donde se agrupaban intelectuales radicales y donde actuaban también los primeros núcleos políticos vinculados a la Tercera Internacional stalinista, de manera encubierta; a comienzos de la década de los 40 se organiza el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con ideología, programa y formas de organización de clara influencia aprista, bajo el liderazgo de Paz Estensoro. Los oficiales jóvenes se organizaron en lo que finalmente se llamó la logia RADEPA (Razón de Patria), y los grupos fascistas, en la línea de Primo de Rivera y de Mussolini, en la Falange Socialista Boliviana (FSB) (1937).

Esa etapa de fermento político-social, dio lugar en 1943 a un putsch militar encabezado por el Teniente Coronel Gualberto Villarroel, que en alianza con el MNR asume el gobierno, con una postura nacionalista y reformista, pero cuya conducta autoritaria y burocrática traducida el interés de bloquear la movilización independiente de las masas. Sin embargo, su prédica nacionalista y antioligárquica, aunque no respaldada por me-

didias reales que destruyeran las bases sociales del poder oligárquico-imperialista, al mismo tiempo que despertaba las expectativas de las masas ya en estado de agitación, concitó igualmente la furiosa reacción oligárquica e imperialista que respondería acusando al nuevo régimen de fascista y ligado al eje nazi-fascista en plena guerra contra las potencias imperialistas anti-nazis aliadas en ese momento a la Unión soviética staliniana. El PIR, en donde operaban los grupos comunistas de orientación stalinista, se sumó a esas acusaciones, en seguimiento de la línea general impuesta a todos los partidos comunistas o vinculados a ellos como en el caso del PIR, de un frente nacional con las oligarquías locales contra el fascismo. Esa política, bajo la guía de Earl Browder (entonces jefe del PC norteamericano), se constituía en el espurio equivalente de los frentes populares europeos donde participaban los partidos comunistas stalinianos, ya que en América Latina ello implicaba una alianza con las oligarquías proimperialistas contra los movimientos de las masas. Fue este "browderismo" el que en el Perú, como se recuerda, durante la misma etapa, llevó al PCP al apoyo al gobierno de Manuel Prado contra la oposición aprista, facilitando así la canalización de las masas en el aprismo.

El gobierno Villarroel-MNR tuvo un final sangriento en julio de 1946, cuando una insurrección apoyada por la reacción oligárquica e impulsada por el PIR lo derrocó y culminó con la masacre de numerosos integrantes del régimen, incluido el propio Villarroel, a quienes colgaron de los faroles de las calles de La Paz, como reacción a las arbitrariedades autoritarias de Villarroel, los asesinatos políticos de Challacollo y Chispata y el atentado contra José Antonio Arze, el jefe del PIR.

La insurrección popular que derrocó a la dictadura de Villarroel-MNR, tuvo un carácter ambiguo. Si bien fue una reacción a las arbitrariedades y crímenes políticos cometidos bajo el amparo del gobierno, y a las escasez y carestía de las subsistencias, y en algunos sectores desató inmediatamente impulsos de avanzar hacia una revolución efectiva, llegando hasta la formación de un Comité Tripartito Revolucionario integrado por estudiantes, obreros y maestros, que proclamaba la necesidad de cambios revolucionarios en Bolivia, la colusión de la dirección del PIR con los núcleos activos de la vieja "rosca" oligárquica, permitió el regreso al poder de los representantes de los "barones" del estaño, socios de la dominación imperialista a través de la disolución de ese Comité y su reemplazo por una Junta Provisional encabezada por el presidente de la Corte Suprema, la cual disolvió inmediatamente las milicias populares que habían surgido.

La Junta Provisional de Gobierno llamó a elecciones en enero de 1947, y en ellas triunfó Enrique Hertzog, representante de los "barones" del estaño, integrando después en su gabinete a miembros del PIR. La cartera de Trabajo fue encargada nada menos que a Alfredo Mendizábal, militante comunista del PIR, que había sido delegado boliviano a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana en 1929, en Buenos Aires.

La caída de Villarroel fue seguida por una furiosa lucha político-social, marcada por el rápido ascenso de las masas obreras, campesinas y de las capas medias. En Noviembre de 1946, se reúne el Tercer Congreso Minero en la localidad de Pulacayo y aprueba un programa político revolucionario, propuesto por los representantes trotskistas en el famoso documento conocido como las "Tesis de Pulacayo" y cuyo autor principal habría sido Guillermo Lora. Los puntos centrales de ese programa plantean, con notable precisión, las bases democrático-antimperialistas y el desemboque socialista de la posible revolución boliviana. De un lado, por la objetiva necesidad de llevar a cabo la remoción de las bases económico-sociales y políticas del poder oligárquico-imperialista en crisis, y de otro lado por la dirección proletaria del proceso, para garantizar que esas tareas no sean guillotinas. La necesidad de la independencia política del proletariado revolucionario para conquistar esa di-



política del proletariado revolucionario para conquistar esa dirección y oponerse a toda conciliación de clases. La ocupación y control obrero de las minas. El armamento de los trabajadores y la formación de milicias obrero-campesinas. La expropiación de las tierras de los gamonales sin pago. La unidad e independencia sindical de obreros y campesinos, como tarea de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y como clave de la revolución futura.

El reducido proletariado minero de un país atrasado, se alzaba en Pulacayo, al aprobar semejante programa, como la punta más avanzada del proletariado latinoamericano. Armado políticamente con un programa revolucionario, sería capaz en adelante de disputar la dirección de las masas explotadas con la pequeña burguesía democrático-nacionalista y, a pesar de sus frustraciones, impedir hasta ahora la consolidación y la legitimación del poder burgués.

En ese congreso participaron representantes de todas las tendencias políticas y principalmente los del MNR, con Juan Leclín Oquendo a la cabeza, y los del POR. El hecho de que en un congreso sindical se llegara a aprobar un programa político revolucionario, pone de relieve el nivel de desarrollo político del proletariado minero boliviano, así como la sin duda decisiva influencia que había logrado allí el POR, autor de ese programa, que a diferencia de todos los demás grupos trotskistas latinoamericanos había conseguido, entonces, descubrir las especificidades y las necesidades objetivas del movimiento de las masas trabajadoras de su país, en lugar de entraparse en una prédica generalmente doctrinaria como en todos los demás países.

En los seis años siguientes, la agitación y la movilización de las clases explotadas y medias se desarrolló rápidamente, chocando contra la represión del gobierno Hertzog-PIR desde el comienzo, y llevando a las masas a una pronta desilusión con la conducta del PIR cuyos ministros colaboraban en la represión gubernamental. Esa decepción de las masas implicaba al stalinismo, encubierto en el PIR, y a cuyas filas pertenecían los principales ministros.

Bajo la represión, los militantes del MNR aumentaron su presencia en los sindicatos mineros y fabriles y ganaron a la amplia mayoría de las capas medias. Paralelamente el POR

aumentó su influencia entre los obreros mismos y en importantes núcleos de intelectuales. Ambos partidos eran combatidos profundamente por el gobierno y fueron forzados a actuar en una suerte de frente único en la oposición. Eso explica por qué en la etapa siguiente, ambos emergen en la dirección del movimiento revolucionario de las masas, disputando la hegemonía y por tanto el carácter y las perspectivas estratégicas de la revolución.

Durante 1948 y 1949 los conflictos sociales fueron agudizándose ininterrumpidamente, y la represión del gobierno fue haciéndose más brutal, especialmente después del cambio de Hertzog a Urriolagoitia en la presidencia. El MNR intentó aprovechar esas condiciones para llevar a cabo un nuevo intento de putsch civil-militar en 1949 y tras la derrota de ese golpe, la represión militar se abatió con extrema ferocidad sobre los trabajadores fabriles de La Paz y los mineros de Siglo XX, asesinando a casi un centenar de obreros y sus familiares.

Tales hechos generalizaron el descontento popular y la profundización del enfrentamiento político y abrieron una etapa de crisis revolucionaria en el país, que se inicia con la huelga general de 1950 y culmina con la victoriosa insurrección revolucionaria de las masas en abril de 1952 y la destrucción total del Estado Oligárquico y de sus bases sociales.

En esa corta etapa, los obreros afirmaron su conciencia política y su lugar dirigente en el movimiento de masas, como se expresó en los congresos de fabriles y mineros en 1950; se extendió el movimiento de sindicalización campesina, especialmente en el área de Cochabamba. Y se radicalizaron los sectores medios urbanos, empujando al MNR a adoptar un lenguaje político marxizante, proclamándose sostenedores de las Tesis de Pulacayo, todo lo cual facilitó sin duda su crecimiento político en todos los sectores. Del mismo modo, los grupos comunistas que venían actuando dentro del PIR se vieron obligados, por el total desprestigio de ese partido dada su conducta cómplice con el gobierno de Hertzog en la represión obrera y el ataque al "trotskomovimientismo" —como ellos decían en el PIR— a organizar el Partido Comunista Boliviano, que en las nuevas circunstancias varió su línea pasando al apoyo del MNR.

El gobierno de Mamerto Urriolagoitia ensayó desviar el creciente movimiento revolucionario de las masas, llamando a elecciones generales en 1951. Estas fueron ganadas por Paz Estensoro. Urriolagoitia fraguó un operativo de traspaso del gobierno al General Ballivián, que el pueblo boliviano llamó

1952: DEL PUTSCH A LA REVOLUCION SOCIAL

Es bien conocido el hecho de que frente a la anulación de las elecciones, el MNR trató de responder organizando de nuevo un putsch civil-militar. Esta vez con la colaboración del General Antonio Seleme, Ministro de Gobierno de la Junta Militar, quien juró lealtad al MNR a cambio de la Presidencia de la República si el operativo era exitoso.

Demostrando reiteradamente su naturaleza política básica, como movimiento dirigido por capas medias antioligárquicas pero no antiburguesas, y nacionalista pero no antimperialista, el MNR estaba interesado en llegar al poder, pero estaba igualmente interesado en impedir el movimiento independiente de las masas, aunque éstas estuvieran bajo su influencia y lo apoyaran como lo apoyaban sin duda en la agitación de protesta por la anulación de las elecciones. Y por supuesto el MNR en lo que menos estaba interesado era en la destrucción de la fuerza armada. Por el contrario, el acuerdo con el General Seleme

y después el Acta de Laja, mientras las masas combatían, revelan inequívocamente que el MNR se esforzó hasta lo último, inclusive cuando ya no era viable, en preservar las fuerzas armadas del Estado oligárquico.

Sin embargo, de su lado los trabajadores bolivianos ya en activo proceso de agitación, de movilización y de organización durante todo el período, difícilmente podían ser simplemente puestos de lado en el enfrentamiento. Por encima de todo, cuando el proletariado había ya conquistado, con el programa de Pulacayo, una dirección y una perspectiva revolucionarias que el propio MNR, bajo las condiciones de la agitación en las bases no había podido ni rechazar ni sustituir, y que inclusive se vio forzado a defender y a asumir, a través de Juan Lechin, durante un tiempo, contra los ataques de la coalición "rosquera" con el PIR desde 1946 hasta 1950.

Por eso, cuando las acciones putschistas se iniciaron en la mañana del 9 de abril de 1952, los obreros fabriles de la Paz y los mineros de Oruro y de Milluni, decidieron por su propia cuenta y bajo su propia dirección, intervenir contra los militares en quienes veían, sin duda, la encarnación misma de los abusos políticos y de la explotación. Rebasando todos los límites y previsiones del operativo putschista los obreros no solamente derrotaron sino destruyeron las fuerzas armadas bolivianas.

La destrucción total de la fuerza armada, cuyo armamento pasó en su mayor parte a manos de los obreros, alteró de golpe las condiciones y las perspectivas del proceso: la intervención directa de las masas, transformaba un putsch pequeño burgués en una revolución social, permitiendo a la clase obrera y en particular a su dirección revolucionaria disputar con las capas medias democrático-nacionalistas la hegemonía del liderazgo del conjunto del movimiento de las masas, en la lucha por la definición de las perspectivas de profundización o de contención del proceso revolucionario.

En Bolivia, de ese modo concluía, con su destrucción, la larga crisis del poder oligárquico-imperialista y se establecía un nuevo punto de partida para la revolución boliviana. En América Latina en su conjunto, ese día comenzaba, también, la más profunda revolución social de toda su historia previa, y se abría un nuevo ciclo revolucionario en cuyo transcurso los factores y las fuerzas de la "revolución antioligárquico-nacionalista" irían quedando cada vez más claramente subordinadas a las de la revolución socialista, porque en adelante aquellas sólo podrían culminar dentro de ésta. No otro es, sin duda, el significado de la secuencia que va desde ese 9 de Abril de 1952 en Bolivia, pasando por la derrota, y no por acaso, de la experiencia de Guatemala en 1954, hasta la revolución cubana en 1959, que iniciada precisamente como una revolución democrático-nacionalista, pudo culminar victoriosamente y consolidarse solamente como revolución socialista.

A partir de entonces, revolución y contrarrevolución no podrán enfrentarse, en nuestro continente, sino asumiendo en lo concreto el antagonismo entre revolución socialista y contrarrevolución burguesa, vistiendo ésta cada más franca y plenamente el pardo y sangriento ropaje fascista. Por ello y en especial por la conciencia que de estas experiencias ha ido ganando la burguesía internacional imperialista, sus socios dependientes, y sus fuerzas armadas, todo equivoco acerca de la naturaleza básica de este enfrentamiento y en consecuencia acerca de las perspectivas estratégicas del desemboque de procesos revolucionarios, cualesquiera que sean las condiciones particulares de su iniciación en nuestros países, inclusive en aquellos de mayor presencia de los problemas pendientes de la revolución democrático-nacionalista, oscurece tanto el problema de la necesidad de destrucción violenta de todo el aparato represivo y administrativo-político del Estado burgués, como el problema de la intervención directa de las masas, bajo la dirección del proletariado, y la conquista de su propio poder, y

lleva en la práctica al proceso a un callejón cuya salida real es la derrota sangrienta de las masas. Testimonio de lo primero son los casos de Brasil, Chile y de la propia Bolivia, así como los de Uruguay y Argentina de lo segundo, en contraste con la reciente experiencia nicaragüense y ojalá también la salvadoreña.

ENTRE LA REVOLUCION DEMOCRATICO-NACIONALISTA Y LA REVOLUCION SOCIALISTA.

Trás la destrucción de las fuerzas armadas, el movimiento obrero conquistó por un corto pero decisivo momento la dirección principal del conjunto del movimiento de masas.

De esa manera, la revolución boliviana de 1952 tendía a asumir en los hechos el carácter de un poder conquistado por una vasta alianza de obreros, campesinos y capas medias radicalizadas, bajo la dirección del proletariado revolucionario, a pesar de la indiscutible gravitación de la dirección de las capas medias sobre el movimiento. En otros términos, el movimiento de masas tendía a desarrollarse bajo una dirección cuya hegemonía pugnaban por ejercer el proletariado revolucionario y las capas medias democrático-nacionalistas, en ese momento radicalizadas al extremo bajo la presión del movimiento obrero y del conjunto de las masas, y dadas las circunstancias en esa pugna emergía una tendencia a la primacía del proletariado revolucionario.

La dirección del proletariado revolucionario se concentraba principalmente en los sindicatos mineros. Estos estaban centralizados en la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), donde aunque era Juan Lechin, el principal dirigente minero del MNR, quien ejercía la presidencia, la influencia del POR en las bases y en la dirección era por todos reconocida, lo cual explica que fuera el Programa de Pulacayo la fuente principal de la orientación de la conducta política de los obreros mineros. Y esa Federación era claramente, como ha continuado siendo desde entonces, la dirección central del conjunto del proletariado boliviano y a través de ello, del conjunto del movimiento de masas de ese momento. En consecuencia, la disputa entre la clase obrera y las capas medias por la hegemonía del proceso revolucionario era, respectivamente, encabezada por el POR y el MNR. Este partido tenía sin duda una mayor presencia cuantitativa entre las masas campesinas y medias y una considerable presencia en el propio proletariado minero, mientras que el POR no había logrado, a pesar de su reconocida influencia ideológica y programática en esa etapa del proceso, un desarrollo orgánico equivalente.

Durante los primeros meses del proceso, se extendió el movimiento de sindicalización a todos los sectores: campesinos, obreros y capas medias, e inmediatamente se centralizó al organizarse la Confederación Obrera Boliviana (COB). Los sindicatos y la COB, emergieron como expresión del poder directo de las masas, porque no solamente operaban como organismos gremiales, sino como auténticos organismos de poder político, resolviendo los problemas pertinentes ya que todas las instituciones del previo Estado habían sido desmanteladas.

Ese poder político directo, cuya dirección era claramente ejercida desde la FSTMB, se apoyaba en las milicias obrero-campesinas que se organizaron inmediatamente, utilizando las armas conquistadas en la lucha y la destrucción del ejército profesional.

Fue ese poder directo el que permitió la rápida profundización del proceso revolucionario. Los campesinos iniciaron ma-

sivamente la expropiación sin pago de las tierras de los gamonales y su distribución entre la masa campesina. Y por su parte los obreros ocuparon las minas decretando su nacionalización sin pago y el control obrero de la producción.

Así, el conjunto del proceso no solamente se profundizaba y se desarrollaba en todos los frentes, sino que surgía por primera y hasta ahora única vez en la historia de las luchas de clases de América Latina la democracia directa de los explotados, organizados en un vasto frente bajo la dirección del proletariado revolucionario. Y todos esos pasos tendían al cumplimiento del programa revolucionario acordado por los obreros mineros en el Congreso de Pulacayo de 1946, con la inspiración de los militantes del POR boliviano.

De su lado, sin embargo, las capas medias democrático-nacionalistas dirigidas y organizadas en el MNR, se esforzaban por la reconstrucción del aparato institucional del nuevo Estado burgués, aunque no eran aún capaces de encuadrar en su propia perspectiva a todo el movimiento de las masas, y de impedir la profundización del proceso y la existencia del poder directo de los explotados. Por eso fueron forzados a consentir una fórmula política de transición que se institucionalizó como "Cogobierno del MNR y de la COB", durando la mayor parte de 1952.

Esa situación explicitaba formalmente la existencia de una dualidad de poderes, entre el Estado burgués en reconstitución y bajo la dirección del MNR, y el poder directo de los explotados expresado en la COB, cuya dirección se disputaban, cada vez más fuertemente andando los meses, el MNR y el POR.

Era evidente, durante esa etapa, que el gobierno del MNR era aún en la práctica prisionero del poder de la COB, pues los sindicatos y las milicias obrero-campesinas obedecían a ésta y no al nuevo Estado burgués. Estaban, objetivamente, dadas las condiciones para la resolución del conflicto de poder en favor de la COB, en favor de la democracia directa de los trabajadores bajo la conducción del proletariado revolucionario, y en consecuencia, la posibilidad del desarrollo del proceso en la ruta del socialismo revolucionario.

Nunca en América Latina había surgido con tanta nitidez esta necesaria combinación entre revolución democrático-nacionalista y revolución socialista; y nunca la experiencia histórica de constitución del poder directo de los explotados, aliados y organizados bajo la dirección del proletariado revolucionario, como resultado de la resolución revolucionaria de la crisis del Estado oligárquico-imperialista por acción directa de las masas, demostrando que en esta etapa de las luchas de clases en América Latina, ninguna revolución genuina, esto es, marcada por la intervención directa e independiente de las masas contando con un claro programa estratégico y un proletariado con elevada conciencia revolucionaria, podía dejar de desembocar, cualesquiera fuesen sus orígenes y cuestiones de partida, en la revolución socialista y en el establecimiento del poder directo, de la democracia directa de los explotados. Sin embargo, la objetiva dualidad de poderes y la ventaja del proletariado en esa relación durante los primeros meses no fue percibido ni reconocido por ningún partido revolucionario y mucho menos agitado el poder de la COB.

Indudablemente, la existencia de un proletariado con tan alta conciencia revolucionaria y de un programa estratégico que permitía a los trabajadores orientar su labor adoptando medidas derivadas de ese programa, se debían principalmente a la acción de los militantes del POR boliviano, organización trotskista ligada a la Cuarta Internacional entonces. Y ese es un mérito histórico que no se puede dejar de reconocer y que de hecho nadie en Bolivia, por lo menos, ha dejado de reconocer.

“

La derrota del proletariado revolucionario en favor de la pequeña burguesía democrática en el proceso boliviano, es decir, de la revolución socialista en favor de la "revolución nacional", no solamente significó la contención gradual y la distorsión y encallamiento del proceso mismo, sino también su desemboque final en el túnel sangriento del genocidio del proletariado bajo una dictadura militar, como en todos los demás casos de América Latina, después de Bolivia.

”

La responsabilidad de la dirección política del proletariado revolucionario sobre el movimiento de masas en particular en su disputa con las capas medias por la definición de la dualidad de poderes en favor de la democracia socialista, recaía pues principalmente en el POR.

En esa tarea, el POR tropezaba sin duda con dos grandes dificultades objetivas. Primero, la reducida magnitud de su militancia organizada frente a la gran masa del MNR. Segundo, la reducción numérica del propio proletariado como clase, y especialmente del proletariado minero, la vanguardia de la clase, en una formación social de base social abrumadoramente campesina, sobre todo, y pequeño burguesa, secundariamente.

Y, de otro lado, en el plano internacional, la hegemonía todopoderosa del imperialismo norteamericano sobre todo el mundo capitalista apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, se ejercía sin fisuras y sin ninguna contestación, de ningún grupo burgués, a diferencia de hoy día. Mientras tanto, Rusia y los países de Europa del Este bajo su dominio, estaban aún replagados en la consolidación de su reconstrucción interna, en aras de lo cual habían convertido a todo el movimiento comunista internacional en un factor dedicado casi exclusivamente, entonces, a la defensa de esa política llamada "pro paz" y que se traducía en la práctica en América Latina en la base de la posterior "coexistencia pacífica".

Esa situación internacional permitía al imperialismo norteamericano un margen muy grande de maniobra para bloquear, incluidos los medios de intervención directa, los movimientos revolucionarios nacionales que amenazaban convertirse en revoluciones socialistas. Recuérdese que en esos años fue derrotado el movimiento nacionalista de Mossadegh en Irán, permitiendo la vuelta de la sanguinaria dictadura del Sha, y más tarde el proceso reformista de Guatemala bajo Arbenz, con la invasión de Castillo Armas en 1954.

Todo eso ayuda, sin duda a explicar los problemas con que tropezaba la afirmación del poder revolucionario de los trabajadores bolivianos, contra el intento de restablecer el Estado burgués, sobre nuevas bases, que desarrollaba el MNR. No obstante, nada de eso puede explicar, y mucho menos justificar, el hecho de que fuera precisamente el POR boliviano, inspirador del Programa de Pulacayo, el que defecionó abiertamente en su responsabilidad de principal dirigente político del proletariado boliviano, en la hora decisiva.

Porque fue, el POR el que contribuyó decisivamente a alimentar la confusión de las masas y finalmente a la total pérdida de una dirección política revolucionaria, justamente en el momento en que ella era absolutamente indispensable para dirimir la lucha planteada. En efecto, el POR se dividió pronto en tres pedazos. La mayoría, incluidos algunos de sus intelectuales y cuadros obreros más importantes, decidió pasarse al MNR aduciendo que la revolución boliviana era democrático-burguesa y que era necesario apoyar a la pequeña burguesía democrática en el gobierno. Ernesto Ayala Mercado, Erwin Moller, Lidia Gueiler, Alvarez Plata, entre otros se incorporaron al MNR y pronto ocuparon puestos de importancia dentro del partido y en las instituciones del nuevo Estado. Curiosamente, nada menos que los trotskistas resultaban asumiendo una posición típicamente menchevique. Otra fracción, en acuerdo básico con esas posiciones, decidió, sin embargo, que era necesario preservar la independencia orgánica y se mantuvo fuera del MNR, aunque bajo la presión de Pablo acudiera a la inútil práctica del "entrismo" y en los hechos, por lo tanto, no pudiera diferenciarse. Finalmente una minoritaria fracción, liderada por Lora y en abierta pelea con la dirección de la Cuarta Internacional, quedó aislada e impotente, vacilante entre las opciones del debate. Así, en la hora decisiva, los trotskistas bolivianos en su gran mayoría y la propia dirección internacional de su organización, pusieron de manifiesto su inconsecuencia no solamente con sus propias y vocadas posiciones en el debate internacional, sino ante todo con las nece-

sidades del proletariado boliviano, dejándolo librado a la confusión y forzado al repliegue político después de una corta resistencia para preservar las bases de su poder.

Esa inconsecuencia y la defección secuenta, obedecieron en ese momento, como otras prácticas trotskistas han obedecido después en otros países bajo otras circunstancias, no solamente a una enteramente incorrecta evaluación de la coyuntura de las luchas de clases planteadas en Bolivia, sino también a un abandono explícito, teórico y práctico, de la defensa del poder directo de las organizaciones de las masas, en favor del poder de los partidos o, peor aún, de un solo partido (1).

Desde luego, si se trataba de la defensa del poder de la COB y de sus sindicatos de base, apoyados en las milicias obrero-campesinas, el POR sin duda podía contar con la adhesión de las masas bolivianas que han revelado a lo largo de treinta años, en 1952 y en la Asamblea Popular de 1971 como después en la reciente etapa, que su lealtad principal se debe a sus organizaciones de masas y no tanto a sus partidos políticos como tales y separados de esas organizaciones. En cambio si se trataba de competir con el MNR para lograr el gobierno propio del POR, las masas si bien adheridas al Programa de Pulacayo y a la influencia teórica del POR, no se identificaban y no tenía por qué hacerlo, con el trotskismo como tendencia política diferenciada, ni con el POR como partido y más bien se identificaban con el MNR, como el propio Lora reconoce, aunque convencidas de que sus conquistas se hacían a través de sus organizaciones propias de poder, los sindicatos y las milicias.

En ese terreno, pues, la competencia entre el MNR y el POR favorecía totalmente al primero y fué sobre esa base que la mayoría del POR decidió pasarse a ese partido, unos haciendo "entrismo" y los otros más desvergonzadamente. La idea de base entre ellos era, no sorprendentemente, que el apoyo popular mayoritario al MNR, dada la orientación revolucionaria práctica de esas masas, empujaría al MNR a avanzar en la revolución y que era mejor estar dentro para hacer caminar ese proceso. Y no faltaron quienes sostenían, inclusive, la extraña tesis de que el MNR era el ocupante práctico del POR en la dirección proletaria y que en ese sentido era más o menos una prolongación de éste, (Lora, op. cit. pg. 38).

En resumen, la posibilidad abierta de consolidación del poder directo de los trabajadores y el desarrollo de la revolución en la dirección del socialismo, fue derrotada por ausencia de una dirección política organizada, o en otros términos de un partido político idóneo, ya que el POR que era el único candidato a esa dirección defecionó en toda la línea dejando vencedor pleno del campo al MNR, y así a la hegemonía total de las capas medias en la conducción del movimiento de masas.

Antes de fin de año de 1952, el MNR era en realidad el único partido dirigente de la COB y su dominio político en los sindicatos mineros y en particular entre el campesinado se consolidó sin dificultad. La fórmula de "cogobierno MNR-COB", aún subsistente formalmente dejaba en la práctica de tener todo significado real.

Del mismo modo, pues, que no se puede regatear al POR la decisiva contribución a la educación inicial del proletariado revolucionario boliviano y a su participación central en la profundización de la revolución de abril del 52, base de las conquistas democráticas de las masas, tampoco se le puede ahorrar el indispensable reconocimiento de su responsabilidad en la derrota política del proletariado boliviano frente a la pequeña burguesía democrática, en ese momento, y en las reiteradas frustraciones de las luchas de los explotados de ese país que de esos hechos se han derivado hasta hoy.

(1) Véase en Guillermo Lora: *La Revolución Boliviana*, La Paz 1963, la defensa del poder del POR y no de la COB. Especialmente págs. 26 y 404.

DOMINIO DEL MNR Y REARTICULACION DE LA ALIANZA IMPERIALISTA EN BOLIVIA

Después de la defección del POR, y ya ganada la hegemonía de la conducción política de las masas, el MNR, ahora engrosado con la incorporación de algunos de los más prestigiosos líderes trotskistas, se dedicó al cumplimiento de tres líneas de tareas básicas: 1) Consolidar el aislamiento de la vanguardia revolucionaria de la clase obrera, romper la alianza obrero-campesina sustituyéndola con otra entre la pequeña burguesía y el campesino, convertir a la COB y a los sindicatos de base en instrumentos del partido en el poder, y liquidar las milicias obrero-campesinas conservando apenas durante un cierto tiempo algunos grupos campesinos armados bajo el total control del gobierno como instrumentos de represión contra la ya debilitada oposición revolucionaria. 2) La restauración institucional del Estado, burgués tanto en su aparato administrativo y político como y especialmente en su aparato de represión, reorganizando el ejército profesional mientras se desmantelaban las milicias obrero-campesinas.

La primera serie de tareas fue llevada a cabo por medio del control estatal de las conquistas básicas de las masas en los primeros meses de la revolución, de manera que el MNR pudiera aparecer como el paternalizador de la institucionalización y legalización de esas conquistas, ya que mientras no estuviera reconstruido el ejército profesional y todo el aparato del Estado burgués, no hubiera sido posible ni contener ni desmantelar esas conquistas.

En primer término, el MNR no pudo dejar de proseguir con la expropiación y la entrega de las tierras a los campesinos. Pero esa labor le permitió aparecer frente a las masas campesinas como el benefactor de ellas, desde que era el gobierno del MNR el que entregaba los títulos de propiedad de esas tierras. De ese modo, los sindicatos campesinos, si bien no podían desaparecer, fueron pasados al control del partido y en adelante su acción fue vaciada de su contenido político previo como órgano de poder para convertirse en un instrumento del partido y del gobierno.

En segundo lugar, el MNR no pudo dar marcha atrás la nacionalización de la minería del estaño, ocupada por los obreros desde los primeros meses, ni eliminar el control obrero ya instalado. Pero esa nacionalización fue institucionalizada por medio de la creación de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), como una empresa del nuevo Estado burgués y en consecuencia como una entidad burocrática. Y el control obrero fue también vaciado de su previo contenido revolucionario, por el simple expediente de nombrar a obreros mineros como representantes de la clase en el aparato burocrático de la COMIBOL, pero separados del control real de sus bases y en consecuencia arrastrados sin remedio a la corrupción burocrática y al aburguesamiento posterior.

La ausencia de una dirección revolucionaria efectiva en el proletariado, dejó limpio el terreno para que el MNR pudiera hacer aparecer medidas que eran ya parte de la institucionalización y recuperación burguesa de las conquistas previas de las masas, como medidas de profundización de la revolución, y en consecuencia al propio MNR y a su liderazgo como los genuinos representantes de los impulsos revolucionarios de las masas. Es decir, inclusive en el terreno ideológico, el MNR tuvo cumplido éxito en imponer sobre las masas una versión pequeña burguesa de la revolución, que terminó por eso en adelante caracterizada simplemente como una "revolución nacional" desde sus orígenes y no solamente en su nueva etapa.

“

Esa lucha de resistencia no puede pasar por fuera del poder aglutinador de la dirección de las primeras. Pero no puede ser contenida dentro de los límites exclusivos de la democracia burguesa, a la que apuntan esos sectores. Y del otro lado, sin apoyarse en las necesidades democrático-nacionalistas del movimiento de masas y sin apoyarlas, la lucha por la culminación socialista de la lucha democrática, condición para impedir una nueva etapa de derrotas, no puede ser impulsada.

”

Y en efecto, la revolución que fue la obra de una alianza de clases dominadas y medias, con una dirección inicialmente ganada por el proletariado revolucionario y que pudo por eso profundizarse en sus primeros meses, terminó convirtiéndose, tras la derrota de la vanguardia revolucionaria minera, en un proceso de consolidación bajo la plena hegemonía de la pequeña burguesía democrática y más tarde institucionalizada como parte del nuevo poder burgués emergente sobre esas bases. La pugna por la definición de la revolución entre los límites de una "revolución nacional" de contenido pequeño burgués al comienzo y burgués en adelante, y las perspectivas de una revolución socialista, se había resultado en favor de la primera. 3) Dueño del campo, el MNR no tardó en reconstruir la alianza imperialista en Bolivia, bajo el dominio de la todopoderosa burguesía norteamericana y de su Estado, como marco y como base para el relanzamiento del proceso capitalista dependiente en el país.

Ese proceso consistió en el uso de la renta minera para financiar la formación de nuevas capas burguesas, primero en la agricultura de la región oriental del país, y más tarde de la mediana minería privada que poco tiempo después se convertiría como hasta hoy en el único sector minero de efectivo crecimiento, en la producción de antimonio, y wolfrang, principalmente. Y, desde luego, en el proceso de usar las rentas estatales para la corrupción de dirigentes sindicales y políticos que se fueron convirtiendo en parte de la nueva burguesía boliviana.

na, y para la iniciación del pago a los ex "barones" del estaño, los Patiño, Aramayo y Hochschild, por las empresas mineras expropiadas por los trabajadores.

Todo ello se expresó necesariamente también en el curso de la política internacional de los primeros gobiernos del MNR (Paz Estensoro y Siles Suazo), al plegarse primero a la represión imperialista contra el proceso reformista del gobierno de Arbenz en Guatemala y la sangrienta invasión de Castillo Armas en 1954, y más tarde a la expulsión de Cuba del seno de la OEA en Costa Rica, en 1961.

El proceso revolucionario terminaba, pues, encuadrado y contenido en los marcos de una política burguesa proimperialista, que al mismo tiempo que restauraba el Estado burgués represivo y dependiente y usaba los excedentes de la producción de obreros y campesinos para ampliar la clase burguesa y la explotación de los trabajadores, bloqueaba inevitablemente las posibilidades de desarrollo económico del país, inclusive en un sentido puramente capitalista, y la capacidad de independencia nacional frente a la dominación imperialista. La "revolución democrático-nacional" se revelaba, así, sin apelación posible, como incapaz de desarrollarse en la dirección efectivamente democrática y nacionalista, si no se transformaba en revolución socialista, como democracia directa de los trabajadores y como destrucción de la explotación capitalista, base de la dominación imperialista.

Entre fines de 1952 y 1964, en los dos períodos iniciales del gobierno del MNR todo ese proceso de contención y encuadramiento imperialista de la "revolución nacional" había quedado cumplido, y en particular la restauración del nuevo Estado burgués y de sus fuerzas armadas, éstas por supuesto bajo la dirección del Pentágono y de sus agentes y créditos militares.

No en vano, sin embargo, las masas bolivianas habían sido las protagonistas reales de las etapas realmente revolucionarias del proceso. La descapitalización de las minas, la corrupción burocrática, la transferencia de la renta minera a la nueva burguesía agraria y a los ex-dueños de las minas y de las tierras y a las fuerzas armadas, implicaban inevitablemente la creciente disminución del nivel material de vida de los trabajadores, por la inflación y la escasez de las subsistencias, así como la gradual expropiación y distorsión de las conquistas democráticas de las masas, especialmente de la clase obrera.

Aunque sin dirección consistente y consecuente, la vanguardia de los obreros mineros y fabriles acaudilló a sus bases en una lucha de resistencia contra esa política de la nueva burguesía en el poder. Aunque el gobierno podía contar con el campesinado, rota la alianza obrero-campesina, y sus grupos armados para aislar y reprimir a los obreros y al semiproletariado urbano, conforme fue reorganizándose el ejército profesional la represión fue cada vez más realizada por éste, produciéndose numerosas masacres y crímenes políticos contra la oposición.

Ese enfrentamiento entre el proletariado y el semiproletariado urbano y minero y la represión gubernamental del MNR, no podía dejar indemnes las bases políticas de ese partido entre las masas, ni dejar de repercutir en el seno de su propia dirección. A eso se añadían las disputas por rivalidades personales en las cuotas de usufructo del botín y del poder.

Bajo la presión de las masas, los sectores del MNR más ligados a ellas por su previo origen político y por su lugar en el aparato sindical y político comenzaron a diferenciarse como una tendencia al interior del partido, con una orientación izquierdizante y definiéndose como el ala izquierda del MNR. Lechin y la mayoría de los ex-trotskistas encabezaban ese sector. Y de otro lado, los sectores más francamente proimperialistas y reaccionarios, emergieron también como otra tendencia, acaudillados principalmente por Walter Guevara Arze.

La fracción dirigida por Paz Estensoro y Siles Suazo, quedaba como el centro de ese espectro de descomposición política y orgánica del MNR. Las luchas internas se fueron enconando con las pugnas por el turno en la candidatura oficial a la Presidencia de la República, y el antes compacto y poderoso MNR se dividió finalmente en tres agrupaciones independientes: el MNR de Paz y Siles; el MNR Auténtico, de Walter Guevara; y el Partido de la Izquierda Revolucionaria Nacionalista, con Lechin a la cabeza y Erwin Moller y Lidia Gueiler (ambos ex-trotskistas) con él, que se constituyó después del golpe de Barrientos.

Los desacuerdos electorales y políticos de 1964, dentro del MNR y la renovada lucha de las masas por sus reivindicaciones económicas y políticas, abrieron el campo para un nuevo golpe militar, esta vez del nuevo ejército, encabezado por el General Barrientos, que provenía de las filas del propio partido, con la total protección del imperialismo norteamericano.

Las conquistas democráticas de las masas, en el terreno sindical y político, que venían siendo castradas por los gobiernos de Paz Estensoro y Siles Suazo bajo el aumento de la represión, fueron definitivamente eliminadas bajo la dictadura militar de Barrientos, apoyado en la nueva burguesía local y por una buena parte del campesinado, a través del "Pacto Militar-Campesino" que la dictadura organizó con los corruptos caciques locales engendrados por los gobiernos anteriores del MNR.

La represión de la dictadura de Barrientos sobre el proletariado minero sólo puede calificarse de bestial. Fue una serie feroz de masacres de mineros en Mayo y Setiembre de 1965, y después la más inhumana de la historia boliviana, la espantosa carnicería de la infanta "Noche de San Juan", en 1967, cuando las tropas invadieron las poblaciones mineras asesinando a cientos de pobladores de todas las edades y sexos mientras festejaban la tradicional fiesta de San Juan, además del asesinato de César Lora, el más importante dirigente minero de ese momento, y miembro del POR. Era la obra del ejército reconstruido por el MNR, encabezado por uno de sus hijos.

La derrota del proletariado revolucionario en favor de la pequeña burguesía democrática en el proceso boliviano, es decir, de la revolución socialista en favor de la "revolución nacional", no solamente significó la contención gradual y la distorsión y encallamiento del proceso mismo, sino también su desemboque final en el túnel sangriento del genocidio del proletariado bajo una dictadura militar, como en todos los demás casos de América Latina, después de Bolivia.

DE LA DERROTA DE LAS GUERRILLAS DEL CHE A LA ASAMBLEA POPULAR

En medio de ese nuevo calvario de los trabajadores bolivianos, una luz se encendió súbitamente en el corazón de los revolucionarios latinoamericanos cuando se supo que el Che Guevara dirigía un destacamento guerrillero en las selvas bolivianas. Pero esa luz se extinguió como surgió, súbitamente, para quedar en el recuerdo del panteón heroico de la larga lucha revolucionaria de nuestros pueblos.

Sobre ese momento de heroísmo, dichas ya por muchos las cosas fundamentales, no es la ocasión de detenernos. Solamente es necesario reiterar que el resplandor del sacrificio de tan ilustre héroe revolucionario no apareció, como es claro ahora para todos, ni en el tiempo ni en el escenario adecuados para iluminarlos plenamente.

Sin embargo, contribuyó a precipitar la crisis política del régimen barrientista, galvanizando y radicalizando a nuevas capas de la juventud de las capas medias y fortaleciendo la combatividad de los trabajadores, y de otro lado ensanchando las brechas políticas dentro de las fuerzas armadas del país. Pues fue como culminación de la secuela política iniciada con asesinato del Che, en 1967, que se produjo el posterior asesinato del propio Barrientos y la ascensión del General Ovando al gobierno, en setiembre de 1969, tras el corto interinato de Siles Salinas.

El nuevo régimen militar, enfrentado a la resistencia cada vez más amplia de los trabajadores y de las capas medias jóvenes contra la dictadura barrientista y en un contexto político internacional que contenía el ascenso de las masas en Chile, Argentina, Uruguay y el reformismo corporativista del régimen velasquista en el Perú, se vio forzado a iniciar una política de apertura democrática para amortiguar los conflictos.

Se restablecieron las libertades sindicales, permitiendo a los trabajadores reorganizarse rápidamente, y se inició una tímida política de nacionalizaciones parciales propugnadas por ministros de esa orientación, y el debate sobre los problemas del desarrollo nacional. La nacionalización de la GULF OIL, bajo el Ministerio de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue indudablemente la medida más importante en ese campo.

El restablecimiento de la vida sindical y política del país, fue usado rápidamente a fondo por los trabajadores de todos los sectores, incluyendo ahora a los nuevos contingentes del proletariado y semiproletariado agrario de la región oriental de Santa Cruz, organizados en la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO). Inmediatamente se organizó el Congreso de la Federación Minera, el corazón y el cerebro del proletariado boliviano, en marzo de 1970, aprobando el nuevo programa político de los trabajadores, contenido en las Tesis de Siglo XX presentadas por Filemón Escobar, representante de la base de Siglo XX y militante del POR. Ese documento, aprobado por unanimidad por delegados procedentes de todas las bases mineras y miembros de todas las organizaciones políticas con presencia en esas bases, incluido el MNR, sostenía en su parte central que la experiencia de la "revolución nacional" no estaba solamente agotada sino llevaba a la profundización de la dependencia y del subdesarrollo y así a una mayor explotación y represión de las masas, y que en consecuencia en la nueva etapa de la lucha, la orientación del movimiento obrero y de todos los trabajadores no podía ser sino la revolución socialista.

Ese programa, con modificaciones secundarias, fue sucesivamente aprobado por los congresos de los fabriles, de los ferroviarios, de la prensa, etc., y finalmente en el congreso nacional de la COB.

Después de la larga y frustrante experiencia de la "revolución nacional" y las sangrientas represiones del MNR y de la dictadura barrientista, el proletariado boliviano emergía de nuevo, munido de una excepcional, lúcida y coherente conciencia revolucionaria, y se enderezaba otra vez a la búsqueda de la revolución socialista. Las organizaciones sindicales de los obreros, en particular de los mineros, volvían a mostrar que su carácter no se agota en la representación gremial, en el caso boliviano y a lo largo de toda su historia, sino que se erigen en representaciones de clase y tienden a desarrollarse como órganos de dirección y de poder político directo. Y aún, se reiteraba una tradición jamás desmantada en la historia del proletariado boliviano según la cual la lealtad primordial y básica de los obreros no se dirige a sus organizaciones partidarias, sino a sus organizaciones sindicales, permitiendo explicarse el hecho, en apariencia insólito, de que militantes de muy diversas tendencias ideológicas pudieran producir el unánime consenso en torno de un programa revolucionario en el seno de una unión sindical, mientras en el seno de sus organizaciones par-

tidarias podían diversificarse en sus respectivas tendencias. Eso explica también el hecho paradójico de que un partido político pequeño y sin cesar castigado con el asesinato de sus mejores cuadros obreros, como el POR, de reducida militancia y de precaria organización a pesar de sus defecciones previas en momentos cruciales de las etapas anteriores, pudiera aparecer como el portavoz de la actitud y de la conciencia política principal de las bases mineras.

El 10 de Mayo de ese año, desfilaron los trabajadores por las calles de La Paz. Estaban todos. Desde las representaciones obreras fabriles y mineras, del campesinado que gradualmente volvía a la lucha junto a los obreros; de los artesanos, de los comerciantes pequeños de los mercados y del semiproletariado. Salían de todos los rincones pobres de la ciudad. De las casas obreras prendidas de los barrancos de barro y desde los tugurios que rodean a los mercados populares, desde las huerbas. Con su traje de domingo, los varones; con sus hijos a cuestas las mujeres. Con su decisión de combatir, expuesta en sus caras y en sus carteles, por la revolución socialista y por el poder directo de los explotados. Sobrevivientes de incontables masacres y vencedores de muchas frustraciones, volvían al camino terrible de la lucha revolucionaria más profunda e intensa del continente.

Ese nuevo despliegue político de las masas y la clara decisión del proletariado, no podía ser tolerado por la miserablemente débil burguesía boliviana ni por sus fuerzas armadas. Particularmente porque el gobierno de Obando, a pesar de su apertura democrática y de sus tímidas medidas nacionalistas, no lograba de modo alguno ganar legitimidad y apoyo popular. Por el contrario, los conflictos políticos y sociales se agudizaban.

En junio de ese año, un grupo de jóvenes universitarios se aventura en un nuevo intento guerrillero, totalmente aislado y desprovisto, de todo apoyo popular organizado, y es liquidado en Teoponte. El impacto de esos hechos repercute en la población, produciendo manifestaciones populares demandando la entrega de los cuerpos de los guerrilleros. El gobierno contesta expulsando a los sacerdotes del movimiento llamado del "Tercer Mundo", en setiembre.

En octubre, los obreros y campesinos organizados en la UCAPO en la región de Santa Cruz, invaden y ocupan un ingenio importante. Mientras tanto los obreros fabriles y mineros, presionan por mejoras salariales inmediatas, para recuperarse del largo congelamiento de sus salarios desde Barrientos, y por la reposición de sus despedidos. En ese mismo mes de Octubre, un intento golpista del General Miranda, militar ultraderechista, es contenido por una movilización popular, encabezada por los obreros de La Paz, de la cual resulta la formación de un Comando Político de la Clase Obrera y del Pueblo, formado por sindicatos y partidos de izquierda.

En Enero de 1971 un nuevo intento de golpe decide a Obando a abandonar el gobierno, pero una insurrección popular dirigida por el Comando Político de los trabajadores enfrenta a los golpistas y con su apoyo el General Juan José Torres asume el gobierno.

Los trabajadores movilizados reclaman avanzar en la revolución socialista en imponentes manifestaciones, y en esas condiciones y a propuesta del POR dirigido por Lora el Comando Político se transforma en la Asamblea Popular de Bolivia, que inicia sus funciones en Febrero de 1971.

LA EXPERIENCIA Y DERROTA DE LA ASAMBLEA POPULAR.

La instalación de la Asamblea Popular, abre una nueva etapa revolucionaria cuya significación para las luchas de clases de Bolivia y de América Latina consiste, como la de 1952, en reponer en el primer plano de la práctica y del debate político de los trabajadores revolucionarios, las cuestiones del poder directo de los explotados como forma de la democracia directa de las masas, y de la relación entre "revolución democrático-nacionalista" y revolución socialista.

El movimiento de las masas trabajadores de Bolivia, durante esa coyuntura entre Enero y Agosto de 1971, se caracterizaba por ciertos rasgos muy marcados y en general reconocidos por los dirigentes sociales y políticos.

En primer término, por una mayor diversificación social de la masa trabajadora, producida por la presencia de sectores de proletariado y semiproletariado agrario en la región oriental de Santa Cruz, que aunque todavía reducidos estaban en activo proceso de movilización y organización contra los hacendados capitalistas de la zona, y centralizados en la Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), bajo la dirección principal de fracciones pro-chinas agrupadas en el Partido Comunista de Bolivia (marxista-leninista); de otro lado, por una mayor presencia del semiproletariado urbano, especialmente en La Paz, debido a la expansión de actividades de comercio y servicios, lo que implicaba también una extensión de las capas de pequeña burguesía urbana, así como las actividades estatales y profesionales habían ampliado las capas medias profesionales y burocráticas, en gran parte provenientes de los rangos de la extinguida clase terrateniente señorial destruida con la reforma agraria de 1952 en adelante. Esos nuevos sectores sociales, concurrían al movimiento de masas, a través del movimiento estudiantil universitario, extremadamente radicalizado después del asesinato del Che y de la desastrosa aventura guerrillera de Teoponte; de agrupaciones salidas de las filas del MNR y que radicalizaban su postura y su lenguaje iniciándose en el marxismo; de núcleos de burocracia nacionalista-reformista, radicalizados en las circunstancias, desde el gobierno de Obando.

En segundo término, por una importante aunque minoritaria e incipiente diferenciación política en el campesinado, una parte del cual comenzaba a agitarse y a movilizarse independientemente del Pacto Militar-Campesino contrarrevolucionario, impuesto por Barrientos, y mantenido por Obando. Especialmente en el Altiplano, tales sectores se movilizaban y finalmente se organizaron en un congreso en Potosí, como Confederación Campesina Independiente, prestando su apoyo a la lucha de los demás trabajadores del país. La alianza obrero-campesina, rota bajo los gobiernos del MNR, comenzaba a caminar de nuevo aunque sobre bases aún precarias.

Tercero, por la recuperación definida de una conciencia revolucionaria clara en el proletariado, y en particular en los mineros, que les permitía dotarse de nuevo de un programa y de una perspectiva estratégica en las nuevas condiciones, como se demostraba en la aprobación unánime de las Tesis del Siglo XX en el Congreso de la Federación Minera y bajo su dirección en el posterior Congreso de la COB en 1970. A pesar de ello, claramente también, esa conciencia y la práctica política del proletariado no estaban respaldadas por una organización política de vigor equivalente, ni había sido capaz de superar, como se veía en la Asamblea Popular, una propensión obrerista en las direcciones más avanzadas que llevaba a su aislamiento respecto de la inmensa masa mayoritaria del cam-

pesinado, expectante desde fuera y todavía inmerso en las nieblas del barrientismo.

Cuarto, el conjunto del movimiento de masas tenía una relación ambigua con los partidos políticos que se reclamaban de la representación de los intereses de los trabajadores. El movimiento de masas era fuerte y en gran medida independiente de los partidos políticos y al mismo tiempo influido por éstos, puesto que los dirigentes principales de cada uno de los sectores de trabajadores eran miembros de esos partidos y a la par se esforzaban por mantenerse ante todo leales a sus bases y eran sujetos de las presiones de ellas. En los debates de la Asamblea Popular no era en modo alguno infrecuente el enfrentamiento entre dirigentes de masas y dirigentes de sus propios partidos políticos, como era el caso por ejemplo de Simón Reyes, miembro del PCB (Pro-Moscú), y su principal dirigente minero, quien sostenía el carácter socialista de la revolución en curso frente a su partido que aún defendía (después de 1952!) la "revolución antifeudal, antioligárquica y antimperialista". O de Filemón Escobar, el principal dirigente minero del POR (Lora) y que pugnaba por una política más profunda y más vasta de alianzas frente al obrerismo de la dirección de su partido en ese momento.

El correlato de esa relación entre partidos y movimiento de masas, era, desde luego, la debilidad relativa de aquellos y su incapacidad para alcanzar la hegemonía de la dirección del movimiento y de la Asamblea Popular, ni siquiera formando bloques entre ellos, dada la heterogeneidad política de tales y la independencia de las bases de los trabajadores que solamente acataban las decisiones de sus organismos sindicales y de la Asamblea Popular como tal.

Políticamente era reconocida expresamente por todas las tendencias políticas e ideológicas, así como por todos los sectores sociales de trabajadores, la total primacía de la dirección del movimiento obrero organizado. Sin embargo, el aislamiento del grueso del campesinado, la vocación guerrillera de grupos de capas medias, que se mantuvieron fuera de la Asamblea Popular, la extensa presencia de representantes de las capas estudiantiles y profesionales radicalizadas, junto con la actitud indecisa de algunas corrientes políticas como la dirección del POR (Lora), llevaban a que en la práctica tal reconocimiento de la dirección proletaria se tradujera en una fluctuación entre una inclinación obrerista y una postura conciliadora con el nacionalismo pequeño burgués, que incluía al gobierno de Torres.

Con la instalación del gobierno de Torres en Enero y de la Asamblea Popular en el mes siguiente, se crea un marco político que sin duda permitía la actuación y posibilitaba el desarrollo de la Asamblea en una dirección revolucionaria más profunda.

La derrota del golpe derechista en Enero, por la insurrección popular divide a la fuerza armada boliviana. Y eso permite a una fracción de ella, encabezada por Torres, asumir el gobierno. Esa división se profundizó en los meses siguientes hasta poco antes del golpe de Banzer en Agosto de 1971. De una parte, están en escena minoritarios sectores nacionalista-reformistas radicalizados, concentrados en el famoso Batallón de los Colorados, bajo la jefatura del Mayor Rubén Sánchez, respaldados por corrientes centristas más o menos democráticas pero no organizadas ni claramente definidas. De la otra, los sectores burgueses proimperialistas, decididos a cortar el proceso revolucionario iniciado con un nuevo golpe, pero entre los cuales no había acuerdo durante los primeros meses de ese año, ni sobre la jefatura ni sobre la oportunidad precisa de la contrarrevolución. En esos meses se especulaba en Bolivia sobre la existencia de por lo menos cinco fracciones golpistas en el seno del ejército, que competían por ganar la adhesión del conjunto del ejército. Fue, sin duda, esa división

y mientras durara, lo que permitió la existencia de la Asamblea Popular.

Por su lado, la burguesía misma continuaba siendo en Bolivia, no obstante su relativa diversificación desde 1952, social y políticamente demasiado débil como para generar una amplia resistencia en la estructura social misma, distinta de la estructura militar y capaz de operar como dirección o como centro de poder político. Por ello, el despliegue del movimiento de masas y de la Asamblea Popular implicó el ostensible repliegue político de la aterrada y miserable burguesía local. Solamente la acción imperialista directa y las fuerzas armadas reaccionarias, por eso mismo, y como siempre en ese país, podían contrarrestar el movimiento revolucionario de los trabajadores.

El propio gobierno del General Torres, en esas condiciones, no podía tener fuerza propia real ni orientación política definida. Incorporando a su gobierno a numerosos representantes de las capas medias nacionalistas y reformistas, algunos de ellos muy radicalizados, estaba incapacitado de reorganizar o de ampliar sus bases dentro de las fuerzas armadas y solamente la división entre los golpistas permitía una sombra de autoridad del gobierno sobre el ejército. Por otro lado, en cambio podría haber buscado el apoyo y la legitimidad entre las masas. Pero ellas se habían organizado ya en la Asamblea Popular, y proclamaban la perspectiva socialista de la revolución, mientras el General Torres proclamaba la idea de una "revolución nacional" y condenaba el "extremismo" de los trabajadores, explícitamente. Con las masas y en particular con la Asamblea Popular, pues, las relaciones del gobierno de Torres eran, necesariamente ambiguas y contradictorias, fluctuando entre la apertura y el autoritarismo que no podía ejercer realmente, entre el nacionalismo de izquierda y la impotencia para hacerlo real ya que eso implicaba en los hechos ceder a las presiones revolucionarias de las masas.

Por fuera de esas bases sociales, no existía en Bolivia ninguna fracción burguesa apta para conciliar y transar con un régimen de ese tipo, por su extrema debilidad social y económica. Y las capas medias, bien que parcialmente ganadas al reformismo-nacionalista en un momento de gran presión social y política de las masas trabajadoras, no tenían ni amplitud ni densidad alguna como para servir de colchón de apoyo social y político de semejante régimen, como un terreno intermedio de maniobra que permitiera adueñarse, así solo fuera por un corto momento, del apoyo efectivo de algún amplio y fuerte sector de trabajadores. Tales grupos medios eran en la práctica, aunque forcejeando por la conciliación y no sin éxito a veces, prisioneros de la presión de las masas y de sus propias propensiones de pequeña burguesía reformista e inconsecuente. Esto es, enredados y políticamente impotentes.

Y, finalmente, el propio General Torres reveló que fuera de su confusa ideología nacionalista y reformista, carecía de cualquier proyecto político efectivo o de las condiciones de un caudillo capaz de decisiones rápidas y fuertes, atrapado entre su lealtad a la fuerza armada cuya oficialidad conspiraba abiertamente en su contra y contra la cual se negó en definitiva a actuar, y las presiones a que lo sometía el movimiento popular.

La Asamblea Popular, en ese contexto político-social, tenía en principio la posibilidad de desarrollarse como un efectivo órgano de poder directo de las masas, tal como era su propia pretensión ideológica oficial, impuesta por las más radicales de las corrientes en su seno contra las que propugnaban para ella solamente la calidad de parlamento popular fiscalizador y colaborador del gobierno militar de Torres. Esa imagen propia de órgano de poder de las masas y en consecuencia centro de uno de los focos de una dualidad de poderes frente al del gobierno, fue formalizada en los documentos centrales emanados de la Asamblea.

“

Y esa orientación a la par antiburguesa y antiburocrática del movimiento revolucionario del proletariado boliviano, no es y no ha sido simple o solamente un postulado ideológico de algunas minoritarias corrientes, sino por el contrario la tendencia práctica y actuante de las masas en todos los momentos más altos del desarrollo de sus movimientos revolucionarios.

”

Por su composición social, esa Asamblea era dominada por la presencia de la representación obrera, con delegados emanados de las bases sindicales en elecciones directas, en relación a las delegaciones de campesinos y de las capas medias igualmente originados en los organismos de base de tales sectores. Sobre un total de 218 delegados, 132 eran obreros, 23 campesinos y 52 de empleados, maestros, estudiantes y artesanos.

Por su composición política, formalmente participaban los partidos reconocidos en la Asamblea como revolucionarios, a razón de dos delegados por cada uno de ellos: PRIN, PCB, PCM-L POR (fracción Lora), PDCR Y MR Espartaco (posteriormente fusionado con el anterior y convertido en MIR). Quedaban fuera, el POR liderado por González Moscoso, el Partido Socialista liderado por Marcelo Quiroga que aún no había logrado legitimidad entre las organizaciones de la izquierda boliviana por el pasado político de Quiroga. Sin embargo, en la práctica, a través de las delegaciones sindicales de base, el MNR había logrado una importante presencia, estimada en 53 delegaciones, el PS con 13 y hasta la Falange Socialista Boliviana, organización fascista, contaba 8 delegados. Así la composición política real era la siguiente: MNR con 53 delegados; PRIN con 28 delegados; PCB con 26; PCM-L con 17; PS con 13; MIR con 13; POR con 8; FSB con 8 y además los delegados independientes sumados 52 en total.

Dada esa composición partidaria real, el peso mayoritario de la Asamblea estaba del lado de las tendencias nacionalista-reformistas (MNR, PRIN y PS), seguidas de las tendencias obreras burocráticas como el PCB. El POR (Lora) y las agrupaciones restantes eran claramente minoritarias. Sin embargo, en los debates y en las resoluciones, esa composición partidaria no podía reflejarse sistemáticamente por el hecho de que las delegaciones sindicales de bases respondían más a las presiones de éstas, con frecuencia en contra de sus direcciones partidarias formales, como en los casos de los delegados del MNR, PRIN y PCB. Pero, inevitablemente, el peso de las adhesiones partidarias formales no podía permitir tampoco definiciones políticas más nítidas y coherentes en las decisiones y en la conducta práctica de la Asamblea como tal.

De ese modo se dibujaron en el seno de la Asamblea tres corrientes básicas. Una de propensión oficialista, que a pesar de la declaración formal de independencia de la Asamblea y de su imagen propia de poder independiente de las masas, empujaba en la dirección de una conducta parlamentarista, de apoyo y de fiscalización de la acción del gobierno de Torres. En ese bloque participan el PRIN, el MNR y el PCB. Una corriente declarativamente radical y no oficialista, que presionaba por una total independencia de la Asamblea frente al gobierno y por la organización de las bases militares del poder popular, aunque en la práctica enfatizaban mucho más la presión por medidas nacionalistas radicales del gobierno, más que por acciones destinadas a dotar de instrumentos de poder real a la Asamblea, que permitieran imponer esas medidas. En ese grupo formaban el MIR (fusión de Espartaco, una escisión del MNR, y la juventud democrática sobreviviente de la aventura de Teoponté), el PCM-L (Prochino) y parte de los delegados independientes. Entre ambas corrientes, el POR (Lora) diferenciado en corrientes que respondían cada una a esas tendencias contrapuestas, nadaba en una conducta contradictoria que por momentos lo hacía parte del bloque conciliador con el régimen, y por otros parte de las corrientes más radicales. Esa ambigüedad se manifestaba sobre todo en las declaraciones formales del POR, que apuntaban normalmente a la profundización del proceso y que en la práctica eran la base de la teoría implícita en las declaraciones y resoluciones formales de la Asamblea, y las conductas prácticas derivadas del juego de maniobras políticas.

Debido a esos factores, la Asamblea se fue desarrollando en toda la etapa como un fenómeno político muy contradictorio. De una parte era universalmente reconocida por to-

dos los trabajadores bolivianos como su órgano de expresión política, independiente del gobierno y opuesto a él, destinado a concentrar el poder global en sus manos. Y el debate entre las masas partiendo de ese supuesto, permitía claramente el desarrollo de la conciencia política del conjunto. Ideológicamente, pues, para la conciencia de las masas volvía a ponerse, en el primer plano la lucha por su poder directo, por la democracia directa de los trabajadores, como expresión del avance de la revolución socialista, en una lucha por igual antiburguesa y antiburocrática. Sin embargo, por su composición política, la Asamblea no estaba en condiciones de llevar a la práctica ese reclamo de las masas y la concreción real de su autoimagen como órgano de poder del frente de las clases explotadas y medias, bajo la conducción del proletariado revolucionario, frente al vacilante poder del gobierno y frente a la conspiración contrarrevolucionaria del imperialismo y de las fuerzas armadas reaccionarias.

Esa imagen de dualidad de poderes levantada por las declaraciones de la Asamblea no tenía asidero real, porque para ello habría sido necesario no solamente el reconocimiento de las masas y su acatamiento universal, sino también y no menos fundamentalmente, la capacidad de imponer sus decisiones sobre las otras clases por lo menos parcialmente, a través de organismos militares constituidos por las milicias obrero-campesinas. Y aunque muchos sectores de la Asamblea reclamaron eso persistentemente, y todos los sectores verbalmente lo admitían y lo apoyaban, en la práctica no se dio ningún paso concreto para poner en marcha la organización de esas milicias.

A diferencia de 1952, cuando una situación real de dualidad de poderes con ventaja de los trabajadores, ya que el único poder armado era el de ellos frente a los poderes administrativos del gobierno del MNR, no fue reconocida por ningún partido; ahora, en las peculiares condiciones de 1971, toda la izquierda y en particular el POR y los grupos más radicales levantaban esta imagen de dualidad de poderes, cuando el único poder armado real estaba en el ejército reaccionario y paralelamente en el gobierno reformista.

En los meses de Mayo y Junio de 1971, la victoria política de las masas parecía desarrollarse sin tropiezos, con los burgueses replegándose aterrados y el ejército dividido en fracciones competitivas. Pero mientras se desenvolvían las maniobras conspirativas en el ejército, la Asamblea Popular se mostraba impotente de organizar su propia base de poder armado para enfrentar esa pública amenaza. En Julio era obvio para muchos que la fase política del proceso estaba agotada y en adelante el enfrentamiento sólo podría ser armado. El gobierno de Torres, sabedor de las conspiraciones era incapaz de reprimirlas por temor de destruir a las fuerza armada, es decir, por temor a las masas revolucionarias dueñas del campo, y los trabajadores no habían podido levantar una organización capaz de llevar adelante las tareas pertinentes. Grupos pequeños como el ELN y el POR liderado por González Moscoso, la agrupación Siglo XX y otros menores, trataban en vano de cubrir ese déficit crucial. A fines de Junio, las facciones militares conspiradoras se habían ya coordinado bajo la dirección imperialista y brasileña y en Agosto Banzer podía derrotar la heroica resistencia popular y asumir el gobierno total del país.

Terminaba así, con una derrota y con la represión seciente contra ellas, una etapa más del esfuerzo de las masas explotadas bolivianas para conquistar su poder directo, porque lo mismo que en 1952 no había podido contar con ninguna dirección política apta para canalizar ese esfuerzo y conducirlo a esa conquista, no obstante condiciones objetivas adecuadas para ello.

Puede decirse en descargo de las masas bolivianas, que no solamente fallaron sus direcciones políticas, sino que el apoyo internacional del movimiento revolucionario y de los centros

de poder que podrían proporcionarlo fue casi nulo. La Unidad Popular en el gobierno de Chile, por su chauvinismo y su confusión interna, no pudo entender que el proceso boliviano era capital para su propio desarrollo y no se ocupó mayormente de él. Cuba en la misma etapa y sobre todo en los momentos cruciales de mayo-junio, cantaba las glorias de la "revolución peruana" de Velasco mientras simplemente atacaba a los militares bolivianos causantes de la muerte del Che, y cuando en Julio empezó a comprender que allí había un proceso vital para la revolución latinoamericana e invitó a una delegación de los sindicatos bolivianos a las celebraciones del 26 de Julio, era casi en la víspera del golpe de Bánzer.

Si semejante proceso hubiera estado en marcha en Argentina o Chile, por ejemplo, todos los analistas y turistas revolucionarios de Europa y de Estados Unidos habrían estado atentos a él, debatiéndolo y visitándolo, como ocurría en Chile en ese mismo momento. Pero ocurría en Bolivia, un pobre y oscuro país de obreros y campesinos de origen indio. ¿Era eso lo que impedía ver que allí se desarrollaba lo que era potencialmente el más profundo movimiento de las masas, desde sus bases mismas, por conquistar el poder directo de los explotados? El eurocentrismo es una carga que no solamente cargamos los latinoamericanos, sino una traba infeliz para el propio movimiento revolucionario europeo y norteamericano. Y junto a eso, obviamente estaba presente en ese "descuido" de los analistas políticos de la izquierda internacional, el lastre burocrático contra un movimiento de masas que por tantos años se levanta no solamente contra el capital, la burguesía y sus Estados, sino también contra los engendros burocráticos que nacen desde el seno mismo de las revoluciones contra aquellos. Mientras que han corrido ríos de tinta publicando estudios sobre Chile, lo que es indispensable, apenas unos pocos y rápidos estudios se conocen sobre el proceso boliviano de esa misma etapa, lo que es aún más indispensable por el carácter socialista revolucionario y antiburocrático que tiene siempre a asumir la lucha de los trabajadores de ese país.

LOS EFECTOS DE LA DICTADURA DE BANZER

El golpe militar de Bánzer fue dirigido por el imperialismo norteamericano, con la participación de agentes de la dictadura militar brasileña y por supuesto de la burguesía local, muy especialmente de los grupos de origen alemán, como lo reconocieron públicamente poco después, y el apoyo del MNR de Víctor Paz Estensoro.

El régimen de Bánzer no pudo destruir a fondo el movimiento y las organizaciones sindicales y políticas de las masas bolivianas, como pudo hacerlo dos años después el golpe de Pinochet en Chile. Eso se debió, ante todo, a la resistencia armada de las masas durante los dos primeros días del golpe, con la participación importante del regimiento de Los Colorados, capitaneado por el Mayor Rubén Sánchez. Pero, también, porque el grado de participación de las masas bolivianas en sus organizaciones de masas no puede ser destruido sin una operación genocida muy extensa entre los trabajadores, lo que dada la extrema debilidad de la burguesía y de las capas medias bolivianas es una empresa que no podrían llevar a cabo sin poner en riesgo su propia base de explotación.

Eso permitió que, no obstante la represión y las torturas y encarcelamientos, la mayor parte de las direcciones sindicales y políticas pudieran mantenerse prácticamente intactas, sea en el exilio o en la clandestinidad, constituyendo de ese modo una base de resistencia permanente contra la dictadura banzerista. Y en efecto, sucesivas huelgas de obreros mineros y fabriles durante sus siete años de gobierno, demostraron a la dictadura que no podía dominar a las masas.



Paralelamente, un nuevo factor político-social fue emergiendo como parte de esa resistencia. El campesinado, cuya gran mayoría había quedado desde los primeros gobiernos del MNR sujeto a las manipulaciones burocráticas de los caciques rurales corrompidos por esos gobiernos, y más tarde del Pacto-Militar impuesto por Barrientos por esos mismos medios, había ido entrando en un proceso de descomposición y diferenciación social local y de migraciones masivas hacia las ciudades principales y hacia las zonas agrarias capitalistas del Oriente. Esos fenómenos eran la indicación de que el minifundio establecido como dominante en la tenencia de la tierra desde la reforma agraria del 52, era corroído rápidamente por la diversificación lenta e irregular del capital en el país, la monetización creciente de las relaciones de mercado rural, haciendo que esa estructura económica campesina fuera cada vez menos capaz de contener la creciente población dentro de las relaciones previas y el proceso de liberación de mano de obra rural alimentaba las migraciones y la semiproletarización local y proletarización campesina en las regiones agrarias capitalistas. Esos factores explican por qué aunque el Pacto Militar-Campesino fue restaurado formalmente por Bánzer como instrumento contra el movimiento obrero, sectores amplios del campesinado comenzaron a actuar independientemente y finalmente en contra del gobierno de Bánzer, como quedó pronto de manifiesto con las conocidas acciones de bloqueo de caminos del área de Cochabamba, centro mismo del Pacto, y contra las cuales Bánzer contestó masacrando a los campesinos y enagenándose en adelante su apoyo. Las bases materiales y subjetivas de la recuperación de la alianza entre los trabajadores mineros, fabriles, proletariado y semiproletariado agrario de Santa Cruz y el campesinado de los valles y del Altiplano, estaban siendo rápidamente restablecidas, bajo nuevas condiciones.

El apoyo financiero imperialista y la autosuficiencia energética del país, permitieron con todo que en el período banzerista la economía capitalista boliviana, tan extremadamente atrasada dentro del orden imperialista, se produjera una relativamente importante extensión y diversificación del capital, aunque ciertamente más en las minas de propiedad privada, en la agricultura y el comercio, y en la construcción urbana y el transporte, sobre cuyas actividades además se afirmó una fuerte especulación financiera. En cambio, en la industria fa-

bril prácticamente no se produjo ninguna ampliación ni tecnificación apreciable. Y aún hoy, las cifras sobre la industria fabril muestran que no han habido cambios significativos en los últimos 25 años.

Sobre estas bases se amplió algo la burguesía boliviana, sobre todo en sus grupos de especulación urbana y comercial, como se expresa en el boom de construcciones en La Paz y otras poblaciones cercanas. Pero sobre todo se ampliaron y se diversificaron las capas de mediana y pequeña burguesía urbana y rural, y las capas medias profesionales y burocráticas, a favor de la extensión de las actividades terciarias y del Estado.

Nada de eso, sin embargo, permitiría sostener que la burguesía boliviana como grupo social real, haya crecido fuertemente y se haya densificado su presencia social, cultural e ideológica entre las masas, pues sigue siendo extremadamente débil en esos términos. Y en el caso de las capas medias (pequeña burguesías y asalariadas), aunque su ampliación y su diversificación son considerablemente mayores que para la burguesía misma, y por ello son ahora un factor social e ideológico y político más significativo que antes, tampoco podría decirse que han llegado a constituir un terreno de maniobra política amplio y diferenciado, un colchón de apoyo decisivo para regímenes de corte democrático y reformista, como en otros países, el Perú por ejemplo.

Del lado de los trabajadores y en particular de la clase obrera, fue ocurriendo también una paralela ampliación y diversificación relativamente importante, por el engrosamiento de los sectores terciarios, del semiproletariado urbano y rural, quedando los fabriles estancados, mientras que en la minería ha venido reduciéndose numéricamente el proletariado en las minas estatizadas y creciendo más bien los grupos obreros de la minería privada, donde la organización sindical es casi nula y desde luego la educación política revolucionaria. El papel excepcionalmente destacado del proletariado minero, como la punta avanzada de la conciencia política de la clase, no ha desaparecido pero se ha reducido, y su rol de dirigente práctico del movimiento del conjunto de las masas sin duda ha declinado considerablemente, sin extinguirse.

Todos esos factores, han ayudado probablemente a que las reiteradas frustraciones del movimiento obrero y del resto de los trabajadores, con las previas direcciones política que marcaban la ruta teórica y estratégica del movimiento, a pesar de su pequeñez y endeblez orgánica, como el POR y en general las corrientes trotskistas, hayan ido alejando a los obreros de esas corrientes y ligándose más a las tendencias y organizaciones como el PCB (pro-Moscú) y a las que se asientan sobre todo en las capas medias intelectuales y profesionales radicalizadas, como el MIR y en menor medida en las nuevas organizaciones que emergían con líderes de fuerte personalidad como el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz. En efecto esas organizaciones han ido creciendo en influencia y arraigo en las masas, mientras los trotskistas se han dividido aún más y tienen un lugar sin comparación alguna con el que tuvieron en las previas etapas, lo mismo que el PC pro-chino, de destacada actuación durante la Asamblea Popular, que también ha declinado evidentemente.

En cambio, el campesinado fue emergiendo como una nueva fuerza política, a lo largo de un impresionante proceso de movilización y de organización, en el cual deben ser destacados dos rasgos. Uno, el crecimiento de tendencias y organizaciones orientadas por una suerte de nuevo indigenismo y que se reclaman de bases étnicas, como el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), que se reclama representante de los indios aymaras. Dos, la notable participación de las mujeres en la movilización y organización de los campesinos, principalmente en el Altiplano próximo a La Paz, y que se explicaría en razón del papel central de ellas en la actual economía rural, por la migración de los varones.

Al converger estos movimientos campesinos nuevos con la resistencia de obreros y capas medias radicalizadas, y bajo la presión "carterista" sobre los regímenes militares del Sur, Bánzer se vio obligado primero a tentar una apertura liberal delante de una imponente huelga de hambre masiva en todas las ciudades, secuencia a huelgas de mineros y fabriles, demandando el restablecimiento de la democracia, y poco después a llamar a elecciones generales, en 1978.

EL MOVIMIENTO DE MASAS ENTRE LA IMPOSIBLE DEMOCRACIA BURGUESA Y LA AUSENCIA DE UNA DIRECCION REVOLUCIONARIA.

Son conocidos los incidentes vinculados a las elecciones de 1978. Fraudulentamente cocinados sus resultados, frente al descontento popular el General Pereda dio un simulado golpe de Estado a Bánzer reclamando ser el vencedor de las elecciones, y fue a su vez desalojado del mismo modo por el General Padilla, jefe de las tendencias institucionalistas del ejército, quien llamó a nuevas elecciones, en 1979. Indecisos los resultados, porque ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría legal, el Parlamento elegido no logró ponerse de acuerdo en la designación de un Presidente de la República constitucional, y el presidente del propio Parlamento, Guevara Arze, fue designado Presidente Interino de la República con la misión de llamar a nuevas elecciones, ocupando su lugar en la presidencia del parlamento Lidia Gueiler, ex-trotskista, ex-lechinista y en ese momento adherida a la fracción Paz Estensoro del MNR.

Durante todo ese forcejeo, los trabajadores organizados volvieron a restablecer sus organizaciones de base y su central nacional la COB. Esta vez, sin embargo, tanto la FSTMB como la COB aparecían bajo la influencia mayoritaria de delegados pertenecientes al PCB (pro-Moscú), al MIR, al PS-L y al PRIN, prácticamente desalojados de escena el POR y el PCM-L (pro-chino), aliado ahora a Paz Estensoro. Y en consecuencia, con direcciones políticas cuyo único proyecto era la afirmación de un régimen democrático-burgués pleno.

A pesar de ello, las bases obreras no tardaron en presionar por sus reivindicaciones materiales y a poner de nuevo en primer plano sus inevitables impulsos a utilizar como instrumentos de poder político sus organismos sindicales centrales, rebasando las limitaciones gremiales que las nuevas direcciones trataban de imponer sin conseguirlo, como veremos luego, porque en las condiciones bolivianas concretas, tal como vienen determinadas por toda la historia desde 1952, las masas no pueden dejar de empujar a sus organizaciones en esa dirección cualquiera que sea la imagen que del proceso tengan las direcciones partidarias que asumen el control de esas organizaciones, ni esas direcciones pueden contenerse puramente en el marco gremial, dada la agudeza de las luchas políticas donde los actores son las masas más que los partidos, frente a las fuerzas armadas más que frente a los grupos empresariales o partidos de la burguesía.

Un precario régimen civil, encabezado por Guevara Arze en el primer momento, estaba atrapado entre las presiones reivindicativas de las masas y las de las fuerzas armadas, como no podría dejar de estarlo cualquier otro régimen democrático en ese país, por la casi total carencia de un colchón intermedio de apoyo y de maniobra entre ambos contendientes. Y, especialmente uno que como aquel era presidido por una ideología vagamente reformista y democrático burguesa, como es la de Guevara Arze.

A esa situación se añadió la denuncia, con pruebas en la mano, de la escandalosa corrupción del régimen saliente con los

fondos públicos, y que agitada por la vigorosa personalidad de Quiroga Santa Cruz en el Parlamento afectaba a una buena parte de los militares, amenazados de juicio público.

Esos hechos desataron la escalada reaccionaria del ejército, que se defendía de la ofensiva popular alegando —como en todos los demás países— que tales denuncias ofendían a las “instituciones tutelares de la patria” (Pobres patrias tuteladas por semejante cáfila!). Y en Noviembre de 1979, un golpe de Estado encabezado por el Coronel Natusch Busch desató, como en octubre y enero de 1970-71, la insurrección popular, concitando esta vez, también el rechazo abierto del Departamento de Estado norteamericano.

El golpe de Natusch se presentaba vistiendo, como se fue para las masas, un ropaje nacionalista y populista. Y eso, sin duda, fue lo que llevó al PCB a tomar frente a él una actitud conciliadora, denunciada luego por los demás integrantes de la UDP, sobre todo el MIR, así como el coqueteo inicial de Paz, que pronto retrocedió vista la actitud del Dpto. de Estado.

Durante las intensas jornadas de la primera semana de Noviembre de 1979, los partidos de izquierda como tales desaparecieron del escenario, como todos reconocen después, mientras las masas obreras y campesinas, ahora unidas, resistían con una huelga general y bloqueos de caminos en todo el país, e iniciando acciones de insurrección armada allí donde eso era posible, como en algunos de los pueblos mineros de Oruro. El régimen de Natusch fue obligado a negociar, y entregar el gobierno al Parlamento, otra vez, que eligió a Lidia Gueiler como Presidente Interino de la República en lugar de Guevara Arze.

Allí, en esas circunstancias, fue probablemente cuando se definió en una parte importante el destino del proceso boliviano de esta etapa, demostrando con claridad meridiana las grandes distancias entre las necesidades e impulsos de las bases de trabajadores y las direcciones partidarias de sus centrales. Las bases, sobre todo los mineros y fabriles continuaron la huelga en demanda de castigo de los militares golpistas y su expulsión de la fuerza armada, en un momento en que eso era realmente factible, por la presencia de un sector institucionalista que pugnaba por imponerse en el comando contra los sectores ultraderechistas que encabezaba, precisamente, el General García Meza. Bajo la presencia movilizadora de las masas, ese sector institucionalista podía llegar a imponerse. Sin embargo, los dirigentes de la COB (moscovitas, miristas y lechinistas) con Lechin a la cabeza, ordenaron el repliegue de las masas y la cesación de la huelga general. Los mineros aún resistieron la orden y Lechin fue obligado a ir personalmente a persuadir a los trabajadores. Las direcciones transaban, pues, con la hegemonía de los ultraderechistas en el comando de las fuerzas armadas.

El principal dirigente mirista de los obreros fabriles de La Paz, en mayo de este año, pudo decir por eso que en esas jornadas se logró derrotar el golpe de Natusch, lo que ciertamente era un éxito, pero a costa de una posible derrota de las masas en el plazo próximo ya que se había permitido imponerse a los ultraderechistas en las fuerzas armadas, que no tardarían en dar el golpe.

El régimen de Lidia Gueiler quedaba, así, mucho más débil aún que el de Guevara Arze, colocado entre un movimiento de masas más impulsado y más combativo después de las jornadas de noviembre, y una fuerza armada a cuya cabeza estaban colocados los sectores más reaccionarios. La escena, en adelante, sería claramente dominada por ese agudo y neto enfrentamiento entre los trabajadores organizados y centralizados en la COB y las fuerzas armadas reaccionarias, puesto que en el ámbito interno del país no quedaban en realidad sino dos enemigos centrales. Los demás actores, incluido el gobierno de Lidia Gueiler, eran comparsas secundarias.

Como curioso reconocimiento de esta realidad, y cumplimiento de la política del Departamento de Estado y de Carter, el Embajador norteamericano en La Paz, en un gesto insólito pero ilustrativo, hizo una visita diplomática al Secretario General de la COB, Juan Lechin, en sus oficinas de la COB. Extraña, pero no muy sorprendentemente, en la pugna política boliviana, las masas y sus centrales organizadas se encontraban en la curiosa situación de ser apoyadas por nada menos que la diplomacia imperialista norteamericana, en su lucha contra los militares golpistas. La explicación puede ser obvia, en cierto modo. Para los intereses políticos del “carterismo”, no se trataba solamente de impedir un golpe ultraderechista por razones democráticas, sino como una vía de ir encuadrando el conflicto en los límites de una lucha democrática e impedir el avance del poder directo de los trabajadores. En esa vía, podían contar con el auxilio de las direcciones conciliadoras de la COB, a su modo interesadas en no facilitar a las masas el camino de su propio poder. Pero, tal vez otro factor menos obvio motivaba esos trajes del Embajador yanqui. Bolivia no puede estar fuera de las disputas internacionales de poder. Lo que, quizás, explica por qué el actual régimen de García Meza tiene el rechazo de Estados Unidos y acaba de ganar el reconocimiento de Rusia. Impedir un golpe militar en Bolivia, en esta coyuntura, para los Estados Unidos no forma pues parte de una vocación democrática, sino de sus necesidades estratégicas internacionales en América Latina, mientras brega con las cuestiones centroamericanas.

Desde comienzo de 1980, los trabajadores no solamente insistieron en sus demandas reivindicativas, sino también comenzaron de nuevo a empujar a sus centrales como instrumentos de poder y de negociación con el régimen interno, sobre la política económica misma del Estado y no meramente por reivindicaciones parciales. La COB, a pesar de sus dirigentes, no podía dejar de conducirse como lo que de hecho es o tiende a ser, un órgano de poder de los trabajadores.

Al mismo tiempo, sin embargo, las direcciones políticas, los partidos focalizaban exclusivamente su atención en los problemas electorales pendientes. En su debate, habían desde luego matices de mayor o menor radicalismo. Así, mientras de un lado, los partidos de la UDP sostenían que todo el proceso tenía una perspectiva puramente democrática, y que la tarea era afianzar la democracia ante todo, es decir la democracia burguesa en la práctica, el PS de Marcelo Quiroga planteaba la necesidad de debatir un programa antes de discutir candidaturas, y la inclusión de la nacionalización de la mediana minería y de la banca, como bases indispensables para todo programa de gobierno. A ello la UDP contestaba calificando de extremistas esas demandas, y presionando por la unificación de toda la izquierda en torno de la candidatura presidencial de Siles Suazo y de Paz Zamora como su vicepresidente. No hubo acuerdo, al final.

Dos escenarios se movían, pues, en Bolivia de 1980. Uno, el de la institucionalidad de la democracia burguesa, por cuya afirmación bregaban exclusivamente los partidos mayoritarios y arrastraban a las masas a encuadrarse en tal escenario. Otro, sin embargo, era el más profundo y a la postre más decisivo, como se reveló muy pronto, el de los choques de clases que ponían en cuestión las bases mismas del Estado burgués en Bolivia.

El énfasis exclusivo de los partidos de izquierda en el escenario institucional era un camino ciego. Para no serlo, tendría que apoyarse en bases sociales inexistentes en ese país: una burguesía suficientemente fuerte como para asimilar las presiones de las masas en condiciones democráticas, aunque fuera por corto tiempo, con amplias capas medias aliadas y que permitieran a la institucionalidad democrática burguesa un terreno de intermediación real y estable entre las masas y la burguesía, todo, lo cual, desde luego, implicaría que las masas pudieran ser contenidas, no solo imaginativamente sino en la práctica, en los límites de esas relaciones políticas.

Bolivia, no obstante, no reúne y muy difícilmente podría reunir en el futuro semejantes condiciones sociales. Por ello, los choques de clases tienden a ser inmediatamente demasiado agudos como para ser institucionalizadas en las redes de la democracia parlamentaria, y eso independientemente de lo que pase por la cabeza de sus protagonistas. No hay duda de que la relativa diversificación del capital bajo Bánzer ha producido la sombra de esas condiciones, colocando a las capas medias democrático-nacionalistas, con el apoyo del reformismo obrero-burocrático, frente a un espejismo: la posibilidad efectiva de una democracia burguesa estable. Y la casi desintegración de los grupos políticos que, por su defección en momentos cruciales han sido actualmente abandonados por las masas, permite que esas imágenes dominen inclusive las capas burocráticas del movimiento obrero. Todo ello, sin embargo, no podía bastar para producir las condiciones necesarias para una posibilidad democrático burguesa. Esta en Bolivia hoy, es simplemente una imposibilidad histórica, y la democracia no podría imponerse en ese país sino como la democracia directa de las masas o no llegará.

Son esas las condiciones que explican que a fines de Abril, el enfrentamiento entre la COB y las Fuerzas Armadas hubiera llegado tan lejos que hizo pensar a los dirigentes de la COB en la necesidad de un arreglo con los militares. En efecto, pidieron y obtuvieron de la presidenta Gueiler, la organización de una reunión entre el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, presidido por García Meza y el Consejo Directivo entero de la COB, presidido, por Juan Lechin, el viejo líder obrero de tan largo historial de conciliaciones.

En esa reunión se llegó, en principio a una suerte de tregua, con promesas de la COB de rebajar la violencia del lenguaje de los trabajadores, y de los militares de no continuar con sus amenazas de golpe. Pero pocos días después era el desfile del 1º de Mayo en la Paz, que fue indudablemente el más importante de toda América Latina, por su significado y su magnitud.

Una marcha de alrededor de cien mil trabajadores, la mitad de los cuales campesinos y de mujeres campesinas en alta proporción, desfilaba largamente por las calles centrales de La Paz, y aunque los discursos de los dirigentes secundarios (Lechin no asistió, para no tener que enfrentarse a las masas con un lenguaje que sabía que ellas no admitirían) fueran moderados, nada podía impedir que los carteles y las consignas que la masa voceaba fueran consignas revolucionarias, que apuntaban a la revolución socialista, al poder directo de los trabajadores, menos que a las elecciones, democráticas o no.

Esa marcha culminaba la soldadura entre el movimiento obrero y el campesino, enterrando el Pacto Militar-Campesino, y ampliando la base social y numérica del movimiento revolucionario. Y frente a ello y a la combatividad y dirección demostrada por las masas en las calles, para la fuerza armada reaccionaria y la miserablemente débil burguesía boliviana, la opción evidente no podía ser la de las elecciones sino la de preparación de un golpe militar exitoso, que no repetiría las vacilaciones de Noviembre pasado.

En los meses que siguieron hasta el golpe en julio siguiente, el General García Meza se dedicó sistemáticamente a depurar las filas militares de todos los institucionalistas y prodemocráticos, lo que consiguió plenamente por el momento. Y, al mismo tiempo, a desplegar una diaria propaganda contra las masas, levantando las banderas fascistas de la "democracia inédita" a lo Pinochet, de quien se declaró seguidor, y para conmovir a la pequeña burguesía reaccionaria, a levantar el 'nacionalismo' contra la intervención norteamericana en contra del golpe. Reiteró hasta el cansancio que estaba preparado el golpe y que no dejaría de darlo en el momento oportuno. Nunca hubo golpe más voceado y anunciado.

Puede parecer sorprendente que en tales circunstancias, la mayor parte de los partidos de izquierda se dedicaran con mayor devoción aún a la preparación exclusiva de las elecciones, proclamando que si se daba el golpe responderían con otra huelga general como la de noviembre, y montando un Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) como supesta organización capaz de oponerse exitosamente al golpe como central de todos los sectores de masas.

En realidad, CONADE no podría ser sino una entidad nominal, cuya única vertebradura orgánica real era la COB, apta para producir comunicados de denuncia y de protesta, pero no para movilizar y acaudillar a las masas en la arena del inevitable enfrentamiento. Y, de otro lado, tras el fracaso de noviembre y frente al despliegue de los trabajadores del 1º de Mayo, las fuerzas armadas no podían permitirse intentar un golpe sin tener todas las condiciones preparadas: depuración y control de los mandos militares claves, apoyo externo consolidado, argentino esta vez, y una demagogia desahogada contra el intervencionismo norteamericano. Ni, finalmente, podían permitir la instalación de un régimen civil elegido democráticamente no tanto por el temor a lo que pudieran hacer los nuevos gobernantes, guiados por un programa inconsistente y rechazando inclusive medidas como la nacionalización de la minería mediana y de la banca, sino ante todo por el temor a que bajo un tal régimen pudiera desatarse un despliegue de las masas en una dirección que, como corrobora toda la historia anterior del país, apuntaría inevitablemente a la conquista del poder directo de los explotados y a la destrucción del Estado burgués.

Nada de eso pasaba por la conciencia de las direcciones políticas de la UDP y de las demás organizaciones menores que habían logrado el triunfo electoral relativo. Lo prueba inclusive el hecho de que el día mismo del golpe y dudando de que existiera, fueran a reunirse nada menos que en el local central de la COB, los dirigentes políticos y sindicales principales, salvándose Siles Suazo, el candidato vencedor, por llegar tarde a la reunión y Paz Zamora por estar en tratamiento médico en el exterior, víctima de un intento de asesinato.

En Bolivia, se reitera con esta nueva derrota de las masas la imposibilidad histórica de la democracia burguesa y el callejón hacia la derrota y la masacre al que condenan a las masas las direcciones que alientan la ilusión de afirmar solamente un régimen democrático burgués. Se reitera que cualesquiera que sea aún el peso relativo de las tareas democrático nacionalistas no resueltas, ellas no pueden culminar ya sino como parte de otra democracia, la de las masas mismas, tras la destrucción de las fuerzas armadas y del aparato institucional del Estado burgués. Con la revolución socialista, en definitiva.

El golpe de García Meza estaba pues dentro de las objetivas necesidades de la burguesía imperialista y local en la coyuntura boliviana de ese preciso momento. No se trataba, en consecuencia, de ganar las elecciones solamente, sino de impedir la materialización del tan anunciado golpe, organizando las bases materiales y políticas de la violencia de las masas. Después de la experiencia de noviembre en ese momento no se podía simplemente pretender responder al golpe con la amenaza de una nueva huelga general, imposible en las condiciones de una represión generalizada, con una fuerza armada bajo pleno control de sus mandos reaccionarios. Había que impedir el golpe. Y no eran las elecciones, la manera de hacerlo.

Las masas bolivianas han sido derrotadas una vez más, y cada nueva derrota apareaja mayores dificultades para la próxima etapa de crisis política. Casi hay un consenso entre la izquierda boliviana para sostener que el régimen militar actual es muy débil y que podrá ser muy pronto derrocado por la resistencia de las masas. Tal vez y ojalá, eso sea así. Pero quizás no hay que llevar muy lejos la sustitución de la realidad con los deseos. El régimen militar, con o sin García Meza, no es tan

débil como parece mientras las direcciones políticas de las masas no abandonen la ilusión de una democracia burguesa como alternativa única para terminar con esta larga historia de frustraciones.

Las masas bolivianas no dejarán de resistir y luchar, qué duda cabe. Y es tarea de todos, ayudarlas a conquistar sus objetivos reales, los de la revolución socialista. Parte de esas tareas, es aprender las lecciones centrales de esas frustraciones y abandonar nosotros, en nuestros propios países las ilusiones de las capas medias sobre el reformismo democrático-nacionalista y el oportunismo conciliador del reformismo burocrático bajo cualquiera de sus expresiones y adhesiones internacionales, moscovitas o pekineses, y depurarse igualmente de las inconsecuencias y del burocratismo práctico de los trotskistas. La revolución latinoamericana no puede triunfar hoy, en ningún lado, sino como parte de la revolución socialista.

No se sigue de allí que las tendencias nacionalistas y democráticas reales en el seno de las masas deben ser segregadas del movimiento socialista revolucionario. Este no podría desarrollarse sin aquellas, ni éstas culminar sin el socialismo. De lo que se trata es de aprender, de una vez por todas, que las diferencias estratégicas no suponen la división del movimiento de masas en la lucha diaria, sino el debate serio y honrado en la pugna por la dirección de las masas.

En el período de resistencia contra la dictadura militar, si las corrientes democrático-nacionalistas radicales, que tienen ahora la hegemonía política del movimiento de masas bolivianas, y las corrientes revolucionarias socialistas, minoritarias pero activas, no son capaces cada cual de romper con sus propias prisiones ideológicas y desarrollar unidas la lucha común, la dictadura no puede ser debilitada a fondo y pronto derrotada.

Esa lucha de resistencia no puede pasar por fuera del poder aglutinador de la dirección de las primeras. Pero no puede ser contenida dentro de los límites exclusivos de la democracia burguesa, a la que apuntan esos sectores. Y del otro lado, sin apoyarse en las necesidades democrático-nacionalistas del movimiento de masas y sin apoyarlas, la lucha por la culminación socialista de la lucha democrática, condición para impedir una nueva etapa de derrotas, no puede ser impulsada.

Y no se trata solamente de unidad entre las organizaciones de la izquierda. Se trata ante todo de la unidad de las organizaciones directas de las masas, dentro de las cuales debe ejercitarse la anterior. De ese modo las masas explotadas de Bolivia, y su dirección proletaria, encontrarán, al fin, un canal de desarrollo hacia su propio poder, hacia su democracia directa, que ha demostrado ser en una historia larga y cruenta, la aspiración y el motor profundo del movimiento político de los trabajadores de ese país. La revolución boliviana no parece tener otras condiciones de victoria que no sea el desarrollo y canalización del más profundo impulso histórico de sus masas. A ellas, a su histórico ejemplo revolucionario, nuestra entera solidaridad.

Una bibliografía básica sobre la historia política boliviana contemporánea, es la siguiente:

1. Herbert S. Klein: *Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana*. La Paz, 1968.
2. Guillermo Lora: *La Revolución Boliviana*. La Paz, 1963.
– *Historia del Movimiento Obrero Boliviano*. 4 vols.
– *Movimiento Obrero Contemporáneo (1952-1979)*. La Paz, 1979.
– *Estudios Histórico-Políticos sobre Bolivia*.
3. Liborio Justo: *Bolivia: La Revolución Derrotada*. Buenos Aires, 1971 2a. Edición.
4. Eduardo Fioravanti: *L'esperienza della Assemblea Popolare in Bolivia*. JACA BOOK, Milano 1973.
5. Sergio Almaraz: *El Poder y la Caída*. La Paz, 1967.
– *Requiem para una República*. La Paz, 1969.
6. René Zavaleta: *El Poder Dual*. Siglo XXI, México 1972.
7. Augusto Céspedes: *El Dictador Suicida* (varias ediciones).
– *El Presidente Colgado* (varias ediciones).



OPORTUNISMO Y GOLPISMO EN LA IZQUIERDA

"... mientras en un periodo de debilidad organizativa la sobrestimación mecánica de las fuerzas conscientemente revolucionarias es el peligro más grande. . . , en los partidos de masas la recaída en el oportunismo que tiene miedo de actuar es un peligro mucho más actual." (Lukács, György - Ante el Tercer Congreso, Kommunismus. Viena, 2 (17/18): 583-592, 15 mayo 1921).

Con las palabras que acabamos de citar alude Lukács a los dos peligros básicos (oportunismo y putschismo o golpismo) a los que se enfrenta constantemente el movimiento revolucionario. Para nosotros, que no intentamos sino ofrecer a la discusión algunos aspectos teóricos del problema de la unidad de la izquierda, resulta particularmente importante caracterizar estos dos peligros porque ellos se presentan de hecho como impedimentos a la puesta en marcha del proceso de unificación de la izquierda peruana.

El oportunismo —actualmente más propio de las viejas organizaciones proletarias y más enraizado en los jefes que en las masas— puede caracterizarse como el intento de llegar a la revolución por las vías de la evolución, adaptando la acción "revolucionaria" a los marcos trazados por las clases dominantes. La posición oportunista comporta una actitud pasiva a la espera de que maduren por sí solas las condiciones objetivas y subjetivas para la puesta en marcha del proceso revolucionario. Esta pasividad esencial no impide, sin embargo, que se lleve a cabo una cierta actividad que es entendida como "preparación" de la revolución. El problema está en que entre "preparación" y revolución se establece un hiato insalvable puesto que la preparación (sea electoral o de corte economicista) no es entendida como momento del proceso revolucionario y, consecuentemente, anticipo de la sociedad futura, sino como un "hecho" aislado y sin relación alguna con el proceso.

La acción de los oportunistas se orienta, en lo político, a la conquista de votos con los que ganar la mayoría que permitirá luego, por la vía legal, imponer la revolución como un "deus ex machina". En el plano económico, la acción se orienta a una lucha de carácter economicista y sin relación alguna con la conquista del poder político. Ello significa que los oportunistas ponen la contradicción de la sociedad, por un lado, sólo en el poder político, y, por otro, sólo en el nivel económico, lo que naturalmente comporta una falsa comprensión de la esencia de la sociedad explotativa y una incapacitación para la acción revolucionaria efectiva.

El oportunismo, al separar mecánicamente las acciones políticas de las económicas y viceversa, atribuye a dichas acciones una especie de sustantividad, las reviste de valor por sí mismas, incapacitándolas así para llenar la función que les correspondería como momentos del proceso total. Porque, fiel al positivismo de viejo cuño y heredero del sabio equilibrio del "realismo político", interesa al oportunismo exhibir hechos concretos, mostrar los "éxitos" ya logrados, por más que sean éstos insignificantes desde la perspectiva de la totalidad del proceso revolucionario y resultado de compromisos vergonzantes. Al oportunismo se le escapa la perspectiva de la totalidad, la consideración de la revolución como un proceso que es el único que puede dar sentido a los hechos aislados.

El aferramiento a los hechos y la exhibición de los éxitos no son sino manifestación de una claudicante reconciliación con la realidad, proclive al pactismo y dispuesta al compromiso. Poner —velada o manifiestamente— en la reconciliación con la realidad la garantía para comenzar el sembrío de la sociedad futura es muestra evidente de la ceguera ideológica que afecta desde antiguo a la dirigencia oportunista de no pocas de nuestras organizaciones de izquierda. No dejamos de reconocer la función que dichas organizaciones desempeñaron en los días

josé ignacio lópez soría

de la ilegalidad. El problema está en que la lucha por la legalidad ha absorbido de tal manera sus fuerzas y aspiraciones que las ha llevado a poner en la conquista de la legalidad una meta y no un momento de la lucha, un fin que justifica cualquier medio y no un instrumento. No es raro, por tanto, que corran presurosas a las justas electorales sin pensar en serio si su participación en los órganos burgueses de gobierno es fruto de su propia lucha o más bien de una estratagema de las clases dominantes para atraerlas a su propio campo de lucha. Que, además, acudan desunidas —como en un afán de mostrar ante los demás grupos de izquierda la propia capacidad para recolectar votos— parece mostrar que, con conciencia o sin ella, han sido víctimas de la aludida estratagema.

El oportunismo en cuanto tendencia ideológica deja también sus marcas en lo organizativo. El divorcio teórico entre preparación y revolución y entre lucha económica y lucha política se manifiesta organizativamente de diversas formas. Las organizaciones oportunistas son o exclusivamente económicas (sindicatos) o exclusivamente políticas (partidos). La separación organizativa no queda disuelta por el hecho de que medie entre unas y otras una relación de simpatía que se expresa en comunicados declarativos de apoyo. Los comunicados de apoyo —cuando se hacen desde fuera del movimiento y no se traducen en acciones sirven sólo para purificar la mala conciencia y para dejar en claro que no se está dentro del movimiento. Visto desde el partido, el sindicato es esencialmente un campo en el que ganar clientela electoral; visto desde el sindicato, el partido es sólo un instrumento al servicio de determinadas reivindicaciones económicas. La relación de simpatía o de instrumentalización recíproca que media entre ambas organizaciones no es suficiente para romper el aislamiento de una con respecto a la otra.

Una relación realmente orgánica entre sindicato y partidos supone, como presupuesto teórico, que se considera el movimiento sindical como el primer momento de la acción revolucionaria, el momento organizativo de la actividad todavía inconsciente, inmediata y necesaria de las masas. Este momento tiene que ser superado —dialécticamente negado— en la actividad ya consciente, mediada y libre del partido. El partido, cuando entiende la revolución como un proceso, parte del movimiento espontáneo de las masas para llevar a éstas a la cabal toma de conciencia de su propia situación de clase y, consecuentemente, a la defensa, en todos los niveles, de sus reales intereses de clase. Y no es que el partido —como piensan los oportunistas— tenga que iluminar a las masas para insuflarles desde fuera la conciencia de clase sino que debe actuar dentro de ese movimiento, porque es la actuación dentro del movimiento y no la mera prédica ideológica lo que contribuirá a que las masas vayan pasando de la espontaneidad a la conciencia, de la motivación inmediata a la mediada, de la actuación por la necesidad a la actuación por la libertad. No es entonces la actuación en lugar de la masa y por ella sino dentro de ella, como la levadura que hace fermentar a la harina toda. Este paso supone que las masas, partiendo de sus propias condiciones de existencia y no por la interiorización en ellas de determinadas consignas ideológicas, comienzan a entender esas condiciones como resultado de todo el orden social establecido, lo que las va llevando a comprender la necesidad de que su lucha trascienda lo exclusivamente económico para orientarse —sin negar lo anterior— hacia lo político e ideológico como requisito imprescindible para la realización cabal de sus reales intereses de clase. En la comprensión de esta necesidad está, en cada momento del proceso, el máximo de conciencia posible, la plenitud de la conciencia de clase.

Precisamente con respecto al problema de la conciencia de clase la posición oportunista revela su ceguera congénita. La dirigencia oportunista piensa que posee ya la conciencia de clase y que, por tanto, puede “representar” los intereses de las masas explotadas ante las clases dominantes. Opta entonces esta dirigencia iluminada por uno de estos dos caminos: o

pretende insuflar la conciencia desde fuera del movimiento por la vía de la “iluminación” política o se sienta tranquilamente a la espera de que el deterioramiento de las condiciones objetivas produzca mecánicamente la maduración de la conciencia en las masas. Voluntarismo o fatalismo, dos actitudes que parecen antagónicas pero que se dan de la mano en el caso de los oportunistas. El recurso al voluntarismo o al fatalismo no es ciertamente gratuito, responde más bien a la relación de la dirigencia iluminada no con las masas sino con las clases dominantes. Cuando éstas le dejan un cierto respiro político —del que la dirigencia oportunista no tarda en gloriarse entendiendo la concesión como una conquista y procurando ocultar las claudicaciones que tal concesión exigió— recurre al voluntarismo iluminista; cuando se cierra esa posibilidad queda siempre el recurso de la espera fatalista.

No es raro que al interior de las organizaciones oportunistas se haya impuesto el centralismo burocrático con su ya vieja secuela de calamidades. Las energías que podrían haberse usado para impulsar el movimiento revolucionario se gastaron en conquistar los aparatos de control de la organización, y las que quedan se consumen en el mantenimiento en ellos. Una aristocracia iluminada se arroga la “representatividad” de los intereses de unas masas consideradas aformes, instintivas, espontáneas y carentes de perspectivas. El objetivo máspreciado es el mantenimiento de esa “representatividad”. Para ello hay que centralizar burocratizando —haciendo que quienes lleguen a los puestos claves del aparato organizativo hayan perdido ya la capacidad crítica y estén dispuestos a aceptar las órdenes de la jerarquía iluminada—, hay que separar rígidamente preparación y revolución, lucha económica y lucha política, hay que impedir que las masas salten de lo instintivo a lo consciente para poder seguir representando el papel de “sustantividad objetiva” de los intereses de esas masas, hay que ganar adeptos (votos) sin que el aumento en la cantidad de miembros de la organización comporte un cambio de función de la misma, hay finalmente que fragmentar el proceso revolucionario para que cada acción se agote en sí misma y pierda así su carácter de momento de la totalidad. El centralismo burocrático es sólo el mecanismo a través del cual opera el deber-ser del comportamiento oportunista, pero se trata de un mecanismo que se adecúa perfectamente a las intenciones del oportunismo. El maridaje entre oportunismo —en cuanto tendencia ideológica— y el centralismo burocrático —en cuanto forma de organización— es ya tan antiguo que casi son impensables el uno sin el otro. Hasta podría decirse que el centralismo burocrático es la forma necesaria de todo oportunismo puesto que sin él la dirigencia iluminada corre el riesgo de que sus intenciones sean desenmascaradas. No es raro, por tanto, que dicha dirigencia ponga en el mantenimiento de esa forma mucha más fuerza que en la lucha revolucionaria.

El golpismo de izquierda podría definirse como la creencia en la posibilidad de llevar a cabo la revolución de un solo golpe aestado por una vanguardia militarizada. La posición golpista o putschista, más propia de las nuevas organizaciones y más arraigada en la inteligencia radicalizada que en las masas trabajadoras, nace de la desilusión con respecto a la orientación oportunista de la dirigencia de las viejas organizaciones de izquierda. El oportunismo abierto o velado de esta dirigencia impulsó a los elementos más jóvenes y nuevos a buscar una vía más rápida y efectiva hacia la revolución. En ese momento de búsqueda la revolución cubana fue entendida bajo la categoría de ejemplaridad. No había sino que imitarla, reeditar el camino cubano hacia la conquista del poder. Y comenzaron las acciones guerrilleras, tan ricas en explosiones revolucionarias y tan derrochadoras de generosidad a borbotones como pobres en efectividad. Se consiguió, sin embargo, dejar en claro algo importante: la disposición al pacto; la permanente claudicación y el oportunismo de la vieja dirigencia burocratizada. Pero la nueva vanguardia no buscó precisamente a las masas, en las que conda también la desilusión, sino que se encastilló en acciones foquistas revestidas de heroi-

idad y más propias de una minoría bien disciplinada. La puesta a prueba de la capacidad de sacrificio actúa como elemento seleccionador. Heroicidad, espíritu de sacrificio, sentido del riesgo, osadía, etc. representaban valores demasiado atrayentes para una juventud pequeño-burguesa, mayoritariamente universitaria, testigo hasta entonces mudo del derrumbarse de su propia situación de clase incapaz ya de aceptar la línea oportunista y con una disposición a la entrega que nadie había sabido encauzar. Con el surgimiento del primer brote guerrillero la desilusión mutó en entusiasmo y el entusiasmo se transformó en helicosidad y entrega generosa. Frente a la heroicidad de los guerrilleros el movimiento oficialista llamado "cooperación popular" quedaba no sólo desleído sino desmascarado como una acción encaminada a servir de cauce de desfogue del entusiasmo juvenil y a extender las redes de la dominación más allá de sus fronteras tradicionales.

La acción de los golpistas se orientó, en lo político-militar, al adiestramiento guerrillero y a la reunión de armas para conquistar el poder político e imponer desde él la revolución también como un "deus ex machina". En lo económico, los golpistas intervienen en los movimientos espontáneos de las masas pero no para contribuir a que en ellas madure la conciencia de clase en base a la trascendencia de su propia inmediatez sino para convertirlas en unidades de apoyo en el momento del asalto al poder.

Los golpistas separan también preparación de revolución. Entienden la toma del poder político como un hecho aislado, como el hecho por excelencia de cuya realización se derivará mecánicamente la búsqueda transformación social. La revolución se identifica sólo con ese hecho. Lo anterior a él es sólo preparación y lo siguiente sólo consecuencia. La preparación se unidimensionaliza de tal manera que queda prácticamente reducida a lo militar (adiestramiento y reunión de armas), dejándose de lado la preparación de aquellas tareas que habría que llevar a cabo después de la toma del poder. Carecen, por tanto, los golpistas de un proyecto político consecuente, es decir de un proyecto político que no sólo enuncie las metas sino que proponga vías efectivas para su realización y entienda ya esas vías como momentos del proceso revolucionario y como anticipación de la sociedad futura. Y es que, consciente o inconscientemente, el golpismo parte de la creencia de que el Estado burgués es el origen de las contradicciones de la sociedad. Por eso concentra sus acciones en la conquista por asalto del Estado, descuidando los momentos económico e ideológico de la lucha de clases.

Los golpistas parecen estar más cerca de las masas que los oportunistas porque intervienen directamente —y no a través de la burocracia subalterna— en las acciones inmediatas y espontáneas de éstas, pero cuando lo hacen o se abandonan a las masas, quedando también presos de la inmediatez y de la espontaneidad, o entienden los movimientos de masas como acciones de apoyo para la conquista armada del Estado. La vanguardia golpista no se preocupa en realidad de la maduración por la práctica de la conciencia de clase. Entiende la conciencia de clase como dada de una vez para siempre y atribuye mecánicamente su propia conciencia a las masas. Se considera que la conciencia está ya totalmente realizada en cada trabajador, no queda, por tanto, sino ponerla en las manos el instrumento (las armas) que posibilite la toma del poder.

Acción armada e intervención en las acciones espontáneas de las masas son, pues, actividades encaminadas ambas al mismo objetivo: la conquista del Estado. La dedicación preferente a una u otra de estas acciones depende de circunstancias cuyo control escapa a los golpistas. Cuando arrecian las presiones externas y no hay margen para la actividad política, el golpismo acentúa la importancia de las acciones de la vanguardia armada. Cuando existe ese margen político, se da preferencia a la acción legal o quasi-legal entre las masas. En

cualquier caso la acción de los golpistas es calificada por el oportunismo de anarquista, infantilista, etc. Naturalmente los golpistas no son menos generosos en los calificativos referidos a la dirigencia oportunista: claudicante, pactista, gradualista, comprometida con el orden existente, burocratizada, revisionista, etc. Y mientras los insultos —y no las críticas en profundidad— van y vienen, las clases dominantes se frotan las manos de gozo. Nada puede interesarles más que la división de las fuerzas populares y el anulamiento de unas por otras.

Importa advertir que de estas orientaciones golpistas se derivan también consecuencias en lo organizativo. La organización golpista, concebida y nacida como vanguardia armada y dotada siempre de una actitud voluntarista, arrastra, cuando se convierte en partido legalizado, los caracteres derivados de su nacimiento: caudillismo, actitud carismática de la vanguardia, radicalidad sin concesiones, posición mecánica de no reconciliación con la realidad, etc. El acceso a los puestos directivos no se da aquí a través de los senderos secretos del burocratismo centralizado sino por la imposición de la personalidad del héroe carismático que exhibe como méritos las preesas ganadas en la lucha armada. La finalidad misma de la organización es pertrechar a los miembros para la toma del poder, por eso la relación entre dirigencia y los miembros de la organización reviste siempre un cierto carácter militarista (disciplina rígida, obediencia acrítica, ejecución ciega de las órdenes, exaltación de la heroicidad individual, etc.).

A pesar de las diferencias entre oportunismo y putschismo, ambas tendencias coinciden en más de un punto básico: la consideración de la revolución como fruto de un acto aislado o de una suma de hechos, la falsa valoración de la organización y la orientación ética.

La ética de la dirigencia oportunista puede definirse como una **ética del compromiso** en la que el principio básico es la carencia de principios, es decir la mutación de los principios en función de las exigencias de un factor sólo táctico (la actuación dentro de la legalidad). Lo meramente táctico —desprovisto de su carácter de momento de la totalidad del proceso revolucionario— termina por convertirse en un punto inflado, en una especie de absoluto al que se subordinan incluso los principios. La ética de la vanguardia putschista podría definirse como una **ética de la heroicidad repentina**. También aquí al acto heroico —sin conexión con el proceso— se le atribuye una capacidad significativa en cuanto que, a partir de él, se revisten de sentido los hechos previos de la preparación. La diferencia entre las dos éticas es sólo aparente. Ambas tienden a absolutizar lo que, visto desde una perspectiva teórica revolucionaria, es sólo un momento del proceso, sea ese momento el de la lucha armada o el de la acumulación de votos.

Podríamos decir que entre ambas éticas hay sólo una diferencia de forma (forma de la heroicidad o forma del compromiso), pero en los dos casos la materia de la ética está referida esencialmente a "actos" voluntarista o fatalmente arrancados del proceso revolucionario. El carácter básicamente formal de estas éticas obedece a la necesidad que tienen las organizaciones oportunistas y putschistas de imponer sobre sus miembros una especie de imperativo categórico que posibilite la adhesión sin ofrecer cauce para la crítica. Poco importa que la sumisión acrítica del miembro sea vista como consecuencia "natural" de la identificación mecánica de la verdad con la posición de la dirigencia iluminada o que sea impuesta por la vía de la veneración al jefe carismático. Interesa sólo la forma misma, la sumisión acrítica, la aceptación de la obligación formulada por la dirigencia burocratizada o por la vanguardia mesiánica.

Oportunistas y putschistas, al perder de vista la perspectiva de la totalidad, atomizan el proceso revolucionario, concen-

trando sus esfuerzos en determinadas acciones aisladas de las que esperan resultados inmediatos. Atomización y concentración no son aquí opuestos sino dos formas de un mismo comportamiento. Cuando el proceso es fragmentado en actos aislados y sin conexión profunda entre sí, la consecuencia lógica es la exaltación de una de esos actos hasta elevarlo a la categoría de acto por excelencia alrededor del cual se polarizan todos los esfuerzos. Que la concentración se dé alrededor de la acumulación de votos o de la reunión de armas no cambia la esencia del comportamiento. Por eso no hay por qué extrañarse de que quienes hoy concentran sus esfuerzos en acumular votos se conviertan algún día en asaltadores del poder, e igualmente que quienes pusieron ayer en la lucha armada, la única expresión fiel de la revolucionariedad corran hoy presurosos a las urnas electorales. ¿Giro en el comportamiento? Sí, pero sólo aparente puesto que estos dos tipos de actuación son ambos consecuencia natural de la interpretación de la revolución no como un proceso sin o como fruto de un acto.

Tanto para los oportunistas como para los putschistas la organización es o un presupuesto o un resultado de la acción pero de ninguna manera algo que surge en el proceso mismo de la acción y que va cambiando de acuerdo a la evolución de la lucha de clases. Unos y otros subestiman, en realidad, la espontaneidad de las masas para sobrestimar la importancia de las acciones previamente preparadas. Cuando se acercan a las masas lo hacen con afanes o abiertamente electorales o

encubiertamente putschistas. En cualquier caso las masas, en cuyo movimiento espontáneo está el primer momento del proceso revolucionario, son para ellos parte del apoyo que necesitan para llegar al poder. No alcanzan a entender que en esa espontaneidad está ya implícita la revolucionariedad y que la misión de la organización consistiría precisamente en contribuir a la maduración de la conciencia de las masas no por la vía de la acuñación de la conciencia desde fuera del movimiento —como si se tratase de un postulado ideológico que hubiese que introducir en las masas— ni de la atribución sin más de esa conciencia a las masas— como si se tratase de un fruto natural del movimiento espontáneo de éstas— sino colaborando a que las masas mismas tomen conciencia de su real situación de clase a partir de la comprensión de sus propias condiciones inmediatas de existencia.

Vistos desde la perspectiva de la totalidad del proceso revolucionario, oportunismo y putschismo son también momentos, aunque negativos, de ese proceso. La patentización de estos peligros lleva al momento positivo, la crítica de purificación del movimiento. Porque el abultamiento de estas tendencias hasta convertirse incluso en dominantes es sólo síntoma de la crisis profunda por la que atraviesa el movimiento. Ajustar cuentas con ellas significa ya comenzar a superar la crisis y cavar los cimientos para la construcción de la verdadera unidad revolucionaria.



PERIODISTAS: DE UNA PATRONAL A OTRA

Estas líneas son escritas a menos de quince días de la decisión del régimen de Belaúnde de nombrar como directivos de los diarios expropiados¹ en 1970 y 1974 a los antiguos propietarios o a representantes suyos. Es probable que cuando este texto se encuentre publicado hayan empezado los despidos o las renunciaciones forzadas de trabajadores periodísticos contratados por las directivas que nombraron Velasco Alvarado o Morales Bermúdez. Entre los despedidos estarán algunos de los que no pudieron o no quisieron protestar el pasado 28 de julio, cuando los antiguos dueños entraron sin mayores trámites a recuperar sus oficinas. Y a pesar del particular desagrado que produce esta restauración con su tufo oligárquico y revanchista (un director en particular ha decidido retrotraer la numeración de su diario a la cifra del 28 de julio de 1974, buscando así borrar con tinta seis años de gestión "parametrada"), es preciso tener en cuenta que desde un punto de vista estrictamente gremial se trata de un lamentable incidente más: estos no son los primeros reaccionarios que en estos últimos cinco años han entrado a los periódicos para castigar con el despido la discrepancia política, y hacer con ello lugar para una nueva generación de allegados al flamante poder. Y para ser más precisos, no siempre han sido reaccionarios los que han propiciado o tolerado semejantes despidos: dirigencias sindicales y figuras intelectuales de izquierda han visto en los vaivenes de la política nacional justificaciones para infringir los principios sindicales en sus empresas. Uno de los resultados de tal situación ha sido la gradual pérdida de legitimidad y prestigio de las posiciones políticas que se identificaron con la expropiación y tuvieron que asumir luego sus consecuencias; una de estas fue la colocación de los trabajadores entre los fuegos cruzados de dos intereses en conflicto, ambos ajenos a ellos: el diseño estatal de sometimiento burocrático de la prensa y el diseño privatista de su monopolización directa por el capital. El único punto de coincidencia de estos dos diseños ha sido la necesidad de impedir el surgimiento de un proyecto autónomo de los trabajadores de dentro y fuera de los diarios, y por lo tanto de arrasar con los fueros sindicales de los trabajadores periodísticos. Esta no es una tarea que se inicie con el advenimiento de Morales en 1975 o en las vísperas de su partida el presente año, sino una actitud que nace al momento mismo de la incautación de los diarios "Expreso" y "Extra" en marzo de 1970.

Tal vez el factor que diferenciará a la nueva oleada de arbitrariedades que se avecina sea la desaparición de las últimas confusiones y las últimas esperanzas respecto del carácter de la patronal en los diarios: la patronal burocrático-militar partió sin haber convertido a las cúpulas sindicales o comuneras en patronos, y los nuevos patronos no pueden, ni quieren, disfrazarse de nada. Luego de la primera sorpresa al no encontrar en los diarios la resistencia que algunos anunciaron y que se anunciaba con la nutrida marcha de los periodistas de izquierda contra la devolución de los periódicos, los nuevos patronos comunicaron con elocuencia desde sus columnas editoriales la intención de "restaurar el principio de autoridad". Por ello nadie puede dudar hoy —como si sucedió en el pasado— que la lucha por hacer real la consigna "Los diarios a sus trabajadores" pasa necesariamente a través de la lucha por la defensa de los fueros sindicales y por la cancelación del difundido amarillaje que existe hoy entre las filas del periodismo peruano. Si el error de un periodismo de izquierda fue confundir sus intereses con los del aparato burocrático-militar, que desde el primer momento había en realidad revelado sus intenciones, la habilidad del sindicalismo amarillo fue establecer entre muchos trabajadores periodísticos una identificación entre la lucha contra el tutelaje militar y la defensa de los antiguos propietarios. Hacia mediados de 1980 ya era bastante difícil disociar la idea de "diarios a sus trabajadores" de la idea de Oficina Central de Información (OCI). Y no olvidemos que la propia fórmula de entregar los diarios a sus trabajadores constituye

mirko lauer

una variante del diseño original de 1974: estuvimos pues viendo el tránsito del fracaso del proyecto corporativo al intento de entronizar la cúpula privilegiada, que en algunos diarios ha operado en efecto como una transición entre burócratas y propietarios. Obsérvase, si no, la conmovedora ceremonia de entrega de "El Comercio" a sus antiguos patrones, hecha por la directiva del mismo sindicato que los Miró Quesada no permitieron constituirse durante muchísimos años. Es por todo esto que la tarea de defensa y restablecimiento de los fueros sindicales y las conquistas laborales de los trabajadores no se da hoy únicamente de cara a la nueva patronal, sino también frente a las ideas y los hábitos contraídos en diez años de ejercicio de lo que se llamó "diarios de los trabajadores", ideas y hábitos que han concurrido también al desarrollo de la prensa de izquierda en todo el decenio, y que se manifiestan con creciente claridad.

No cabe duda que uno de los motores de las transformaciones de la prensa peruana desde la toma de "Expreso" y "Extra" por periodistas y efectivos de la guardia de asalto en la madrugada del 4 de marzo de 1970 ha sido el legítimo deseo de los trabajadores periodísticos de acabar con la farsa de una "libertad de prensa" que no es sino una libertad de empresa para el capital, montada sobre el silenciamiento de las grandes mayorías. El silenciamiento de las posiciones ulloístas que opinaban desde "Expreso" y "Extra" contó aquel año 1970 con la simpatía —puesta por escrito— de la mayor parte de los trabajadores de esa empresa; las tomas de los diarios la noche del 27 de julio de 1974 fueron bien vistas por la gran mayoría de sus trabajadores. Las protestas fueron en Miraflores. En el caso específico de "El Comercio" el cambio de dirección fue visto además como una suerte de culminación del enfrentamiento entre el flamante sindicato del diario y la familia propietaria. Obviamente estos hechos no pueden ser negados por la lluvia de pica-pica que recibió a los antiguos propietarios de "El Comercio" o la firmadera "Donpedrista" del diario "La Prensa", o la indiferencia con que los trabajadores recibieron la restauración en los otros periódicos. Lo que presenciamos en todos estos casos no es únicamente indiferencia o temor, sino un efectivo cambio de actitud: una incapacidad real de iniciativa por parte de todos aquellos opuestos al ingreso de los restauradores. Y en nuestra opinión esta falta de iniciativa nace de una falta de proyecto alternativo real para los periódicos, del reconocimiento de que tal como se dan hoy la consigna "prensa libre" del capital periodístico y la consigna "diarios a sus trabajadores" de algunos sectores son ni más ni menos la sartén y las brasas. En realidad dentro de los parámetros del poder burgués esas han sido las únicas dos opciones viables, descartándose incluso una propuesta de la hora final en la que los partidos se podían ir turnando el usufructo de los "diarios de los trabajadores", en estricto orden de precedencia electoral. Una vez cortada la posibilidad de un proyecto propio de los trabajadores periodísticos, la balanza fue inclinada por criterios prácticos: el retorno de los antiguos propietarios fue presentado como una posibilidad de salida de los apremios económicos de la mayoría de los diarios, sometidos todos estos años al doble torniquete de una conducción burocrática y una crisis del capital.

Sin embargo todas las anteriores razones y otras más para el cambio de actitud de muchos trabajadores periodísticos pueden ponerse bajo el signo de la tremenda estafa que resultó el proyecto de "los diarios para los sectores organizados de la sociedad": lo que muchos consideramos un tiempo como el genuino propósito de democratizar una prensa monopolizada por la oligarquía resultó siendo parte de un proyecto corporativo, que comenzaba por el sometimiento de los propios trabajadores periodísticos a la tutela del Estado, y les reclamaba a continuación apoyar las iniciativas fascistoides del MLR o la división de CONACI. Un primer efecto de esta constatación fue una pugna entre las directivas de los diarios, colocadas allí por el propio gobierno; pero en poco tiempo el carácter de cla-



se de la pugna se hizo evidente, cuando el choque entre los intereses del Estado velasquista y una parte de los trabajadores de los diarios propicia la tercera de varias oleadas de despidos masivos. Las anteriores dos habían tenido otro signo político: el despido de los trabajadores pro-ulloístas de "Expreso" y "Extra" en 1970 y el de los trabajadores alineados políticamente con las patronales salientes de 1974. Es entre otras cosas el carácter complejo de la situación, con sus aspectos antioligárquicos y populistas, lo que confunde los verdaderos términos de la disputa en ese momento. Podría decirse que en casi toda estafa hay una víctima complaciente: en este caso los propios trabajadores antipatronales de los diarios, que aceptaron (unos forzados, otros no tanto) el ingreso de una política de despidos avalada por las necesidades políticas del régimen en ese momento, y que aceptaron una posposición —que resultaría casi definitiva— de un poder efectivo de los trabajadores periodísticos, con reales bases jurídicas en ese sentido, y con el tipo de política sindical-empresarial que avalara tales bases. Pero esto no se vio únicamente en el terreno laboral: la política editorial de los diarios tomados en 1970 y 1974 jamás coincidió plenamente con las posiciones de los trabajadores periodísticos, e incluso para posiciones sumamente afines al régimen militar, como el caso del Partido Comunista —Unidad, la presencia en "Expreso", por ejemplo, fue un zapato chino, donde una precaria hegemonía tuvo que ser ganada día a día a través de luchas contra funcionarios enviados por otros sectores del gobierno. A la postre la política de los trabajadores periodísticos se volvía una parodia de la estrategia de copamiento de cargos públicos que varios grupos políticos aplicaron en diversos otros sectores.

Es así como a pesar de la efectiva (aunque fluctuante) influencia de las bases representadas en el sindicato de "Expreso" y "Extra", las decisiones finales y la conducción legal se mantuvieron siempre en manos de Comités Especiales nombrados desde el COAP, en una relación que sería calcada cuatro años más tarde para los tratos entre la OCI y los Comités Directivos de los diarios. Muchos de los comités de 1974 entraron en casi inmediato conflicto con este esquema (que contradecía las declaraciones oficiales), pero pronto fueron barridos y reemplazados por periódicas oleadas de comités que sí acataron la fórmula. En medio de esta situación los trabajadores periodísticos hicieron repetidos esfuerzos por afirmar una presencia y una autonomía, y en ello es digna de ser mencionada la actividad de los trabajadores de "Expreso" y "Extra". Sin embargo, un talón de Aquiles de semejantes iniciativas fue la confusión respecto del carácter de la patronal en ese momento: los miembros de los comités directivos son vistos como parte de la masa trabajadora, cuando en los hechos —a pesar de la mejor buena voluntad de muchos— eran representantes gubernamentales, como las limitaciones políticas que de ello pudieron emanar. El problema radicó en que la situación se mantuvo siempre en el terreno de los "como si": era como si los diarios fueran realmente de sus trabajadores, y era como si representaran realmente a los trabajadores organizados de fuera. El voluntarismo de varios periódicos que se lanzaron a operar desde el inicio como efectivos voceros de uno u otro sector no pudo ampliar los estrechos límites del planteamiento: "El Comercio" hizo una página campesina, pero tuvo que permanecer callado ante las tomas de tierras de Andahuaylas; "Expreso" hizo extrañas piruetas ante los maestros organizados en el SUTEP; "La Prensa" fue arrastrada a la confrontación al interior de CONACI. De otro lado la temprana ruptura del principio del frente sindical impidió que volvieran a soldarse las profundas grietas que abrió la lucha política cotidiana de cada diario. De este modo los periodistas de izquierda a la postre quedan como un sector, cada vez más reducido por los despidos, en involuntaria alianza con el Comité Directivo, y perdiendo apoyo en el exterior a medida que los periódicos van asumiendo posiciones cada vez más antipopulares en las postrimerías del velasquismo y en todo el período moralista. El signo-cardinal de todo este proceso es el de

la lógica y los intereses del estado velasquista imponiéndose a la lógica y los intereses populares.

Y a la vez es incuestionable que los diarios tomados en 1970 y algunos de los que cambiaron de patrones en 1974 asumieron en muchas áreas la defensa de intereses populares, y no siempre dentro de los límites del proyecto velasquista. Sin embargo, lo grave es que desde el principio —sobre todo a partir de 1974— tales extralimitaciones eran precisamente eso: infracciones de un juego cuyas reglas ya habían sido políticamente aceptadas de antemano. Por decirlo de otro modo: el sueño del momento inicial (en 1970 y luego en 1974) era que un poder vicario, una influencia vicaria para ser más precisos, se convirtiera por sí mismo en uno real. El intento de convertir aquel sueño en realidad estuvo en la raíz de muchísimos conflictos de aquella época. El gobierno fue estrechando los márgenes de acción de los trabajadores, e incluso de los comités, hasta desembocar en la lamentable situación de estos últimos años, con la mayor parte de los directores adictos de antemano. Y frente a semejante situación el sindicalismo clasista tuvo reales problemas para romper con el esquema diseñado en el curso de todo un decenio, y fue siendo neutralizado hasta el extremo de que en 1979 las banderas de la libertad de expresión son tomadas y vueltas al revés por la prensa no diaria de derecha y sus seguidores del campo izquierdista. La iniciativa laboral contra la patronal de ese momento queda toda en manos de la FPP de derecha, en los hechos al servicio de la nueva patronal de 1980; es esta la dirección sindical que administrará la purga que pide hoy la misma prensa no diaria de derecha que se movilizó el año pasado por la reapertura de sus órganos de expresión. Cuando la izquierda pierde toda iniciativa en la prensa en 1979, ya el silencio de los trabajadores de los diarios parametrados es casi total (con excepción de la protesta de los despidos de "La Crónica" en la Asamblea Constituyente, en 1978, no pocos de ellos silenciosos testigos cuando el despido masivo de más de 70 personas en ese mismo diario, en 1976). A esto debemos añadir la aparición de algunos genuinos escándalos en los manejos económicos y las remuneraciones de personas formalmente representantes de los trabajadores periodísticos; también semejantes elementos coadyuvaron al debilitamiento de las posiciones clasistas. Es sobre la base de estas derrotas de los trabajadores dentro de su diarios, de su despido y en algunos casos de su deliberada corrupción, que regresan hoy los antiguos propietarios, a continuar el trabajo avanzado por sus antecesores.

Entonces fue la quiebra del principio del sindicato como frente clasista de diversas posiciones políticas lo que permitió el ingreso de la arbitrariedad al terreno periodístico-laboral y no, como se quiere hacer creer hoy, el hecho mismo de las tomas de los diarios. Es evidente que en otras áreas en que fue reformado el sistema de propiedad (el agro, la industria) la arbitrariedad y la nueva represión intentaron desde temprano establecer sus dominios, como es cierto también que las nuevas manifestaciones de la patronal burguesa entraron en el momento mismo en que salía la patronal oligárquica. Sin embargo, en ninguno de tales casos tuvo el nuevo poder el éxito con que contó entre los trabajadores periodísticos. Una vez que el gobierno advirtió que podía contar con el beneplácito, o cuando menos con la indiferencia, de unos trabajadores para despedir a otros, procedió a hacer empleo pleno de su descubrimiento. Un factor decisivo en la actitud de los trabajadores que fueron permaneciendo en las empresas periodísticas fue el efecto de 'camuflamiento político de la patronal' bajo el velasquismo; era como si ya no hubieran patrones, y era como si los nuevos equipos de conducción fueran parte de la masa trabajadora en cada empresa, ambas ilusiones asumidas por sus protagonistas con la mejor buena voluntad. Este tipo de camuflamiento se prolongó a cierta prensa de izquierda, en que la patronal desaparece bajo el esquema de "frente", pero donde la mecánica del capital resulta determinante en todas las discrepancias entre posiciones. Todo esto limita el papel del sindi-

cato en la empresa, que se convierte en un simple grupo de presión y reclamo (lo cual de hecho es en toda empresa capitalista monda y lironda), con el agravante de que la confusión tiende a impedirle concebir siquiera su papel como efectiva alternativa de poder y de gestión, como si es el caso en algunas empresas reformadas. Un aspecto determinante en la confusión que estamos comentando es el propio diseño de "socialización" de 1974, cuya esencia era que un grupo de propietarios debía ser reemplazado por otro más amplio: una Asociación Civil representativa de otros sectores, no periodísticos, de la producción. En tal planteamiento viene implícita una visión de lo que el periodismo significa bajo el capital en sus diversas manifestaciones: una mediación burocrática entre la masa y la masa. En semejante planteamiento los trabajadores periodísticos son vistos como "aliados naturales" del Estado, y no como parte de las masas que se busca expresar.

El diseño consideró que los trabajadores periodísticos tenían derecho al producto económico de su trabajo (los ingresos de la empresa), pero no al producto político (el poder que nace de la conducción de un medio de prensa). Como lo señala un estudio sobre la reforma de la prensa, "en el contexto de una sociedad capitalista dependiente como la nuestra, lo que se produce periodísticamente no es únicamente un conjunto de informaciones que constituyen un diario, sino que se trata básicamente de la producción de la noticia como una mercancía. El periodista, en este proceso, resulta siendo un mediador entre los acontecimientos producidos por las clases sociales en lucha y la información traducida de ese acontecimiento a la sociedad que lo ha producido."² Lo que hubiera interesado era, pues, una modificación del carácter de mercancía de la noticia y de mediador desvinculado del periodista: el camino hacia esto hubiera sido la forja desde el diseño inicial de una efectiva organización de poder de los trabajadores articulada con otras organizaciones de poder del pueblo: precisamente aquello que el velasquismo impidió por todos los medios en sus siete años de existencia. Los periodistas fueron mantenidos en el estricto nivel de la mediación, efectivamente, sin posibilidad de vinculación real con las fuentes populares de la noticia y la línea editorial. No sorprende entonces la creciente identificación de muchos periodistas con la situación previa a la expropiación, similar en virtualmente todo, con la ventaja de una mayor estabilidad, y en ocasiones de un trato paternalista. Cuando empezó en serio la polémica entre estatismo ("trabajadorismo") y privatismo en torno a los diarios, ya los trabajadores la observaban como un conflicto entre dos manifestaciones de la patronal, ya que en ambos casos era virtualmente nula su capacidad de expresión independiente como sector de la clase trabajadora. Asimismo los propios "sectores organizados de la población" se inlubieron de reclamar algo que no habían pedido en primer lugar, ya que las asociaciones civiles propuestas iban a contrapelo de las formas de organización que cada uno de esos grupos (allí donde puede hablarse de efectivos grupos) se había dado. De otro lado entre los propios sectores burocrático-militares opuestos a la devolución, era más atractivo mantener los diarios en la farsa de una falsa propiedad de los trabajadores, que trasladarlos a asociaciones civiles con mayor capacidad de manobra.

Todo lo que hemos venido mencionando ha influido ciertamente en la evolución de la conciencia gremial general de los trabajadores de la prensa y en el nacimiento de la prensa profesional de izquierda que tenemos en la actualidad, a la que confluyen cúpulas partidarias y capitales privados, donde es patente el esquema de como si, y donde bajo la etiqueta de "frente" suele campear la arbitrariedad contra uno u otro grupo de periodistas o trabajadores en general. No es una casualidad ni una ironía que la derecha haya promovido este tipo de juego arbitrario, donde se incuba el personalismo y sucumbe toda posibilidad efectiva y a largo plazo de una prensa popular. Una historia de las vicisitudes del gremio periodístico no podrá de ninguna manera omitir las zancadillas y defenestra-

ciones, las prácticas patronales y los regímenes de explotación que han sufrido —y sufren— muchos trabajadores en más de una publicación radical. Esta situación se hace mucho más patente al cerrarse la etapa heroica de esta nueva prensa, una vez que las nuevas reglas del juego "democrático" empiezan a adquirir consistencia, luego del fracaso del paro nacional de enero de 1979, y el ingreso de amplios sectores izquierdistas a la estrategia de la transferencia del gobierno a los civiles de la burguesía. Para quienes marcharon pidiendo "la prensa para sus trabajadores" poco antes de la actual restauración, podría afirmarse que son tales prácticas en la prensa de izquierda un elemento que ha aportado a la legitimidad del esquema de devolución de los diarios aplicado hace poco sin mayores tropiezos, como no dejó de señalarlo socarronamente un artículo editorial del diario "La Prensa" en su primer día bajo la conducción directa de la ultraderecha liberal. Pues la consigna "los diarios a sus trabajadores", si no viene respaldada por una práctica y un diseño global, tiene la misma generosidad, ambigüedad y vacuedad que gritar "las fábricas a sus trabajadores" mientras se vive una fácil alianza con la burguesía industrial. Pues lo único que da coherencia a un periodismo de izquierda, o para tal caso a un parlamentarismo de izquierda, es la cuestión del poder y la democracia de los trabajadores. Como la voz genial que mencionaba César Vallejo, todo proyecto que se desee socialista, o simplemente popular, tiene que venir de o ir en pos de, la organización de ese poder. Posponer esto es suicida. "Independizar" lo periodístico del poder de los trabajadores, no importa en nombre de cuán sublimes objetivos, entrega la prensa al juego de la reacción.

¿Significa esto la invalidez total de la consigna "los diarios a sus trabajadores"? No necesariamente, pero con la condición indispensable de una conciencia clara de las fatales limitaciones implícitas en las diversas fórmulas presentadas por el velasquismo y el moralismo. De nada sirve la propiedad formal de los trabajadores cuando existe la tutela efectiva del Estado a través de una Oficina Central de Información (que el belaudismo, con toda su grito sobre "libertad de prensa" ha optado por mantener). Para los trabajadores periodísticos la propiedad total o parcial de los medios de prensa tiene que ser antes que nada expresión de una efectiva autonomía de clase frente al Estado, o cualquier forma camuflada de patronal. Sólo así, además, podrán los trabajadores ser en todo momento una real alternativa de poder. La manera de ir avanzando por este camino es a través del fortalecimiento de un sindicalismo clasista, hoy de capa caída en los diarios y revistas, y también la recuperación de las pocas posibilidades de expresión directa que tuvieron los trabajadores en cada empresa, hoy anuladas por la nueva Ley de Prensa, que decreta una libertad amplia e irrestricta, pero sólo para los propietarios del capital periodístico. El fracaso de la farsa burocrática en los diarios no puede significar el fracaso de las legítimas aspiraciones de los trabajadores periodísticos en sus empresas. En tal circunstancia la lucha por la libertad de expresión del pueblo, contra la explotación de los periodistas, y todas las formas del "belaudmetraje" burgués está a la orden del día, dentro y fuera de los sindicatos periodísticos, en las publicaciones no diarias y en las demás. (agosto de 1980).

NOTAS:

1. Usamos expropiación en un sentido genérico, ya que los trámites han sido diversos, y en muchos casos no se ha cumplido, pensamos que deliberadamente, con los trámites jurídicos de rigor.
2. Peirano, Luis, et. al., *Prensa: apertura y límites*, Lima, Desco, 1978: 241 pp.

POLONIA: PC FUERZA DIRIGENTE O INSTRUMENTO DE DOMINACION?

El Partido Obrero Unificado Polaco (POUP) nació en diciembre de 1948 a raíz de un congreso en el que se fusionaron —lo que dicho claramente significa que el primero fue absorbido por el segundo— el partido socialista polaco que existía desde 1892, y el partido obrero polaco, reencarnación, creada durante la guerra, del partido comunista polaco disuelto por la tercera internacional según órdenes de Stalin, en 1938 mientras sus dirigentes agonizaban en las mazmorras de la NKVD y sus militantes poblaban los diversos rincones del Gulag. Menos sangrantes que en el pasado y que la evolución paralela de los "partidos hermanos" en los demás países de la Europa del Este, la historia del POUP después de 1948 no ha carecido de conflictos violentos y purgas. En los años 1949-50 fueron eliminados los partidarios de la "desviación nacionalista y derechista", es decir, todos los que con razón o sin ella eran sospechosos de compartir las opiniones de Gomulka, primer secretario, eliminado antes del congreso de "unificación" por oponerse a una imitación servil de la URSS, y en particular, de la colectivización forzosa de la agricultura. Reinstalados en los puestos de mando en 1956 Gomulka y sus amigos dirigieron el partido durante catorce años luchando, a su vez, contra una nueva desviación, "la revisionista", cuyos representantes fueron expulsados (y abandonaron el partido para manifestar su desacuerdo con su política) en los años 1966-1968; después de 1967 se les amalgamó con los denominados "sionistas" —era sionista toda persona que tuviera judíos entre sus ascendientes— en el marco de una depuración masiva que afectó no sólo al propio partido sino también a la administración, las universidades, las instituciones culturales, los organismos económicos, etc. Tan peligrosos como estas crisis internas han sido las revueltas obreras a las que el partido ha tenido que hacer frente en junio de 1956, en diciembre de 1970 y, finalmente, en junio de 1976. En dos ocasiones, en octubre de 1956 y en diciembre de 1970, las manifestaciones populares que amenazaban con transformarse en una conflagración general, obligaron al partido a cambiar su dirección suprema. Desde esta última fecha reina una calma aparente, pero se desarrolla una lucha de pasillos que se percibe en ocasiones en el exterior.

Tras la historia el organigrama. A la cabeza del partido se encuentra el primer secretario —desde diciembre de 1970 el puesto lo ocupa Edward Gierek— seguido del buró político (17 personas de las cuales 3 son suplentes) y el secretariado (11 personas de las que cinco son también miembros del buró político). Ambas instancias son elegidas por el comité central (CC), elegido a su vez por el congreso, que se convoca cada cinco años; el comité central está compuesto de 140 miembros y de 110 suplentes.

Pese a que el escrutinio es secreto, las posibilidades de elección son muy reducidas: se presenta una lista única y los votantes solo pueden tachar ciertos nombres y eventualmente añadir algún otro que, dada la dispersión de votos no cuentan con ninguna posibilidad de ganar. Desde el 1 de junio de 1975, Polonia está dividida en 49 voivodatos (equivalentes a las provincias), subdivididas en ciudades y comunas rurales. El comité de cada voivodato dirige los escalones inferiores y, éstos los organismos de base; las organizaciones del ejército se encuentran bajo la tutela directa del CC. Cada miembro del partido debe pertenecer a una organización de base; ésta elige su comité y su buró del mismo modo que el congreso elige al CC. Los comités de las organizaciones de las grandes ciudades, de los barrios, de los voivodatos, son elegidos mediante escrutinio indirecto. Para elegir a la dirección suprema se interponen al menos cinco filtros: las organizaciones de base eligen a los delegados para la conferencia de la ciudad, que eligen a los delegados para la conferencia del voivodato, que eligen a los delegados para el congreso, que eligen a los miembros del CC,

Krzysztof Pomian

que eligen al buró político y al secretariado. Puede comprenderse sin dificultad que la dirección saliente que controla el proceso desde la base hasta la cima puede intervenir en él para situar a sus hombres en las listas de los futuros delegados y asegurarse de este modo un congreso dócil; y por tanto la reelección. Esto explica que los cambios no se realicen en el congreso sino en sesiones a puerta cerrada del CC, preparadas por el buró político y el secretariado. El centralismo democrático —tal es el nombre que se da a este sistema— deja a la dirección en libertad plena y absoluta frente a los simples miembros del partido que no tienen otro derecho reconocido que el de expresar su acuerdo. Pueden ciertamente manifestar su desacuerdo con la política de la dirección, pero en estos casos tienen todas las probabilidades de ser expulsados. Una organización de base que actuara así podría ser disuelta, por el comité de voivodato.

“La fuerza política que guía a la sociedad en la edificación del socialismo es el Partido Obrero Unificado Polaco”, puede leerse en la Constitución de la República popular de Polonia. Una precisión: el verbo “guiar” no traduce satisfactoriamente la significación del término polaco que además de poner el acento en el papel de guía hace alusión al de jefe. En los documentos preparatorios, se caracterizaba claramente al partido como fuerza dirigente pero, a causa de la cantidad de cartas y de peticiones que protestaban contra esta fórmula, se reemplazó la palabra “dirigir” por otra más equívoca. El lugar privilegiado que se atribuye al partido en la vida pública de Polonia fue contestado, pese a los peligros que esta acción comportaba, por una importante fracción de la opinión pública. A pesar de todo, el Partido posee una mayoría absoluta en la Dieta (255 diputados sobre 460 antes de la elecciones de 1976, 261 después); por otra parte nadie puede ser elegido sin que la dirección del partido apruebe su candidatura. Las candidaturas para los consejos de los voivodatos (y ciudades, barrios, ...) deben también recibir el aval de los comités respectivos del partido. Sólo están habilitados para presentarse a las elecciones las organizaciones pertenecientes al “Frente de Unidad nacional” que reagrupa, bajo el liderazgo del POUP, a los otros dos partidos que existen en Polonia pero que carecen de la más mínima autonomía, los sindicatos y las diversas “asociaciones de masas”. En el caso de las elecciones a la Dieta, el Frente presenta una sola lista en cada circunscripción electoral; otro tanto ocurre en la elección de los consejos. El voto queda reducido al acto de meter en la urna la papeleta con la lista del Frente sin tachaduras ni añadidos. Nada tiene de extraño que el partido pueda contar en la Dieta no solo con sus diputados sino también con los de los restantes partidos; de ahí una espléndida unanimidad que solo rompe de vez en cuando algún kamikaze católico que se abstiene aún a sabiendas de que eso le costará el cargo. El partido puede también contar con todos los mandatarios locales y lo que es más importante, puede contar con el gobierno. El consejo de ministros está compuesto por 38 personas de las cuales 34 pertenecen al POUP (entre ellos se cuentan 6 miembros y 2 suplentes del CC). El gobierno no es más que una emanación de la dirección suprema del partido al igual que las direcciones de los presidiums locales son una emanación de los correspondientes comités del partido.

De ahí a decir que el partido es la fuerza realmente dirigente no hay más que un paso. Pero antes de franquearlo conviene asegurarse de que el hacerlo no se cae en una trampa. La insistencia con la que los mandamases del país se esmeran en insistir en que es el partido el que efectivamente dirige el país no deja de ser sospechosa. En general los verdaderos detentadores del poder prefieren permanecer en la sombra. ¿Estamos ante una excepción, ante un poder que se manifiesta y se designa a sí mismo como poder? ¿Será la sociedad polaca —o cualquier otra sociedad construida sobre el modelo soviético— transparente? ¿Será el partido un todo homogéneo que podrá considerarse sujeto colectivo del ejercicio del poder? Esto es lo que

afirma la dirección. Pero ¿debemos creérmolo? Si respondemos a esta cuestión afirmativamente deberíamos admitir que Polonia es uno de los países más democráticos del mundo. En junio de 1975 el POUP contaba con 2,36 millones de miembros; lo que corresponde a uno por cada diez habitantes de más de 18 años. ¿El diez por ciento de la población participa realmente en el ejercicio del poder? Tal como hemos visto al estudiar el funcionamiento del partido, el conocimiento de sus estatutos plantea serias dudas sobre el carácter democrático de la institución. Y la lectura de los documentos que emanan de sus instancias no logra disiparlo sino más bien lo contrario.

Presente a lo largo de más de treinta años en el proscenio de la vida política polaca, controlando tanto las columnas de los periódicos como las emisiones de la radio y de la TV con los discursos de sus dirigentes y los informes de sus reuniones, celebrando con fasto sus fiestas, el partido sigue comportándose en cambio en ciertos aspectos como una organización semiclandestina. Las reuniones del buró político son conocidas tan sólo a través de los breves comunicados que sólo enuncian el orden del día. Durante los últimos seis años, de los que se disponen todos los comunicados, la más alta autoridad del país sólo se ha ocupado en una ocasión de los problemas de la defensa nacional y de la seguridad pública. Acerca de las reuniones del secretariado del CC no se sabe absolutamente nada. En cuanto a las del CC propiamente dicho, de las que la prensa publica los resúmenes, de una longitud respetable, por lo general, son las únicas que en ciertas ocasiones permiten entrever el debate que se desarrolla y las posiciones en presencia. Pero, incluso en este caso, al igual que ocurre en los congresos, las cosas de más importancia se ocultan cuidadosamente y los resúmenes que son censurados antes de publicarse ofrecen la imagen que el partido pretende dar de sí. No se sabe, por consiguiente, cómo se toman las decisiones en la dirección del partido. ¿En virtud de qué criterios se eligen entre las diversas opciones posibles? ¿Cuáles son las opciones que se enfrentan y cómo se manifiesta? ¿Quién y cómo vota? ¿En virtud de qué criterios se elige a tales personas y no a tales otras? ¿Cuántos votos recibe cada una? ¿Por qué un alto responsable se ve privado, de golpe de su cargo? Decir que no sabemos nada de todo ello es posiblemente excesivo. A base de comparar las decisiones tomadas durante un largo periodo, puede aclararse el mecanismo que las produce. A fuerza de escrutar los movimientos de personal se llegan a deducir los criterios de avance y retroceso. Los periodos de crisis abierta permiten identificar las tendencias que se enfrentan. Además, cada medida de importancia es precedida de una oleada de rumores, indiscreciones ¿calculados?, ¿involuntarios?— que aún siendo difíciles de verificar dan la posibilidad de comprender algo de lo que ocurre. En suma, si nos hemos formado una idea del funcionamiento del partido, y sobre todo de sus instancias de dirección no ha sido gracias a los informes que ellos mismos dan sino a toda una serie de síntomas que han requerido una amplia interpretación. Hay toda otra serie de cuestiones a la que no estamos en condiciones de dar todavía una respuesta: el financiamiento del partido y su presupuesto, el número de permanentes, sus salarios y los diversos privilegios de los que se benefician. Son temas ‘tabú’ no sólo para la gente externa al partido. Sus propios miembros no saben nada acerca de ello, ni tampoco el personal subalterno encerrado en el ámbito que les ha sido asignado. Tanto si se le contempla desde dentro como si se le contempla desde fuera el partido es opaco.

Pero en otros aspectos no lo es tanto. Así su composición social puede ser estudiada gracias a las estadísticas oficiales; aún estando truncadas, como veremos más adelante, y embellecidas para ser utilizadas como instrumento de propaganda permiten, a quien sabe leerlas, acceder a numerosas constataciones interesantes y sobre todo medir la implantación del partido en los diferentes medios sociales así como precisar el carácter de la política de proselitismo puesta en práctica por la dirección. Permiten además, aún con ciertas reservas, evaluar

el número de quienes ejercen realmente el poder y, a partir de todo ello, responder a la cuestión fundamental: ¿el partido es en realidad la fuerza dirigente o no hace otra cosa que ocultar al grupo que monopoliza el derecho de decidir acerca de los problemas fundamentales del país?

Los militantes del POUP tiene una precedencia mayormente urbana: un 72,1o/o frente a un 28,9o/o de procedencia rural. Está dominado por los hombres; las mujeres se encuentran subrepresentadas (23,2o/o) en relación a su peso en la población total (52,6o/o de la población con más de 18 años) y todavía lo están más en los órganos de dirección: no hay ni una sola en el buró político ni en el secretariado y son sólo 20 en el comité central (8o/o). No se puede entrar en el POUP antes de los 18 años pero el grupo de edad predominante es el comprendido entre los 30 y los 49 años. Uno de cada diez miembros del partido tiene estudios superiores, uno de cada cuatro ha terminado el bachillerato, y uno de cada tres sólo cuenta con los estudios primarios. Hasta aquí no hay problemas pero en el momento en que se pretende estudiar con detalle la representación en el partido de las diferentes categorías socioprofesionales empiezan a multiplicarse los enigmas.

les que representa el 26,3o/o de la población activa, están claramente subrepresentadas en el partido y su número disminuye constantemente desde 1970. (12). Por el contrario, las categorías socioprofesionales que se designa en conjunto con el término de trabajadores intelectuales" o con el de "intelligentsia" están sobrerrepresentados en el partido: baste decir para probarlo que las personas con estudios secundarios o superiores que no constituyen más que el 25o/o de la población de más de 18 años representan el 45o/o de los efectivos del POUP (ved cuadro III). Y esto no ocurre por azar sino en virtud de una estrategia preestablecida por la dirección.

A la luz del cuadro II se ve en qué consiste la política de proselitismo. Se trata antes que nada de asegurar al partido una implantación particularmente en los grupos socioprofesionales que participan, de cerca o de lejos, del ejercicio del poder. Cuanto mayor es el poder que detenta un grupo, mayor es también el porcentaje de miembros de esta categoría en el partido. El hecho de que el 85o/o de los oficiales sean miembros del partido resulta significativo a este respecto. Otro tanto ocurre probablemente en el caso de la policía y, aunque no pueda demostrarse, puede estarse seguro de que de entre los

Polonia: PC entre el poder y la revolución

CUADRO I
COMPOSICION SOCIAL DEL POUP

	Número de miembros	Porcentajes
Total	2.332.531	100,0
Obreros	912.798	39,4
Ingenieros, técnicos	255.693	11,0
Campeños	237.876	10,2
Retirados y pensionistas	144.334	6,2
Enseñantes de primaria y secundaria	144.062	6,2
Economistas, planificadores contables	115.689	5,0
Agronomos y otros especialistas de servicios agrícolas y forestales	35.433	1,5
Enseñantes de superior e investigadores	15.889	0,7
Médicos	13.470	0,6

Dejemos de lado para volver más tarde sobre ello todo lo que el cuadro I no nos dice y veamos lo que podemos sacar de él. Pero antes hagamos una advertencia previa: el proselitismo de los nuevos miembros del partido no lo deja la dirección al azar sino que lo vigila muy de cerca a fin de evitar dos riesgos: el partido no puede ser excesivamente pequeño porque en ese caso habría sectores en los que no estaría representado y a los que no llegaría directamente, pero tampoco puede ser demasiado numeroso porque si pudiera entrar cualquiera la pertenencia al partido dejaría de ser significativa. Por otra parte la dirección controla atentamente el porcentaje de las diferentes categorías socioprofesionales en el partido y, por tanto, el nivel de implantación del partido en cada uno de estos grupos. ¿Qué dicen las cifras? La dirección está muy orgullosa del porcentaje de obreros con que cuenta en sus filas: 39,4o/o en 1973 (36,7o/o sin contar los obreros agrícolas). Sólo que olvida decir que consultando el accesible anuario estadístico se comprueba que en 1973 los obreros (alrededor de 6,7 millones) constituían el 28,8o/o de la población mayor de los 18 años y el 41,1o/o del conjunto de la población activa. El porcentaje de obreros en el partido no tiene por consiguiente nada de extraordinario. Vale la pena señalar a propósito, que tras los acontecimientos de diciembre de 1970, el número de obreros industriales disminuyó en unos 40.000; todavía en 1973 eran menos numerosos que en 1970 y sólo en 1975 se alcanzaron las cifras de cinco años antes. En lo que se refiere a los campesinos la segunda gran categoría de trabajadores manua-

enseñantes que son directores de escuelas y los ingenieros o economistas que ocupan puestos de dirección en la industria o la administración el porcentaje de miembros del partido no debe alejarse mucho del correspondiente a los oficiales. Este no es de todos modos más que uno de los aspectos de la política de proselitismo. Porque por medio de ella también pretende, y esto no carece de importancia, asegurarse una buena implantación en los medios obreros: así dos de cada quince obreros industriales pertenecen al POUP.

Este interés por la clase obrera resulta de motivos ideológicos: el mismo nombre del partido hace referencia a su carácter "obrero" y todos los discursos de legitimación o de celebración en los que el partido es a la vez sujeto y objeto, invocan como argumento último su papel de representante de la clase obrera.

Pero este interés proviene también de motivos menos confesables: la convicción sostenida por el marxismo de que bajo el capitalismo (y la historia lo ha refrendado también en lo que se refiere a Polonia y la URSS) la clase obrera representa un contrapoder virtual y que por tanto es preciso vigilarla de cerca. Faltan datos para medir directamente el grado de implantación del partido en las categorías definidas por su nivel de rentas o de prestigio. Existe una forma de salvar este obstáculo. En efecto, la correlación entre el nivel de rentas y el prestigio por una parte, y la educación por otra, es muy marcada en

CUADRO II

GRADO DE IMPLANTACION DE POUP EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES

Nombre del grupo	1 n.º de miembros del grupo en 1973 (en millares)	2 n.º de miembros del POUP 1973 (en millares)	3 columna 2 V vol I (en o/o)
Oficiales	—	—	85.0
Enseñantes de primaria y secundaria	370	144	38.9
Enseñantes de superior e investigadores	51	16	31.4
Ingenieros y técnicos	900	256	28.4
Economistas, planificadores, contables	469	116	24.7
Médicos	70	14	20.0
Obreros industriales	6.400	849	13.3
Campeñinos	4.291	229	5.3

Polonia. Las escuelas superiores son prácticamente las únicas que abren las puertas a los puestos de responsabilidad, a las rentas elevadas y a un alto prestigio refrendado por los signos de reconocimiento oficial. Esto no quiere decir que baste con tener un título para ascender en la escala social. El título no es más que una condición necesaria para el éxito. Conocer el grado de implantación de un partido en las diferentes categorías caracterizadas según los niveles de educación, es tanto como conocer su grado de penetración en las categorías definidas por los niveles de renta y de prestigio.

La significación del cuadro es clara. Muestra primeramente que las cuatro categorías superiores están sobrerrepresentadas en el partido mientras que las tres inferiores están subrepresentadas. Y, lo que es más interesante, muestra también que el grado de implantación del partido aumenta de acuerdo con el grado de educación. En otras palabras, el partido se implanta con preferencia entre las capas privilegiadas de la sociedad polaca. Los cuadros 2 y 3 dan conjuntamente una respuesta a la pregunta: ¿puede hablarse del partido como de un todo homogéneo? Una organización política en la que coexisten personas diferenciadas por sus relaciones con el poder, por sus niveles de educación y de renta, por sus estilos de vida, no es ni puede ser homogénea. Pero si se admite que el partido está atravesado por las contradicciones sociales, como lo prueban numerosos hechos que podrían citarse, hay que preguntarse cuál es la fuerza que le permite conservar su cohesión y no estallar a pesar de todos los conflictos y crisis que le han afectado.

Volvamos al cuadro I y a sus enigmas. Basta con sumar los porcentajes para encontrar una sorpresa y no pequeña. Nos percatamos de que todas las categorías socioprofesionales que están enumeradas sumadas dan el 80,80/o del total. ¿Qué se esconde tras ese 19,20/o del que nada se sabe? ¿Cuál es la identidad social de esas 447.000 personas que no aparecen por ningún lado? Por el momento sólo podemos decir una cosa: pertenecen a las cuatro categorías superiores del cuadro III. Estas totalizan 1.046.000 miembros del POUP. Si se sustraen el conjunto de miembros del POUP que pertenecen a los grupos a los que sólo se accede al menos con parte de los estudios secundarios nos encontramos en presencia de 465.000 personas. 16.000 de ellas son, probablemente, pensionistas y retirados. Quedan 449.000, número que no difiere mucho del que buscábamos. ¿quiénes son estos 447.? miembros del POUP que tienen por lo menos estudios secundarios inconclusos?

Entre los grupos socioprofesionales ausentes del cuadro I están: el personal médico, el de la cultura, el de la administración del estado y de la justicia, del ejército y de la policía, los estudiantes, los profesionales liberales (periodistas, escritores, compositores, pintores, ...) y también los permanentes del partido, el aparato. Una amalgama. Una amalgama creada deliberadamente por el autor del cuadro, es decir, por la sección de organización del CC, para ocultar las dimensiones del aparato de la represión y del partido.

Afortunadamente, conocemos las dimensiones de los restantes grupos, excepción hecha de estos dos; pero no se sabe qué porcentaje de ellos pertenece al partido. Con una excepción: el personal médico auxiliar en el que los miembros del partido representan un 110/o del total. Puede suponerse basándonos en la experiencia y en las cifras anteriores que pertenecen al partido el 100/o de los estudiantes y del personal de la cultura, el 200/o de las personas que ejercen profesiones liberales, el 600/o de los funcionarios de la administración del estado y del personal de Justicia. Si sumamos todo esto nos da un total de alrededor de 174.000 personas. Siguen en la penumbra 273.000. Entre ellas se encuentran con toda probabilidad los miembros de los tres aparatos: militar, policial y del partido. La evaluación está hecha "grosso modo" y tiende a subestimar las dimensiones del grupo. Pero basta para constatar que ocupan el segundo lugar tras los obreros en los efectivos del partido.

Ahora entendemos la realidad que se trata de ocultar al presentar al partido como una fuerza dirigente, glorificando su unidad casi mística y haciendo de él el sujeto de las acciones, de las resoluciones, de los discursos: el partido ha hecho esto, el partido ha decidido lo otro, el partido es de la opinión de que... Esta realidad es la presencia en el partido de dos grandes categorías, una de las cuales está integrada por los simples miembros y la otra por el aparato. La verdadera significación de los estatutos del partido, de las modalidades de elección que se imponen y de los poderes disciplinarios que se otorga a las instancias superiores, es precisamente la de reservar al aparato el derecho soberano de decisión dando al mismo tiempo la impresión de que no es él quien decide. Pero es el aparato, en un sentido amplio, quien es en realidad el propietario colectivo de los instrumentos de la violencia y de los medios de producción; es él el que controla toda la difusión de las ideas. Lo que intentamos en este artículo es evidenciar el he-

CUADRO III
EL GRADO DE IMPLANTACION DEL POUP SEGUN
LOS NIVELES DE EDUCACION

Niveles de educacion	1 n.º de titulados de más de 18 años (en millares)	2 n.º de titulados población de más de 18 años (en o/o)	3 n.º de titulados en el POUP (millares)	4 n.º de titulados total de miembros del POUP (en o/o)
Superior	803	3	222	10
Superior incompleto	525	2	99	4
Secundario	3.481	15	585	25
Secundario incomp.	1.062	5	140	6
Profesional de base	3.127	14	292	13
Primario	9.630	42	807	35
Primario inc.	4.484	19	2.323	7
Total	23.112	100	178	100

cho de que el aparato necesita a los demás miembros del partido para producir la apariencia de una participación de las masas en el ejercicio del poder, y para borrar la impresión de cualquier antagonismo entre él y los que son expropiados en su provecho; para ocultar el desfase entre quienes monopolizan colectivamente el poder y quienes lo sufren. Enunciado de esta forma podría pensarse que el aparato se entrega a una operación de camuflaje. Nada más falso. En el aparato puede encontrarse a muchos cínicos que razonan en términos de poder y su número tiende a crecer a medida que el sistema envejece y sus engranajes se hacen más visibles. Pero, por lo general, los miembros del aparato son víctimas de la ilusión que ellos mismos producen. El adoctrinamiento al que son sometidos durante un largo período de formación los predispone a interiorizar la imagen del partido —representante de los intereses de los trabajadores y les suministra una explicación prefabricada de todos los hechos que pudieran cuestionarla. ¿Qué contestan al poder los intelectuales? Proviene de un medio burgués o se dejan llevar por su vanidad o se dejan influenciar por la propaganda occidental. ¿Que los obreros se rebelan? No son obreros sino canallas, borrachos, criminales de derecho común. Se invoca también a los vestigios de las antiguas costumbres, al revanchismo de los enemigos de clase (aunque para hablar de estos últimos se dice más bien "enemigos de la nación"), a la incapacidad de la gente para ver qué hay detrás de cada cosa. Se concede que hay ciertas dificultades pasajeras e incluso ciertos errores; pero el partido es capaz de sobremontarlos y de corregirlos a condición de conservar su papel de vanguardia, es decir, de tener en sus filas un alto porcentaje de obreros, de acoger a los mejores elementos de otras capas sociales, de aplicar la disciplina sin titubear, de reforzar la vigilancia y de orientar su política según los principios de la teoría científica de la sociedad.

Tal es en síntesis la visión del mundo del aparato. No puede pensarse a sí mismo sin el partido porque sin él no podría sobrevivir. Pero ¿qué ha llevado a los miembros de base a entrar en el partido? Las razones son tan numerosas como los individuos pero pueden clasificarse en varios arquetipos: Existen primeramente quienes, y hay que hacer notar que son numerosos, entran en el partido porque se les ha pedido que lo hagan y no tienen el valor de negarse e incluso han pensado que podría serles útil. Porque se olvida muy a menudo que cuando el porcentaje de miembros del partido en una empresa no es satisfactorio desde el punto de vista del aparato pide voluntarios para inscribirse. Se hace de un modo discreto y escogiendo las personas susceptibles de aceptar el ofrecimiento a

fin de no dar la impresión de que el partido está abierto a cualquiera. No cabe duda de que una invitación de esta índole formulada por quienes detentan un cierto poder, constituye una especie de chantaje. El aparato mejora de esta forma las estadísticas y amplía su influencia porque los que entran aunque lo hagan forzados se dan cuenta de que no tienen más remedio que seguir a la dirección, participar en los mítines y reuniones, votar las mociones que les son propuestas, aprobar y condenar so pena de verse expulsados (lo que por otra parte podría repercutir en su situación profesional). La dependencia al partido que en condiciones normales no resulta demasiado incómoda, en situaciones de crisis política se revela causante de una fuerte dependencia.

Hay también quienes entran al partido por su propia voluntad. De entre ellos hay que distinguir dos categorías. En el caso de los obreros, y más en general, en el de todos los que se encuentran en las capas bajas de la jerarquía social, un factor importante que empuja a ingresar en el partido es la voluntad de escapar al anonimato y de adquirir un reconocimiento en la empresa en la que se trabaja. En efecto, un miembro del partido pertenece en su empresa a una minoría que en ciertas ocasiones entra en contacto con personalidades locales o incluso nacionales y que tiene un cierto derecho a hablar. Quien lo hace con prudencia, sabe escoger las palabras, criticar a quienes pueden y deben ser criticados, se convierte en poco tiempo en un personaje conocido: puede resultar elegido —de hecho nombrado por el partido— para la dirección local del sindicato o de cualquier otra organización de masas e incluso para el comité del partido, y adquiere de esta suerte un peso proporcional a la cuota de poder que ejercita. En términos de macropolítica este poder es ínfimo, incapaz de modificar nada que valga la pena. Pero a escala de una empresa es un poder real: un dirigente sindical o un militante del partido puede dar su opinión en relación a la distribución de primas, de la asignación de alojamientos o de plazas en las casas de reposo; se le pide la opinión cuando se trata de amonestar a alguien, de decidir un ascenso o un despido. Por pequeño que sea el poder que se adquiere al hacerse miembro del partido no es despreciable, y este poder puede ser un móvil para el ingreso; esta gratificación puede verse además acompañada de otras ventajas más tangibles cuya relación con la pertenencia al partido es menos clara y a veces sistemáticamente ocultada. Al entrar en el partido junto con el carnet de miembro se reciben otras cosas. En el toma y daca que se establecen entre el aparato y el recién llegado, el primero da al segundo el derecho de adquirir una pequeña parcela de poder con el prestigio que le corresponde y

en contrapartida el segundo obtiene el reconocimiento de su poder total. Entre el aparato y los miembros del partido se crea así una complicidad que permite a estos satisfacer sus aspiraciones legítimas a un reconocimiento social y a aquel canalizar estas aspiraciones y convertirlas en uno de los apoyos de su poder utilizándolas para someter a la sociedad a una vigilancia que de otro modo no podría ejercer.

La situación de quienes han terminado sus estudios secundarios, y con más razón si se trata de los superiores, es algo distinta. Es de este sector del que el aparato recluta sus futuros miembros; y es de ahí de donde proviene los que más adelante serán investidos de un cierto poder. En este medio las propuestas directas son más infrecuentes. Cualquiera sabe que para hacer carrera, para ascender más allá de ciertos niveles de la jerarquía, hay que ser del partido. Y si los jóvenes imaginan que podrán escapar a un estatuto subalterno preservando su independencia de espíritu, la realidad se encargará de desmentirlo. Una vez terminados los estudios, una vez transcurridos los primeros meses de observación de la institución en que se trabaja, se comprende que si no se ingresa en el partido se está condenado a seguir ejercitando las tareas menores. Existen sólo ciertas excepciones a esta regla en ciertos sectores, por ejemplo en el caso de la investigación científica en que se puede hacer carrera sin necesidad de entrar en el partido. En suma, un joven que empieza a andar por sí solo en la vida se ve obligado a enfrentarse a una terrible disyuntiva: entrar en el partido o contentarse con los puestos inferiores. Cuanto mayor es su ambición de triunfar más probabilidades hay de que entre en el partido. Subjetivamente esta disyuntiva puede ser vivida de mil formas distintas que van desde el cinismo sin más hasta una adhesión incondicional y sincera a la imagen que el aparato da del partido ya que presagia un porvenir radiante. El único problema reside en que en los medios de la "intelligensia" el porcentaje de miembros del partido es elevado y la competencia es dura. No basta con asistir a las reuniones y alzar la mano en el momento adecuado, hay que dar muestras de una fidelidad a toda prueba. Hay que tener cuidado con lo que se dice y escoger los amigos con circunspección. Hay que subordinar la propia personalidad al rol hasta al extremo que la máscara y la cara sean una misma cosa. En una palabra: hay que automodelarse a la medida de los deseos del aparato. Sólo con esta condición se hace carrera de verdad y se alcanza la meta de ingresar en el aparato con un puesto de responsabilidad. Distorsionando en provecho propio las aspiraciones lógicas de la gente el aparato consigue no sólo crear los lazos de complicidad de los que antes hablábamos sino asegurar también su autorreproducción en tanto que aparato.

Todo esto permitirá comprender algo mejor las estadísticas que hemos citado y sobre todo aquellas que muestran el grado de implantación del partido en los diferentes grupos socioprofesionales y según los niveles de educación. Pero permite responder también a la pregunta que nos formulábamos: ¿el partido es realmente la fuerza dirigente o no hace más que ocultar el verdadero grupo que monopoliza el derecho de decidir en los problemas de importancia vital para el país? Acabamos de ver que el partido es una entidad muy heterogénea, que se encuentra atravesado por las fronteras que separan los diferentes grupos y trabajado por contradicciones. La línea fronteriza fundamental que es ocultada sistemáticamente por el discurso oficial, pasa entre el aparato y los militantes de base. Es el primero —las 270.000 personas que lo integran— quien detenta la totalidad de los poderes a todos los niveles. Son los segundos lo que con su presencia crea la ilusión de que el poder es ejercitado por el diez por ciento de la población y otorgan así al aparato una legitimidad, quizá más aparente que real, pero absolutamente imprescindible. Pero su papel no se reduce a esto. Algunos de sus militantes poseen una parcela de poder que les cede el aparato. Otros son candidatos a miembros del aparato. Todos sin excepción son ayudas sin las cuales no podría controlar a la sociedad de una manera eficaz.

El aparato no podría existir sin el partido. El partido no podría existir sin el aparato que le asegura la cohesión y la renovación. Mantiene la cohesión eliminando a todos aquellos que por su palabras o sus actos atentan contra su autoridad. Asegura la renovación haciendo funcionar el mecanismo que acabamos de describir. Pero el aparato no puede mantener la cohesión del partido asegurar su renovación más que gracias a que monopoliza el conjunto de instrumentos de la violencia, de la censura en un sentido lato. Porque puede expulsar del partido pero también despedir del trabajo. Porque puede reducir al silencio. Porque puede hacer ingresar en prisión. Porque puede sacar a la calle a la policía armada con ametralladoras. Esto todo el mundo lo sabe y es bueno para el aparato que se sepa. Pero sólo es útil recurrir a ello en ocasiones excepcionales. Para ejercer el poder cotidianamente estos instrumentos no bastan. A falta de un consenso inaccesible se hace preciso conseguir al menos la complicidad de una parte importante de la sociedad. Esto se consigue gracias al partido. Él es el instrumento más eficaz de coacción, de control y de mistificación que funciona a diario allí donde la gente pasa gran parte de su tiempo y dónde se gana la vida: en los lugares de trabajo.

El partido no es una fuerza dirigente. No es otra cosa más que un instrumento de dominación al servicio del aparato.

* Reproducido de "El Viejo Topo", Extra, Nº 2, 1978, Barcelona, pgs. 24 - 29. Título original: "El Partido: Fuerza dirigente o instrumento de dominación?".